

12-58

*IMPEDIMENTO
II*

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN: 555/2024
QUEJOSO Y RECURRENTE: EMILIO RICARDO
LOZOYA AUSTIN

TERCERA INTERESADA: MARÍA DE LOURDES
MENDOZA PEÑALOZA

Escrito inicial de recusación

Ministros Recusados:

Juan Luis González Alcántara Carrancá y

Jorge Mario Pardo Rebolledo

Motivo de la recusación: Artículo 51 fracción VIII de
la Ley de Amparo

URGENTE

CC. MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y

JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

H. PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN, parte quejosa y recurrente en el juicio de amparo señalado al rubro, acudo ante esta autoridad con la finalidad de exponer:

Que a través del presente escrito acudo a promover la **recusación de los Ministros JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ** para participar en la discusión y votación en el presente asunto. Lo anterior, con fundamento en los artículos 17 y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, fracción VIII y demás relativos de la Ley de Amparo; considerando que existen causas **objetivas de impedimento** que ponen en riesgo los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad que deben regir la actuación jurisdiccional, así como ante el riesgo de afectación a la garantía de un juez independiente e imparcial.

Reservándome mi derecho para formular dentro del término de ley, nuevas hipótesis de recusación sobre los ministros restantes de la Primera Sala.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que son del conocimiento de esta parte quejosa los siguientes hechos:

HECHOS

1. El 25 de enero de 2024 se admitió a trámite el presente Amparo Directo en Revisión, disponiéndose su envío a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2. Seguido el trámite correspondiente, el recurso fue turnado a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, incluyéndose por primera ocasión en la lista de asuntos a resolver en sesión del 25 de junio de 2025.
3. Con fecha 23 de junio de 2025, esta parte quejosa señaló causas objetivas de recusación del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para conocer de dicho Amparo Directo en Revisión.
4. Posteriormente, según me fue informado, en las primeras horas del día 25 de junio del 2025, la periodista Lourdes Mendoza, tercera interesada, difundió diversas publicaciones en su red social X en las que insinuó, de acuerdo a lo que se interpretaría de su publicación, que el proyecto correspondiente al amparo en comento, **ADR 555/2024 resultaba favorable a sus intereses, ya que afirmó que yo perdería, lo que implica que ella supuestamente ganaría.**
5. Asimismo, dejó entrever que, a su consideración, esa habría sido la razón por la cual se presentaron las solicitudes de impedimento por esta parte procesal, deseando aclarar que el suscrito en ningún momento tuvo acceso al proyecto de resolución correspondiente, ya que el proyecto del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de acuerdo a lo dicho por mis abogados, no había sido publicado previo a la sesión. Incluso hasta ahora no se ha publicado formalmente.
6. De resultar que el proyecto referido, efectivamente favorece a los intereses de la tercera interesada, se evidenciaría completamente la gravedad de esta circunstancia, pues la posesión de tal información por parte de la tercera interesada **solo podría explicarse por una actuación parcial e indebida de los Ministros integrantes de la Primera Sala, que orientan su actuar en beneficio de una de las partes, en concreto, de la aquí tercera interesada.**
7. Para sustentar lo anterior, se presenta el contenido de las publicaciones efectuadas por la tercera interesada en su red social X, en donde señala:

"El criminal confeso de @EmilioLozoyaAus con contubernio con tus redes de abogados, relaciones y cinismo, lograron hoy en la @SCJN atrasar lo inevitable. Sabías que ibas a perder, que quedarías como el mitómano que eres. Mi paciencia es infinita y mi convicción también. Seguimos adelante, yo Con La Frente en Alto y tú, tu mami Gilda y tu papi Lozoya Thalmann en la cloaca donde viven.

Nos leemos pronto @FGRMexico @ONUMujeresMX @article19mxca @RELE_CIDH Emilio , aunque siempre tienes quién le haga el trabajo sucio tus hijos se avergonzarán de ti."

2:40 p.m. 25 jun. 2025

<https://x.com/lumendoz/status/1937974312591564863?s=46>

(lo subrayado en negritas es propio)



Lourdes mendoza

@lumendoz

El criminal confeso de @EmilioLozoyaAus con contubernio con tus redes de abogados, relaciones y cinismo, lograron hoy en la @SCJN atrasar lo inevitable. Sabías que ibas a perder, que quedarías como el mitómano que eres. Mi paciencia es infinita y mi convicción también. Seguimos adelante, yo Con La Frente en Alto y tú , tu mami Gilda y tu papi Lozoya Thalmann en la cloaca donde viven.

Nos leemos pronto

@FGRMexico @ONUMujeresMX @article19mxca @RELE_CIDH Emilio , aunque siempre tienes quién le haga el trabajo sucio tus hijos se avergonzarán de ti.

2:40 p. m. · 25 jun. 2025 · 37 mil Visualizaciones

"Amanezco con la noticia de q el criminal confeso @EmilioLozoyaAus promovió 2 impedimentos. Espero sean desechados y que la justicia que espero recibir NO se siga dilatando.

Si desecharon @SCJN por notoriamente improcedente un impedimento promovido por la @FGRMexico respecto de una sentencia de fondo, cómo van a aplazar la votación Por el #ÍconoDeLaCorrupción de @EPN que sabe que va a perder!! Resuelvan hoy, lo pido públicamente."

9:42 a. m. · 25 jun. 2025

(lo subrayado en negritas es propio)

<https://x.com/lumendoz/status/1937899196494864824?s=46>



Lourdes mendoza
@lumendoz

Amanezco con la noticia de q el criminal confeso @EmilioLozoyaAus promovió 2 impedimentos . Espero sean desechados y que la justicia que espero recibir NO se siga dilatando.
Si desecharon @SCJN por notoriamente improcedente un impedimento promovido por la @FGRMexico respecto de una sentencia de fondo, cómo van a aplazar la votación Por el #IconoDeLaCorrupción de @EPN que sabe que va a perder!! Resuelvan hoy, lo pido públicamente.



La SCJN ordena liberar a Juana Hilda González, encarcelada por el Caso Wallace

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Juana Hilda González, encarcelada por el Caso Wallace, al considerar que la FGR no demostró la existencia de un delito.

El caso fue promovido por la FGR.

<https://www.proceso.com.mx/nacional/2025/6/11/a-scn->

La SCJN ordena liberar a Juana Hilda González, encarcelada por el Caso Wallace. En este caso, la FGR solicitó a la SCJN que ordenara la liberación de la acusada Juana Hilda González Lozoya. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la SCJN que ordenara la liberación de la acusada Juana Hilda González Lozoya. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la SCJN que ordenara la liberación de la acusada Juana Hilda González Lozoya. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la SCJN que ordenara la liberación de la acusada Juana Hilda González Lozoya.

9:42 a. m. · 25 jun. 2025 · 12,4 mil Visualizaciones

8. Luego de dichas publicaciones en redes sociales fue publicada una nota periodística por Arturo Ángel fechada el día 26 de junio del 2025, en la que se hizo público el proyecto de resolución del amparo en revisión 555/2025, el mismo que no fue publicado en la lista de sesión del 25 de junio de 2025 y que, conforme a lo anticipado por la tercera interesada, sería favorable a sus intereses. Lo anterior se puede corroborar con esta información:

<https://e-ntorno.com/proyecto-de-la-corte-desecha-amparo-de-lozoya-y-su-denuncia-de-odebrecht-se-tambalea/>



desecha amparo de Lozoya y su denuncia de Odebrecht se tambalea

DESTACADAS NOTICIAS

Publicado

junio 25, 2025

Autor

ARTURO ÁNGEL

🔍 X +

**A un paso de quedar firme primera sentencia civil por falsedades en la denuncia del exdirector de Pemex. Defensa de Lozoya solicita que dos ministros se desistan de votar el caso por posible conflicto de interés.*

Por: Arturo Ángel

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene listo un proyecto que desecha de forma definitiva un amparo que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, intentó promover en contra de una sentencia en la que fue condenado por daño moral al no haber podido sostener señalamientos que hizo en contra de una periodista en su denuncia por el caso Odebrecht.

De aprobarse dicho proyecto, al que este medio tuvo acceso, Lozoya tendría que pagar medio millón de pesos a la periodista Lourdes Muñoz por haber asegurado, de forma falsa o sin

Recorre

A diferencia del referido periodista, y la tercera interesada Lourdes Mendoza, esta parte quejosa no tuvo acceso a dicho proyecto de resolución, siendo hasta ese momento de publicación que tuve noticia de lo afirmado por la tercero interesada respecto a la existencia de un proyecto que favorecería a sus intereses.

9. Para esta parte quejosa, los hechos previos son evidencia de que la tercera interesada mostró conocer el sentido y contenido del proyecto que se sometería a votación respecto al ADR 555/2024, en franca ventaja respecto del aquí quejoso, pues dicho proyecto, de acuerdo a lo afirmado por mis abogados, no fue puesto a disposición ni de esta parte quejosa ni del público, en la lista de sesión. La publicación de proyectos de sentencia que serán materia de sesión suele ocurrir con normalidad en atención a la normativa que rige la SCJN y la Ley de Amparo, pero en este caso, dicha publicación, NO SE DISPUSO, por lo que cualquier acceso al mismo, resulta indebido, mostrando actuación imparcial e ilegal de personal integrante de la Primera Sala.

Llamando la atención que, de acuerdo a la información que se tiene, **dicha difusión se realizó una vez que el proyecto lo tenían en sus ponencias entre otros los ministros que se recusan (JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCANTARA CARRANCÁ Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO)**

10. Por otra parte, debe resaltarse que la tercera interesada tuvo conocimiento del impedimento previo promovido por esta parte quejosa de una forma que, al menos, brinda sospecha de su injerencia en la tramitación del mismo. En efecto, el día 25

de junio del 2025 a las 9 horas con 42 minutos, Lourdes Mendoza publicó en sus redes sociales que se habían promovido dos impedimentos.

<https://x.com/lumendoz/status/1937899196494864824?s=46>



Lourdes mendoza
@lumendoz

...

Amanezco con la noticia de q el criminal confeso @EmilioLozoyaAus promovió 2 impedimentos . Espero sean desechados y que la justicia que espero recibir NO se siga dilatando.
Si desecharon @SCJN por notoriamente improcedente un impedimento promovido por la @FGRMexico respecto de una sentencia de fondo, cómo van a aplazar la votación Por el #ÍconoDeLaCorrupción de @EPN que sabe que va a perder!! Resuelvan hoy, lo pido públicamente.



La SCJN ordena liberar a Juana Hilda González, encarcelada por el Caso Wallace

La Sala IV del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Juana Hilda González Lomedi, detenida por el Caso Wallace, al considerar que la detención era ilegítima.

Proceso.com.mx

<https://www.proceso.com.mx/nacional/2025/6/11/la-scn>

a Sala.

ordenar a la quejosa el amparo físico y llano (---). En este caso, la protección constitucional obliga a ordenar la libertad de la quejosa Juana Hilda González Lomedi."

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la SCJN de este asunto debido a que planteó un impedimento contra el

ministro presidente Norma Lucía Piña Hernández desechó el planteamiento de aplazamiento de la FGR, por notoriamente improcedente, por lo que la Primera Sala sí pudo discutir el asunto.

La Lomedi fue detenida desde el 10 de enero de 2016 y desde abril de 2016.

mientras en el Centro Federal de Readaptación Social (semefar) de Morelia, por lo que su liberación conlleva una vez que la resolución emitida por la Sala IV que debe ser emitida.

ELABORACIÓN: JUAN CARLOS ANTELOZ/PROCESO

Compartir

9:42 a. m. · 25 jun. 2025 · 12,4 mil Visualizaciones

11. Lo relevante de esta publicación es que para el momento en que dicha periodista manifestó haber tenido conocimiento de la interposición del impedimento de dos ministros, esa información, de acuerdo a lo que me han informado, no estaba disponible para las partes. Es decir, no había sido notificada la tercera interesada ni a ninguna de las partes. Así se advierte del expediente electrónico del impedimento 43/2025, como se muestra a continuación:

Brazos

PARTES					
PORTE	NOMBRE	POR LISTA	PERSONAL	POR LISTA DERIVADA DE PERSONAL	POR OFICIO
AUTORIDAD	SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN				25/06/2025 15:03:21
SOLICITANTE	EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN, POR CONDUCTO DE QUIEN SE OSTENTA COMO SU APODERADO ALEJANDRO ROJAS PRUNEDA				25/06/2025 15:03:05
AUTORIDAD	MINISTRO ALFREDO GUTIERREZ ORTIZ MENA				25/06/2025 11:49:55
AUTORIDAD	MINISTRA ANA MARGARITA RIOS FARJAT				25/06/2025 11:44:55
AUTORIDAD	PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN				25/06/2025 11:41:55
AUTORIDAD	TITULAR DE LA OFICINA DE ESTADÍSTICA JUDICIAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN				25/06/2025 11:38:55
AUTORIDAD	TITULAR DE LA OFICINA DE CERTIFICACIÓN JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN				25/06/2025 11:36:55
ÓRGANO JURISDICCIONAL RELACIONADO	NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO				25/06/2025 11:19:50

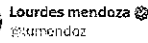
12. A ello se suma que, según me fue informado por mi equipo de abogados que acudieron al Máximo Tribunal el día 25 de junio, durante la mañana de ese día no se publicó en ninguna lista el acuerdo de impedimento, sino que estos acuerdos fueron incorporados—así me informaron—hasta la tarde de ese día, lo que demuestra que la tercera interesada ha tenido un acceso a información privilegiada y que, nuevamente, pone en duda el actuar imparcial de los Ministros de la Primera Sala que debe resolver sobre el Amparo Directo en Revisión 555/2024.
13. Salvo error, se puede afirmar que frente a tales acontecimientos, ningún Ministro de la Sala (dentro de los que destacan **JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCANTARA CARRANCÁ Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO**) adoptó medidas para contrarrestar o disminuir el impacto de esta divulgación; tampoco se realizó pronunciamiento público alguno que aclarara que se trataba de un documento carente de carácter oficial, ni se dispuso, hasta donde se tiene conocimiento, la apertura de una investigación orientada a deslindar responsabilidades o salvaguardar la integridad del procedimiento. Tal inacción propicia una apariencia objetiva de parcialidad en favor de la tercera interesada, en la medida en que se toleró que una de las partes presuntamente tuviera material que le permitiera tener información con **potencial de influir en la opinión pública o en la percepción del litigio**, sin que se garantizaran condiciones de igualdad procesal para las demás partes.
14. La tercera interesada ha continuado evidenciando estas injerencias indebidas ante la Primera Sala pues el 29 de julio de 2025 publicó tener un interés manifiesto en que sean precisamente los Ministros y Ministras que al día de hoy integran la

Primera Sala quienes resuelvan el Amparo Directo en Revisión, explícitamente indicó:

"Hoy denuncié ante la @FGR a Alejandro Rojas Pruneda, abogado del delincuente confeso @EmilioLozoyaAus por haber dilatado la votación del desechamiento del último recurso que presentó en favor de su "cliente" con chicanas que en realidad son delitos. Como ciudadana **merezco que sea esta @SCJN la que ponga punto final a mi asunto**. No pararé hasta tener #justicia completa por el daño que me causaron las MENTIRAS de este cobarde y su grupo de "abogados" que por cierto han demostrado ser de su misma calaña."

(lo señalado en negritas es propio)

<https://x.com/lumendoz/status/1950349224643584476>



ACUSE DENUNCIA DE HECHOS

24 JUL. 2025

[illegible]

1. Como en el procedimiento pedagógico los cambios curriculares en su desarrollo tienen el dinamismo de agentes de una nueva demanda del sujeto EMILIO RICARDO GONZALEZ-ROSA, *Agencia y desarrollo curricular en la escuela*

6:14 p. m. · 29 jul. 2025 · 12.4 mil Visualizaciones

- “Presidenta @Claudiashein dejo aquí mi testimonio SIN MIEDO. Urge que el Caso Lozoya se resuelva @SCJN, para hacer justicia en México @ONU_es @ONUMujeres @CIDH @sip_oficial @USAGov @USAGovEspanol @WhiteHouse @article19mxca @SecRubio @ChrisLandauUSA @USAmbMex”

(TRANSCRIPCIÓN DEL VIDEO HECHA POR CUENTA PROPIA)

...Desde la semana pasada Emilio Lozoya logró que la suprema Corte de Justicia de la nación evitar a votar el desechamiento de su proyecto de amparo. El caso estaba en la lista y esa lista no se cumplió. Descarriló Emilio Lozoya Austin a la primera sala de la suprema Corte de Justicia de la nación de la mano de su abogado Rojas Pruneda. Me extraña. La verdad es que viniendo de Emilio Lozoya no me extraña nada, pero ¿cómo es que le hizo para descarrilar a la primera sala? Eso es lo verdaderamente grave. ¿Ha utilizado el sistema mexicano a su capricho? **Tengo la esperanza de que los actuales ministros tengan compromiso con México y que se impongan porque aún hay tiempo, les queda en la primera sala de la suprema Corte de Justicia de la nación, 2 sesiones antes de que se vayan.**

Soy Lourdes Mendoza y desde aquí hago un llamado urgente a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la ONU, a la ONU Mujeres, a la Sociedad Interamericana de prensa, a todas las ONGS de periodistas, así como al Gobierno de los Estados Unidos. ¿Quién destapó el caso de Odebrecht? Para que volteen a ver el caso de Lozoya, Odebrecht, repito, cobró la libertad de decenas de mujeres y de hombres de poder en toda Latinoamérica. En México está demostrado que hubo sobornos millonarios de Odebrecht a Emilio Lozoya y su familia. Los acusó la Fiscalía General de la República, la UIF y Pemex. Todo está documentado y hoy nuevamente te dejas ver sin el menor temor, presumiendo que eres intocable. Emilio, estoy aquí como el primer día con la frente en alto, lista para seguir defendiendo mi nombre y mi dignidad, lista para seguir publicando la verdad tú para salvar la cárcel de la mano de tu padre y con la complicidad de tu madre. Convertiste en prófuga de la justicia a tu esposa e hiciste pedazos el apellido de tus hijos. ¿Si fuiste capaz de hacer esto con tu propia sangre, eres capaz de cualquier cosa? Soy Lourdes Mendoza y les agradezco por haberme escuchado."

<https://x.com/lumendoz/status/1940043673879666843?s=46>

16. Como si se tratara de un mandato de la tercera interesada a la Primera Sala, ésta última actuó en seguida –el 10 de julio de 2025– listando en su última sesión (prevista para el 13 de agosto de 2025) el ADR 555/2024 sin siquiera haber sido sesionado o resuelto el impedimento 43/2025 planteado por esta parte quejosa, lo que, hasta donde tengo conocimiento, no solo es un actuar sumamente irregular de la Sala sino que abona a la aparente (para este punto, ya evidente) pérdida de imparcialidad de los ministros y ministras que la integran.
17. El pasado 6 de agosto de 2025, fue sesionado ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el impedimento 43/2024 y ello, como era esperable, implicó una nueva manifestación pública de la tercera interesada, quien siempre se

ha valido de su posición en medios de comunicación para litigar el caso pretendiendo influir en la opinión pública y, particularmente, en la opinión de las y los juzgadores que han conocido del asunto.

18. El 7 de agosto siguiente, en entrevista con el comunicador Ciro Gómez Leyva, la tercera interesada manifestó, entre otras cosas, que:

"... el punto es que presenté esa denuncia, y en la increíblemente vi (sic) déjenme decirles que me llaman en la suprema corte de Justicia de la nación como "El milagro", porque nadie puede entender como es que en la corte volvieron inmediatamente a listar el caso de las impugnaciones de Lozoya. Y Sabes qué es lo más increíble que en México y te consta a ti también, aunque nos cueste, llega la justicia y como nos ha dicho Coello, Trejo muchas veces. La justicia tarda, pero llega. ¿Y por qué lo digo yo? Porque no tuve que mover un dedo, simplemente le cayó el proyecto a la Ministra Jazmín Esquivel. Ella hace un proyecto de desechamiento diciendo que son frívolos y que son sin sustentos los de este lo que habían metido Emilio Lozoya, para que no pudieran 2 de los ministros sesionar. ¿Y entonces? Pues es una derrota exclusiva que se pueden anotar, pues tanto Emilio Lozoya como su abogado Rojas Pruneda pues no le temen a nadie ni al ridículo."

Entrevista disponible en: <https://youtu.be/GY6rv3lmJ4o?si=nKbtceb5oQOMi5dX&t=89>

(lo resaltado en negritas y subrayado es propio)

19. De esas manifestaciones resulta clarísimo el actuar irregular de la Primera Sala de la SCJN en favor de la tercera interesada, actuación que incluso ella reconoce como "milagrosa". Pero más aún reconoce que este caso "no tuvo que mover un dedo", infiriéndose que en otros momentos del asunto, **sí ha tenido que interferir para asegurar un resultado a su favor.**
20. En últimas horas, este 8 de agosto de 2025, la periodista agradeció a "la Corte" por haber listado su asunto para sesionarse en la última Sesión de la Primera Sala en la que, según su dicho, "se votará el proyecto que ordena desechar el último recuso chicanero de @EmilioLozoyaAus en el juicio de daño moral". **De nuevo, demostrando conocer el contenido y sentido del proyecto que sería sometido a votación. Específicamente señaló:**



Post



Lourdes mendoza
@lumendoz

El próximo 13 de agosto será un día histórico para México, y también para mí. Será la última sesión de la @SCJN actuando en Salas y se votará el proyecto que ordena desechar el último recurso chicanero de @EmilioLozoyaAus en el juicio de daño moral que le gané.

Gracias a la Corte por abrir espacio a este asunto y espero por fin que ponga punto final a este asunto que tanto me ha dejado en resiliencia y aprendizaje.

TOTAL DE ASUNTO

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PRIMERA SALA

UNTOS QUE SE VERÁN EN LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE 13 DE AGOSTO DE 2025 Y SIGUIENTES.

SEÑOR FOMENTO ALFREDO GUTIERREZ ORTIZ MORALES
DETARSA QUE DA CUENTA EFECTUARIA DE LA SENTENCIA

UNTOS LISTADOS CON ANTERIORIDAD

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

MAESTRO CAMILO RAZOEL VERNONEL ZAPATA

QUINTOS

ACT. B

QUINTOS: ENRIQUE RICARDO LOZOA AUSTIN NOVENA 33
(RECURRENTE)

TERCERA INTERESADA: MARÍA DE LOURDES MENDOZA PLAMAZA (RECURRENTE DE LA CH ADHESIVA)

ACTO RELEVANTE: LA SENTENCIA DE TADA EN EL TOCA 491 2022

TRIBUNAL DE ORDEEN: SEXTO TRIBUNAL FOLGADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

EXP. ORIGIN: 11/11/2021

En última sesión de la Corte se resolverá pleito Lozoya-Mendoza

Jurista libera a solista de los delitos

7:20 a.m. · 08/08/25 · 2k visualizaciones

<https://x.com/lumendoz/status/1953808604173041968?s=46>

21. De ahí que se estimen actualizados otros motivos que cuestionan la imparcialidad de otros de los ministros integrantes de la Primera Sala que tienen relaciones o intereses en común con la tercera interesada y que ponen en duda su actuar imparcial, es por ello que además de los ministros recusados, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá, esta parte procesal se reserva su derecho a recusar a otros ministros.
22. Por lo que hace al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, se estima que, adicionalmente a lo señalado respecto a su actuación como integrante de la Primera Sala, es del conocimiento de esta parte quejosa que en su oportunidad, fue propuesto como candidato primero a Consejero de la Judicatura Federal y después a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos ocasiones por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien fue finalmente ratificado por el Senado de la República en el 2011.

23. Esta relación cercana entre el ministro Pardo y el expresidente Calderón (quienes se sabe, compartieron espacios en la Escuela Libre de Derecho), es relevante para este caso —con tintes jurídicos y, particularmente, políticos— precisamente, por el impacto que su resolución puede tener sobre la situación jurídica de otras personas señaladas denunciadas por el aquí quejoso, entre las que se encuentran personas íntimamente relacionadas con el expresidente, persona cercana del ministro que ahora se recusa.
24. Este aspecto no es menor. El criterio que se ha sostenido por el Noveno Tribunal Colegiado —denunciado por Gómez Bruera, como un Tribunal de consigna—, revierte la carga de la prueba al suscrito sobre las afirmaciones contenidas en una Denuncia de naturaleza penal, siendo que ello corresponde al Ministerio Público a través de la labor investigativa que es de su exclusiva facultad o bien a quien afirma que las manifestaciones son falsas. Mantener dicho criterio intocado, no solo beneficiaría a la tercera interesada —sería ingenuo pensar que así es—, **sino que impactaría de forma benéfica exculpando al resto de las personas señaladas en la denuncia, dentro de ellos, el expresidente Calderón.**
25. En la denuncia presentada por el suscrito ante la FGR se señaló que en el sexenio de Felipe Calderón se gestaron sólidos esquemas de corrupción y en este tema se involucra también al entonces secretario de Energía, José Antonio Meade, quien a su vez fue colaborador del expresidente Felipe Calderón.
26. Si bien es cierto la litis natural de este asunto versa sobre si los dichos manifestados por el suscrito en contra de María de Lourdes Mendoza Peñaloza son fuente de daño moral, es inconcuso que el pronunciamiento que se haga sobre el particular podría beneficiar o perjudicar a las demás personas denunciadas. En ese caso y para efecto de la presente solicitud, **se considera que el presente asunto beneficiaría o perjudicaría de manera indirecta a personas relacionadas con el expresidente Calderón y a él mismo quien tiene una clara cercanía con el Ministro.**
27. Es decir, tal situación a juicio de esta parte procesal pone en duda la imparcialidad con la que se debe de conducir, ya que una eventual resolución favorable a la tercera interesada podría beneficiar a la demás personas señaladas dentro de la misma denuncia que comparten cercanía con el ministro Pardo Rebolledo.
28. Respecto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, éste ha sido objeto de señalamientos públicos —especialmente por parte del investigador Hernán Gómez Bruera— respecto a su presunta cercanía con el poder ejecutivo y con el ex consejero Julio Scherer, así como respecto a su comportamiento como juez con

afinidades políticas más allá del ámbito estrictamente constitucional. Estos cuestionamientos sugieren la posibilidad de una parcialidad influenciada externamente.

29. A dicho ministro también se le ha señalado por parte del periodista Hernan Gomez Bruera, por una relación de complicidad y facilitación en la resolución de asuntos con el exconsejero de la Presidencia Julio Scherer, aunado ello, el Ministro González Alcántara Carrancá mantiene una relación familiar con uno de los socios (Daniel Carrancá) del señalado abogado, quien, de manera particularmente relevante para este caso, se ha inmiscuido en la resolución judicial sobre personas denunciadas en la denuncia que es fuente de daño moral. En particular, del entonces senador Cabeza de Vaca.

Esto es importante ya que se ha documentado y se probará en la etapa correspondiente, sobre el interés ilegítimo que tuvo el exconsejero de la Presidencia Julio Scherer en casos en donde he estado involucrado.

Así como también, por la instrumentalización que el señor Julio Scherer realizó en la persona de Juan Luis González Alcántara Carrancá para favorecerlo de manera indebida en asuntos de su interés.

30. Esta circunstancia instaura una duda razonable sobre la imparcialidad objetiva del tribunal en este caso. El aquí quejoso no puede quedar expuesto al riesgo de una decisión procesal bajo la sombra de un poder judicial con posibles interferencias políticas o institucionales. En este sentido, resulta imperativo salvaguardar el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente, conforme a los estándares constitucionales y al principio de igualdad procesal.

OPORTUNIDAD

Esta recusación se presenta en tiempo y forma, toda vez que la Ley de Amparo no establece una temporalidad específica para su promoción, sino que se entiende procedente cuando aparecen las causas de recusación o se toma conocimiento de ellas previo a la emisión de la sentencia que corresponda. En atención a ello y en pleno y legal cumplimiento a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se ha determinado que las causas de impedimento o recusación pueden plantearse en cualquier etapa del procedimiento, se promueve en tiempo la presente recusación.

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 119/2018 (10a.), así como la diversas tesis de jurisprudencia del Pleno P./J. 7/2024 (11a.), que se citan a continuación:

Registro digital: 2018465

Instancia: Segunda Sala

Décima Época

Materias(s): Común

Tesis: 2a./J. 119/2018 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6o, Noviembre de 2018, Tomo II, página 1114

Tipo: Jurisprudencia

RECUSACIÓN DE LOS JUZGADORES DE AMPARO. PUEDE PLANTEARSE AUN DESPUÉS DE QUE EL ASUNTO EN EL QUE SE FORMULE SE HAYA LISTADO PARA SER VISTO EN SESIÓN.

El artículo 51 de la Ley de Amparo establece diversas causas de impedimento por las cuales los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, pueden ser recusados por las partes para conocer de los asuntos puestos a su consideración, conforme al artículo 52, párrafo segundo, del mismo ordenamiento. Al respecto, **el legislador no previó un límite temporal para plantear las recusaciones, de lo que se infiere que pugnó para que las partes, en cualquier etapa procesal del juicio, cuando adviertan en el juzgador alguna condición personal que lo motive a actuar o resolver en determinado sentido, puedan manifestarlo y, en su caso, obtener una decisión que lo inhiba de conocer del asunto.** Por tanto, el derecho de las partes para recusar no se agota con el listado para sesión del asunto en el que se alegue la configuración del impedimento, sobre todo porque se advierte que la intención es garantizar que, incluso, hasta el último momento previo a la toma de la decisión respectiva, sea viable apartar del conocimiento del asunto al juzgador que incurra en alguna causa de impedimento para que lo haga otro, tomando en cuenta que **el derecho a la justicia imparcial constituye una condición esencial de la función jurisdiccional.**

Contradicción de tesis 220/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito y Cuarto en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 17 de octubre de 2018. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Iveth López Vergara.

RECUSACIÓN EN EL AMPARO. LAS PARTES PUEDEN AMPLIAR LAS CAUSAS DE IMPEDIMENTO RESPECTO DE LAS ALEGADAS ORIGINALMENTE, POR LO QUE NO PROCEDE DESECHAR EL ESCRITO RELATIVO POR EL HECHO DE QUE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRE LISTO PARA SU RESOLUCIÓN, SIEMPRE QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS QUE EXIGEN LA LEY DE AMPARO Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si las partes pueden ampliar las causas de impedimento respecto de las que hayan alegado previamente contra los mismos juzgadores de amparo, una vez turnado el expediente al Magistrado instructor para la celebración de la audiencia relativa, pero sin que exista aún pronunciamiento en torno a si se actualiza alguna causa de impedimento.

Criterio jurídico: Las partes pueden ampliar causas de impedimento siempre y cuando cumplan con los requisitos que exigen la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.

Justificación: **La Ley de Amparo no impone un límite temporal para invocar un impedimento**, de lo que se infiere que en cualquier etapa del juicio, incluso cuando ya se haya abierto un expediente de impedimento contra un juzgador específico, **las partes pueden manifestar si se encuentra en alguna condición personal que lo motive a actuar o resolver en determinado sentido y, en su caso, de obtener una decisión que lo inhíba de conocer del asunto**, para satisfacer el derecho de acceso a la justicia en su vertiente de imparcialidad. Por tanto, cuando el promovente amplíe las causas de impedimento éstas deben atenderse, aun cuando los juzgadores de amparo ya hayan rendido su informe y se haya turnado el expediente al Magistrado instructor para la celebración de la audiencia relativa. Es decir, no debe desecharse el escrito de ampliación por el solo hecho de que el impedimento alegado ya se encuentre listo para su resolución, pues no es una razón para que deje de prevalecer el derecho de acceso a la justicia reconocido en los artículos 17 constitucional y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto, sin perjuicio de que se califique el escrito de ampliación en torno a si se cumplen los requisitos que exige la ley de la materia, que atienden a que las recusaciones han de estar soportadas en elementos objetivos y verídicos, para satisfacer ese mismo derecho fundamental, inhibiendo prácticas dilatorias, en aras de que la impartición de justicia sea pronta. Además, debido a la regla de supletoriedad prevista en el artículo 20., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la ampliación de la recusación debe atender a lo dispuesto en el artículo 50 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así que sólo puede formularse si se trata de causas supervenientes, pues de lo contrario se impone desecharla de plano, en términos del artículo 52 de ese Código; en la inteligencia de que, respecto de la causa de impedimento superveniente debe ordenarse dar vista a la persona en la que puede recaer, ya que la ley exige que debe solicitársele un informe, atendiendo en lo concerniente a lo previsto en el artículo 6o de la Ley de Amparo.

CONSIDERACIÓN PREVIA DE LA RECUSACIÓN

Es pertinente enfatizar que, a partir de las investigaciones difundidas por el académico Hernán Gómez Bruera, en las que se documentaron elementos que sugieren que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito habría actuado como un “tribunal de consigna” en diversos casos de interés del exconsejero jurídico del ejecutivo o de la Presidencia de la República, esta parte quejosa adoptó la firme determinación de extremar

la vigilancia y el análisis sobre la trayectoria, vínculos y actuaciones previas de las y los juzgadores que deban conocer de asuntos en los que me encuentre directamente involucrado, así como aquellos que afecten a mi familia.

Dichos antecedentes ponen en evidencia la posibilidad real de injerencias indebidas de actores con poder político o institucional sobre integrantes del Poder Judicial de la Federación, lo que compromete de manera directa la garantía de imparcialidad judicial prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta circunstancia obliga a no permanecer pasivo ante la eventual intervención de juzgadores con intereses que puedan condicionar su actuación, evitando así que la detección de tales conflictos se produzca de manera tardía, cuando los daños procesales ya sean irreversibles.

En tal sentido, la verificación previa y exhaustiva de la independencia e imparcialidad de quienes integren los órganos jurisdiccionales que resuelvan mis asuntos no solo es un ejercicio legítimo de defensa, sino una exigencia derivada del derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad y del principio de juez independiente e imparcial que rige todo proceso judicial.

CONSIDERACIONES

Tal como se ha señalado en los hechos de esta recusación, los asuntos vinculados con el aquí quejoso, derivados de los casos Odebrecht y Agronitrogenados, han sido ampliamente difundidos por medios nacionales e internacionales debido a su relevancia política y social. La trascendencia pública de estos procesos, sumada a hechos como la demanda civil por daño moral promovida por la periodista Lourdes Mendoza Peñaloza contra el quejoso, revela que estos litigios no sólo se han desenvuelto en sede judicial, sino también en un entorno altamente mediatizado y susceptible de presiones políticas externas.

A ello se suma que el procedimiento de reparación del daño –materia del recurso de– se origina de filtraciones a medios de comunicación sobre extractos de denuncias formuladas por el quejoso, vulnerando el deber de reserva y sin que, a la fecha, se haya esclarecido la identidad de quienes realizaron dichas filtraciones, lo que apunta a posibles manipulaciones del expediente con fines extrajudiciales.

En este contexto altamente mediatizado y, en particular, frente a las influencias de la tercera interesada como periodista, se acentúa la obligación de los órganos jurisdiccionales de actuar con un estándar reforzado de imparcialidad. De modo que no basta con que el juzgador sea interno y subjetivamente imparcial; es indispensable que se mantenga la apariencia objetiva de neutralidad frente a todas las partes involucradas, incluyendo terceros que hayan resultado señalados por el aquí quejoso.

Así, en este caso, se estima que la percepción social sobre la independencia judicial se encuentra especialmente comprometida, por lo que es necesario aplicar un estándar diferenciado y reforzado para garantizar que todas las decisiones jurisdiccionales se adopten con la mayor transparencia, justificación legal y ausencia de prejuicio. Solo bajo esas condiciones puede preservarse la legitimidad del proceso y la confianza en la administración de justicia.

En este contexto, caracterizado por la influencia de factores políticos y mediáticos en el desarrollo de los procesos, resulta indispensable aplicar un estándar reforzado de imparcialidad judicial. Tal estándar exige no solo que la persona juzgadora actúe con neutralidad subjetiva, sino que también se preserve la **apariencia objetiva de independencia** frente a todas las partes involucradas, incluidas aquellas que, como la tercera interesada, han intervenido activamente en la esfera pública.

El respeto a este principio implica que las resoluciones se adopten sin interferencias externas, presiones mediáticas ni tratos diferenciados, garantizando un proceso justo, transparente y plenamente apegado al debido proceso legal, conforme a los artículos 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona a acceder a una justicia independiente e imparcial, lo que obliga a las autoridades jurisdiccionales a conducirse con plena neutralidad y sin favorecer directa o indirectamente a alguna de las partes en litigio.

La Primera Sala de este alto Tribunal, en el precedente del Amparo en Revisión 131/2011, ha precisado que el principio de imparcialidad judicial *"es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser **ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia** y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas."*¹

¹ Que se expresó en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.) con registro digital: 160309; emitida por la Primera Sala de rubro: IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.

En la misma tónica, la Corte IDH ha dicho sobre el principio de imparcialidad que es una garantía del debido proceso, señalando que *"se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite a su vez, que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática"*.²

Desde su perspectiva objetiva, el principio de imparcialidad exige que las y los juzgadores se inhiban de conocer un asunto cuando concurren circunstancias que puedan poner en entredicho su neutralidad o proyectar una apariencia de falta de objetividad. Tal apariencia no se limita a los vínculos personales con las partes procesales directas, sino que también abarca relaciones, afinidades o actitudes de tolerancia hacia personas con intereses manifiestos en el resultado del litigio, como ocurre en el presente caso con la periodista Lourdes Mendoza, quien comparece como recurrente adhesiva.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que:

147. El juez o tribunal debe separarse de una causa sometida a su conocimiento **cuando exista algún motivo o duda que vaya en desmedro de la integridad del tribunal como un órgano imparcial**. En aras de salvaguardar la administración de justicia se debe asegurar que el juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.³

Como se ha señalado en el apartado de hechos, días antes de que la Sala volviera a listar el recurso de revisión, la mencionada periodista hizo diversas manifestaciones en las que evidenció tener conocimiento privilegiado tanto del Amparo Directo en Revisión como de la recusación formulada. Aunado a ello, se difundió públicamente una nota que contenía una versión del proyecto de resolución, documento que, incluso ahora, no es de acceso público oficial antes de su discusión.

Este hecho constituye una filtración indebida de información reservada, que podría afectar la percepción de objetividad del proceso y dar lugar a una ventaja indebida para alguna de las partes.

Lo preocupante es que ninguno de los integrantes de la Sala emitió pronunciamiento alguno para rechazar o aclarar el contenido divulgado, ni se ordenó una investigación para determinar si la filtración provenía del propio órgano jurisdiccional o si dicha versión del proyecto era auténtica. Esta omisión —en un contexto donde se trata de información

² Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 171

³ Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 147

potencialmente favorable a una de las partes y de un asunto de interés público— genera una apariencia objetiva de pérdida de imparcialidad. La inacción de la Sala frente a un acto que afecta la igualdad procesal y la reserva de la deliberación judicial implica, al menos, indiferencia ante una conducta que favorece abiertamente a una de las partes.

Aunado a ello, la pasividad de la Sala frente a las recientes manifestaciones de la tercera interesada —de 29 de julio de 2025— que pretenden influir públicamente en el sentido de la resolución refuerza el argumento de que existe una apariencia objetiva de falta de neutralidad. Al no emitir un pronunciamiento que desmarque al tribunal de dichas declaraciones, ni adoptar medidas para garantizar la equidad procesal, se genera la percepción de que los pronunciamientos de una de las partes son tolerados o incluso tomados en consideración.

Además, diversas investigaciones periodísticas y publicaciones académicas han documentado interferencias de personas ajenas al Poder Judicial de la Federación en la tramitación y resolución de asuntos judiciales de alto impacto, como el caso del aquí quejoso, Emilio Ricardo Lozoya Austin.

Entre ellas, destaca la actuación atribuida a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, cuya influencia ha sido objeto de investigaciones internas por parte del propio Consejo de la Judicatura Federal. Estas indagatorias, derivadas de señalamientos sobre presiones indebidas y posibles “tribunales de consigna”, se suman a la relevancia de que se mantenga un escrutinio estricto sobre la independencia judicial en casos de interés público.

Es particularmente relevante que el exconsejero Scherer mantiene vínculos profesionales con personas relacionadas familiarmente con el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, lo que refuerza la necesidad de extremar cautela para evitar conflictos de interés reales o aparentes.

La afectación a la dimensión objetiva del principio de imparcialidad no exige demostrar que las y los Ministros hayan actuado con sesgo en los hechos específicos del asunto; basta con que existan elementos que, desde una perspectiva objetiva, generen una **apariencia razonable de falta de imparcialidad**, conforme al estándar desarrollado por la **Corte Interamericana de Derechos Humanos**.

El concepto de imparcialidad judicial trasciende la mera ausencia de un interés directo en el litigio, pues también impone la obligación de evitar cualquier manifestación, acto o circunstancia que pueda proyectar la imagen de un juzgador parcial, a la luz de los estándares reconocidos tanto en el ámbito nacional como internacional.

Cuando un tribunal permite la divulgación indebida de información procesal sujeta a reserva, sin adoptar medidas para salvaguardar la igualdad entre las partes, se erosiona la confianza de la sociedad en la administración de justicia y se altera el equilibrio procesal indispensable para un juicio justo.

En este sentido, el **artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo** dispone que las personas juzgadoras deben excusarse de conocer un asunto cuando exista una causa que comprometa su imparcialidad, estableciendo expresamente dicha fracción:

Artículo 51.- Los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados y magistradas de circuito, los jueces y juezas de distrito así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo deberán de excusarse cuando ocurra cualquier de las siguientes causas de impedimento.

VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que impliquen **elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad**.

En concordancia con los estándares interamericanos, esta disposición legal establece que la sola presencia de **elementos objetivos** que evidencien un riesgo de pérdida de imparcialidad es suficiente para que se configure la causal de recusación. Ello no implica emitir un juicio sobre la integridad moral de la persona juzgadora cuya separación se solicita, sino aplicar un mecanismo procesal destinado a garantizar la confianza pública en la actuación del órgano jurisdiccional que habrá de emitir la decisión definitiva en el caso sometido a su conocimiento.

En este contexto, la **omisión de pronunciarse o actuar** frente a la divulgación indebida del proyecto de resolución constituye, por sí misma, un hecho que compromete la apariencia de neutralidad de la Sala en su conjunto. Este proceder actualiza una causa legítima de recusación, en la medida en que genera una duda razonable respecto de la capacidad de sus integrantes para resolver el asunto con plena objetividad e independencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Amparo.

A lo anterior se añaden las relaciones personales y profesionales —descritas previamente— de los Ministros **Jorge Mario Pardo Rebolledo** y **Juan Luis González Alcántara Carrancá**, las cuales constituyen circunstancias objetivas que sustentan dudas razonables sobre su imparcialidad. Debe resaltarse que la resolución de este asunto, aunque de manera indirecta, incidirá en la situación de otras personas con quienes dichos ministros guardan vínculos y que han sido señaladas por el suscrito quejoso, lo que refuerza la necesidad de apartarlos del conocimiento del presente caso.

Por ello, y con fundamento en los principios de independencia e imparcialidad judicial, **sería jurídicamente procedente y éticamente recomendable que se les recuse de conocer tales asuntos**, en cumplimiento del deber de preservar la apariencia de imparcialidad y garantizar el derecho a un juicio justo.

Esta dimensión del principio de imparcialidad ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela*, en el que ha señalado, que:

...el Tribunal considera que la institución de la recusación tiene un doble fin: por un lado actúa como una garantía para las partes en el proceso, y por el otro, busca otorgar credibilidad a la función que desarrolla la Jurisdicción. En efecto, la recusación otorga el derecho a las partes de instar a la separación de un juez cuando, más allá de la conducta personal del juez cuestionado, existen **hechos demostrables o elementos convincentes que produzcan temores fundados o sospechas legítimas de parcialidad sobre su persona**, impidiéndose de este modo que su decisión sea vista como motivada por razones ajenas al Derecho y que, por ende, el funcionamiento del sistema judicial se vea distorsionado. **La recusación no debe ser vista necesariamente como un enjuiciamiento de la rectitud moral del funcionario recusado, sino más bien como una herramienta que brinda confianza a quienes acuden al Estado solicitando la intervención de órganos que deben ser y aparentar ser imparciales.**⁴

En atención a lo previsto por el artículo 55 de la Ley de Amparo, se adjunta al presente escrito los **billetes de depósitos que sumados, equivalen al monto máximo de la multa que podría imponerse en caso de declararse infundada la recusación —seiscientas Noventa Unidades de Medida y Actualización—**

Esta medida se adopta en cumplimiento del deber de formular peticiones de esta naturaleza con **buena fe procesal** y como manifestación de que la presente recusación se sustenta en hechos objetivos, notorios y verificados públicamente, sin que obedezca a percepciones meramente subjetivas ni a propósitos dilatorios.

PRUEBAS

1.- DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en las publicaciones realizadas por la periodista Lourdes Mendoza, parte recurrente adhesiva en el presente juicio, en sus cuentas oficiales de redes sociales (particularmente en la plataforma X, antes Twitter), en las que, días antes de la sesión de la Sala, difundió públicamente fragmentos y comentarios

⁴ Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 63

sobre el contenido del proyecto de resolución que no era de acceso público. Las cuales pueden consultarse en los siguientes vínculos:

<https://x.com/lumendoz/status/1937974312591564863?s=46>

Objeto de la prueba: demostrar la existencia de un dato objetivo de que la tercera interesada tenía información que el proyecto del amparo en revisión 555/2024 venía a su favor y que sería aprobado, así como es útil para demostrar que la tercera interesada tuvo acceso privilegiado a una versión del proyecto de resolución antes de su discusión en sesión, lo cual implica una ventaja procesal indebida y vulnera el principio de igualdad de armas y reserva judicial.

Hechos con los que se relacionan: Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito inicial de recusación

2.- DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la publicación que en redes sociales hizo la señora Lourdes Mendoza Peñaloza, bajo el link

<https://x.com/lumendoz/status/1937899196494864824?s=46>

Objeto de la prueba: demostrar la existencia de un dato objetivo de que la tercera interesada tenía información de los impedimentos previo a que fueran notificados.

Hechos con los que se relacionan: Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito inicial de recusación

3.- DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en notas periodísticas del medio entorno.mx, de la autoría del periodista Arturo Ángel, titulado "Proyecto de la Corte desecha amparo de Lozoya y su denuncia de Odebrecht se tambalea", publicado el 26 de junio de 2025, en el que se publicó el proyecto de resolución antes de su discusión formal:

<https://e-ntorno.com/proyecto-de-la-corte-desecha-amparo-de-lozoya-y-su-denuncia-de-odebrecht-se-tambalea/>

Objeto de la prueba: aportar elementos objetivos de que la filtración fue de amplio conocimiento público y que fue aprovechado por la tercera interesada para intentar influir en la percepción social y en las condiciones procesales del juicio, en detrimento de la equidad entre las partes.

Hechos con los que se relacionan: Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito inicial de recusación

4.- DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente la publicación realizada el 29 de julio de 2025 en la cuenta oficial de X (antes Twitter) de Lourdes Mendoza (@lumendoz), consultable en la liga:

https://x.com/lumendoz/status/1950349224643584476?s=46&t=vEx-YdzUEu4SWKzwdBSx_Q

Objeto de la prueba: demostrar la existencia de presión pública e interés expreso de Lourdes Mendoza en que la SCJN, con su integración actual, resuelva favorablemente su asunto, lo cual genera un riesgo de apariencia de parcialidad.

Hechos con los que se relacionan: Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito inicial de recusación

5.- DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la publicación que en redes sociales hizo la señora Lourdes Mendoza Peñaloza, bajo el link

<https://x.com/lumendoz/status/1950349224643584476>

Objeto de la prueba: demostrar la existencia de un dato objetivo de que la tercera interesada tenía un interés manifiesto en que sean precisamente los Ministros y Ministras que al día de hoy integran la Primera Sala quienes resuelvan el Amparo Directo en Revisión.

Hechos con los que se relacionan: Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito inicial de recusación

6.- DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la publicación que en redes sociales hizo la señora Lourdes Mendoza Peñaloza, bajo el link

<https://x.com/lumendoz/status/1940043673879666843?s=46>

Objeto de la prueba: demostrar la existencia de un dato objetivo de que la tercera interesada publicó un video en su cuenta de X en el que señalaba la posibilidad de sesionar del Amparo Directo en Revisión 555/2024.

Hechos con los que se relacionan: Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito inicial de recusación

7.- DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la publicación que en redes sociales hizo la señora Lourdes Mendoza Peñaloza, bajo el link

<https://x.com/lumendoz/status/1953808604173041968?s=46>

Objeto de la prueba: demostrar la existencia de un dato objetivo de que la tercera interesada tiene conocimiento del contenido y sentido del proyecto que sería sometido a votación.

Hechos con los que se relacionan: Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito inicial de recusación

8.- DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la publicación del video de Youtube titulado Lourdes Mendoza va contra abogado de Emilio Lozoya, correspondiente a la entrevista de la tercera interesada en el espacio noticioso dirigido por Ciro Gómez Leyva, publicado el pasado 7 de agosto de 2025:

Entrevista disponible en: <https://youtu.be/GY6rv3lmJ4o?si=nKbtceb5oOOMI5dX&t=89>

Objeto de la prueba: aportar elementos objetivos de el actuar irregular de la Primera Sala de la SCJN en favor de la tercera interesada, actuación que incluso ella reconoce como "milagrosa". Pero más aún reconoce que este caso "no tuvo que mover un dedo", infiriéndose que en otros momentos del asunto, **sí ha tenido que interferir para asegurar un resultado a su favor.**

Hechos con los que se relacionan: Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito inicial de recusación

9.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la versión oficial del curriculum institucional del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, publicada en el portal electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, accesible en la siguiente liga: <https://www.scjn.gob.mx/ministro/jorge-mario-pardo-rebolledo>

Este documento tiene carácter de documental pública por provenir de un sitio oficial de un órgano del Estado mexicano y constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Este elemento probatorio se ofrece para demostrar la apariencia razonable de falta de imparcialidad, atendiendo a los estándares desarrollados por la jurisprudencia nacional e internacional en materia de independencia judicial y a la obligación de excusarse cuando exista una relación que genere una duda fundada sobre la objetividad del juzgador.

Hechos con los que se relacionan: Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito inicial de recusación

10.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en comunicado de prensa No.235/2009, de 26 de octubre de 2009 titulado "SE DEFINE TERNA DE LA QUE SURGIRÁ NUEVO CONSEJERO DE LA JUDICATURA FEDERAL" accesible en la siguiente liga: <https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=1643>

Este documento tiene carácter de documental pública por provenir de un sitio oficial de un órgano del Estado mexicano y constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Este elemento probatorio se ofrece para demostrar la cercanía del ministro Pardo Rebolledo con el expresidente Felipe Calderón al haber sido nominado también para integrar el Consejo de la Judicatura Federal.

Hechos con los que se relacionan: Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito inicial de recusación

11.- DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística titulada: "Manda Calderón terna para ministro de la Corte; repite Pardo Rebolledo", publicada en Proceso, el miércoles, 2 de febrero de 2011:

<https://www.proceso.com.mx/nacional/2011/2/2/manda-calderon-terna-para-ministro-de-la-corte-repite-pardo-rebolledo-83406.html>

Objeto de la prueba: este elemento probatorio se ofrece para demostrar la cercanía del ministro Pardo Rebolledo con el expresidente Felipe Calderón al haber sido nominado para integrar en dos ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hechos con los que se relacionan: Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito inicial de recusación

12.- DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el libro titulado *Traición en el Palacio*, de la autoría de Hernán Gómez Bruera, en la parte conducente que se relaciona con los hechos materia de la presente recusación.

Se anexan impresiones de los apartados correspondientes, solicitando que dichas impresiones sean **compulsadas con la publicación original** en poder de esta parte quejosa para verificar su autenticidad e integridad.

Esta prueba se ofrece con el objeto de acreditar la intervención indebida de Julio Scherer en asuntos relacionados con el aquí quejoso y que demuestran la necesidad reforzada de salvaguardar la independencia judicial.

Hechos con los que se relacionan: Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito inicial de recusación

13.- DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el libro titulado *El Ministro del Poder*, de la autoría de Hernán Gómez Bruera, en la parte conducente que se relaciona con los hechos materia de la presente recusación.

Se anexan impresiones de los apartados correspondientes, solicitando que dichas impresiones sean **compulsadas con la publicación original** en poder de esta parte quejosa para verificar su autenticidad e integridad.

Esta prueba se ofrece con el objeto de acreditar la relación que ha mantenido el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca con el exconsejero Julio Scherer y la vulneración a la apariencia de imparcialidad en virtud de tal situación. Asimismo, de dicha publicación se desprenden las referencias a la utilización del Noveno Tribunal Colegiado, como un tribunal de consigna usado por el exconsejero para sus propios intereses.

Hechos con los que se relacionan: Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito inicial de recusación

14.- INSPECCIÓN JUDICIAL.- La cual se solicita se realiza en lo siguiente:

I.- Las páginas de internet siguientes:

<https://x.com/lumendoz/status/1937974312591564863?s=46>

<https://x.com/lumendoz/status/1937899196494864824?s=46>

<https://e-ntorno.com/proyecto-de-la-corte-desecha-amparo-de-lozoya-y-su-denuncia-de-odebrecht-se-tambalea/>

https://x.com/lumendoz/status/1950349224643584476?s=46&t=vEx-YdzUEu4SWKzwdBSx_Q

<https://x.com/lumendoz/status/1950349224643584476>

<https://x.com/lumendoz/status/1940043673879666843?s=46>

<https://x.com/lumendoz/status/1953808604173041968?s=46>

<https://youtu.be/GY6rv3lmJ4o?si=nKbtceb5oQOMl5dX&t=89>

<https://www.scjn.gob.mx/ministro/jorge-mario-pardo-rebolledo>

<https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=1643>

<https://www.proceso.com.mx/nacional/2011/2/2/manda-calderon-terna-para-ministro-de-la-corte-repite-pardo-rebolledo-83406.html>

II.- Del expediente identificado como Impedimento 43/2025, radicado en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que obra en el archivo de este Tribunal.

La diligencia tendrá por objeto que se verifique las manifestaciones y filtraciones que se han señalado y narradas en el presente escrito, así como que se hagan constar las constancias, actuaciones y acuerdos que resulten conducentes para acreditar que las partes no fueron notificadas de la admisión del impedimento 43/2021 al momento en que la tercera interesada manifestaba haber tenido conocimiento de la promoción de dos impedimentos.

Se solicita que, en su oportunidad, se incorporen al presente expediente las copias certificadas que resulten pertinentes de las constancias inspeccionadas.

Hechos con los que se relacionan: Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito inicial de recusación

Por lo anterior, respetuosamente solicito:

PRIMERO. Que se tenga por presentada la presente solicitud de recusación de los Ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación **JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ** en los términos aquí expresados.

Reservándome mi derecho a formular diversos impedimentos en contra de los demás ministros de dicha Primera Sala.

SEGUNDO. Que se admita la solicitud y, en su caso, se tramite conforme al procedimiento correspondiente para que se determine la procedencia de recusación planteada.

TERCERO. Que se garantice la suspensión de la intervención de los señalados Ministros en cualquier acto de resolución o deliberación respecto del presente asunto, hasta en tanto se resuelva la presente solicitud.

Protesto lo necesario



EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN

014482

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

49/2076

2025 AGO 11 PD 12:56

OFICINA DE
CERTIFICACIÓN JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

Recibido de un enviado en (29) folios con:

(1) Billeto de Depósito X 051787.

(1) Billeto de Depósito X 051788

(1) Billeto de Depósito X 051786

(1) Billeto de Depósito X 051789

(13) diversos anexos impreso a color sin foliar.

(1) Libro "el Ministro del Poder"

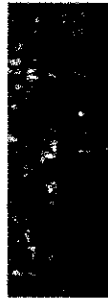
El.

ANEXO 1

ANEXO 2

Lourdes mendoza
@lunmendoz

Si desearon @SCIN por notoriamente improcedente un impedimento promovido por la @FGRMexico respecto de una sentencia de fondo, cómo van a aplazar la votación Por el #IconoDeLaCorrupción de @EPN que sabe que va a perder! Resuelvan hoy, lo pido públicamente.



the following: (1) the number of times the subject was able to perform the task; (2) the number of times the subject was able to perform the task without error; (3) the number of times the subject was able to perform the task without hesitation; (4) the number of times the subject was able to perform the task without fatigue; (5) the number of times the subject was able to perform the task without distraction; (6) the number of times the subject was able to perform the task without interruption; (7) the number of times the subject was able to perform the task without delay; (8) the number of times the subject was able to perform the task without mistake; (9) the number of times the subject was able to perform the task without confusion; (10) the number of times the subject was able to perform the task without anxiety; (11) the number of times the subject was able to perform the task without nervousness; (12) the number of times the subject was able to perform the task without tension; (13) the number of times the subject was able to perform the task without stress; (14) the number of times the subject was able to perform the task without strain; (15) the number of times the subject was able to perform the task without discomfort; (16) the number of times the subject was able to perform the task without pain; (17) the number of times the subject was able to perform the task without injury; (18) the number of times the subject was able to perform the task without illness; (19) the number of times the subject was able to perform the task without accident; (20) the number of times the subject was able to perform the task without incident.

9:42 a.m. - 25 jun. 2025 - 12,4 mil visualizaciones

2

No te pierdas lo que está pasando.
Las personas en X son las primeras en enterarse.

Regístrate ahora para obtener tu propia cronología personalizada.

Registrarse con Google

 Registrarse con Apple

Crear cuenta

Al registrarte, aceptas los **Términos de servicio** y la **Política de privacidad**, incluida la política de Uso de Cookies.

Algo salió mal. Intenta recargar.

Intentar de nuevo

[Condición de Servicio](#)
[Política de Privacidad](#)
[Política de cookies](#)
[Accesibilidad](#)
[Información de anuncios](#)
[Más opciones...](#)
 © 2025 X Corp.

Registrato

Iniciar sesión

Registrato

ANEXO 3

Proyecto de la Corte: amparo d X +

<https://e-ntorno.com/proyecto-de-la-corte-desecha-amparo-de-lozoya-y-su-denuncia-de-odebrecht-se-tambalea/>

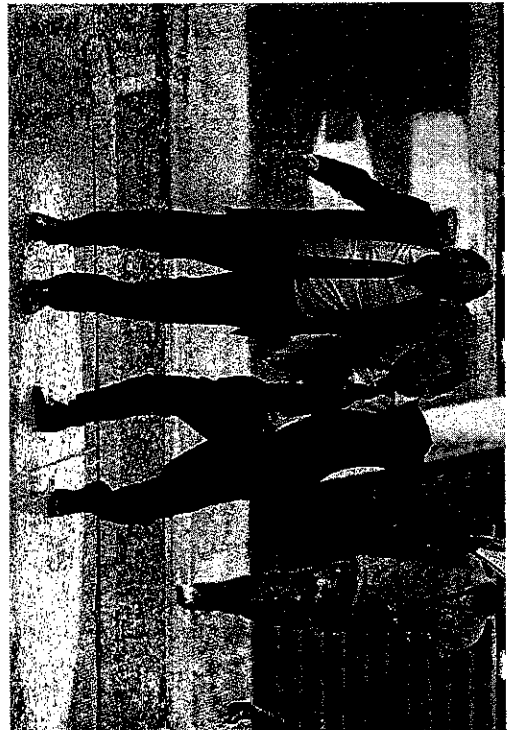
🔍 ⭐ 📄 📧 ☰

entorno

.MX

NOTICIAS ▾ ENTRETENIMIENTO ▾ VIDA Y ESTILO ▾ DEPORTES TENDENCIAS OPINIÓN

Home Destacados



Proyecto de la Corte desecha amparo de Lozoya y su denuncia de Odebrecht se tambalea

DESTACADAS NOTICIAS

Publicado

junio 26, 2025

**A un paso de quedar firme primera sentencia civil por falsedades en la denuncia del exdirector de Pemex. Defensa de Lozoya solicita que dos ministros se desistan de votar el caso por posible conflicto de interés.*

Autor

ARTURO ANGEL

Por: Arturo Angel

que había tomado. Lo anterior, tiene su origen en la memoria decoro, honor, reputación, vida privada, pública, profesional, familiar, y [en la] consideración"2 que de ella tienen los demás.

3. Juicio ordinario civil. Fruto de lo anterior, Lourdes Mendoza demandó de Emilio Lozoya las siguientes prestaciones en la vía ordinaria civil:

a. La declaración judicial de que el demandado incurrió en una conducta

1. ADR 555-2024. EMA CASO

Descarga

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Compartir esta noticia

Facebook X +

TAGS: CASO ODERECHT EMILIO LOZOYA SCJN



Arturo Ángel

lista de periodistas a quienes sobornaba regularmente a fin de mantener una prensa favorable.¹

2. Lourdes Mendoza rechazó dichas acusaciones, calificándolas como falsas, insultantes y desprestigiantes. Añade que, a raíz de la publicación de la denuncia hecha por Emilio Lozoya, ha recibido nombres ofensivos en diversas redes sociales como "Lady Chanel" en referencia a la bolsa de lujo que había recibido. Lo anterior habría supuesto un daño en su "nombre, decoro, honor, reputación, vida privada, pública, profesional, familiar, y [en la] consideración"² que de ella tienen los demás.
3. **Juicio ordinario civil.** Fruto de lo anterior, Lourdes Mendoza demandó de Emilio Lozoya las siguientes prestaciones en la vía ordinaria civil:
 - a. La declaración judicial de que el demandado incurrió en una conducta ilícita generadora de un daño moral;
 - b. El pago de una indemnización económica a cuantificarse en ejecución de sentencia, y
 - c. El pago de gastos y costas.
4. El Juez Quincuagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México conoció del asunto. El 12 de mayo de 2022, dictó sentencia en la que condenó al demandado en los términos siguientes:

PRIMERO. Ha sido precedente (sic) la vía ordinaria civil en la que la parte actora MARÍA DE LOURDES MENDOZA PEÑALOZA acreditó el daño moral causado; y el demandado EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN no justificó sus excepciones y defensas, en consecuencia;

SEGUNDO. Se **declara** el derecho que tiene la actora MARÍA DE LOURDES MENDOZA PEÑALOZA para que sea indemnizada por el daño moral que le causó el demandado EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN, con motivo de los hechos narrados en su denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República, únicamente en la parte relativa al presente juicio de daño moral, realizados en contra de la accionante, los cuales afectaron directamente su patrimonio, así como sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, y la consideración que de sí misma tienen los

¹ Es importante mencionar que, de acuerdo con Emilio Lozoya (página 12 de su demanda de amparo, entre otras manifestaciones), la denuncia difundida en medios es un documento incompleto y que no corresponde al que obra de manera íntegra en la carpeta de investigación a la que dio origen.

² Hecho 5 de la demanda de origen.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 555/2024

demás, toda vez que los hechos narrados por el demandado resultaron ser no verídicos y/o no se acreditó su veracidad.

TERCERO. Se condena al demandado EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN a pagar a la actora o a quien sus derechos represente, por concepto de indemnización del daño moral causado, la cantidad de \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.); lo que deberá efectuar en el término de CINCO DÍAS contados a partir de que la presente resolución sea ejecutable; apercibido que de no hacerlo, se dictará auto de ejecución en su contra.

CUARTO. No se hace especial condena en costas en esta instancia.

QUINTO. Notifíquese.

5. **Recurso de apelación (toca 491/2022).** El demandado interpuso recurso de apelación en contra de dicha sentencia. Fue resuelto por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el 5 de septiembre de 2022 conforme a lo siguiente:

PRIMERO. Resultaron infundados e inoperantes los agravios; en consecuencia;

SEGUNDO. Se **confirma** la sentencia definitiva de fecha doce de mayo del dos mil veintidós.

TERCERO. Se **condena** a la parte demandada al pago de gastos y costas en ambas instancias.

CUARTO. Notifíquese.

6. **Amparo directo.** En desacuerdo con lo anterior, la parte demandada promovió juicio de amparo directo. En su demanda, el quejoso hizo valer conceptos de violación divididos en tres grupos.³ En el primero, combate la determinación de que las manifestaciones vertidas en la denuncia fueron falsas. También argumenta que, si bien la Sala responsable señaló a la denuncia como el hecho ilícito generador del daño, su publicación no le es atribuible. Aclara que las manifestaciones que hizo en la denuncia fueron formuladas al interior de un procedimiento de naturaleza reservada. El segundo grupo está dirigido a combatir la sentencia recurrida por ser violatoria de los principios de congruencia, exhaustividad, motivación y fundamentación. Por último, en el tercer grupo de conceptos de violación combate aquellos vicios que afectaron el curso del procedimiento civil y que –en su concepto– trascendieron al fallo.

7. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso en cada grupo argumentativo se sintetizan a continuación:

³ Esta división se hace en la demanda de amparo; no es una clasificación conceptual que realiza esta Sala para el mejor entendimiento del asunto.

Primer grupo de conceptos de violación

7.1. **Primer concepto de violación.** La sentencia reclamada viola los artículos 80, 81, 82 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México en relación con el 1916 del mismo código ("Código Civil"). La autoridad responsable señala y reitera que, al mentir en su denuncia formulada ante la FGR, el quejoso cometió un hecho ilícito. Sin embargo, no puede atribuírsele el no haber acreditado los hechos expuestos en una denuncia. Esta es una tarea que, de conformidad con el marco constitucional y legal, corresponde al Ministerio Público. Sostiene que, contrario a lo manifestado por la autoridad responsable, los hechos denunciados no fueron falsos. Esta determinación fue alcanzada partiendo de una apreciación de cuáles fueron las afirmaciones contenidas en la denuncia.

7.2. **Segundo concepto de violación.** Se señalan como violados los mismos preceptos legales que en el concepto de violación anterior. El daño reclamado es consecuencia de los nombres ofensivos recibidos por la actora en redes sociales después de la publicación de la denuncia y no así de la presentación de la denuncia en sí misma. Esta última se enmarca en un procedimiento confidencial del cual Lourdes Mendoza no es parte ni se le ha generado acto de molestia alguno. El daño resentido es consecuencia de la publicidad de la información, no de la presentación de la denuncia.

Al no participar de la difusión de la denuncia, Emilio Lozoya no guarda relación con las afectaciones alegadas por la actora. Su difusión tampoco fue realizada por la FGR en el marco del derecho de acceso a la información dentro de los cauces de la ley de acceso a la información reglamentaria del artículo 6 constitucional. Tampoco se advierte que haya sido difundida por algún tercero relacionado con la misma y que haya estado sujeto a amenazas, irregularidades u obstrucciones en el proceso. Todo lo anterior implica una violación al principio de congruencia.

Segundo grupo de conceptos de violación

- 7.3. **Único concepto de violación del segundo grupo, desagregado en 32 violaciones a la tutela jurisdiccional efectiva.** La autoridad responsable incurrió en violaciones a los principios de exhaustividad, congruencia y debida fundamentación y motivación en su estudio de los agravios del quejoso. Tales deficiencias generaron un total de 32 violaciones a la tutela jurisdiccional, las que se desglosan a continuación indicando el concepto de agravio con el que están relacionadas.

La autoridad responsable no analizó el primer concepto de agravio

7.3.1. Primer violación a la tutela jurisdiccional

En el primer agravio del recurso de apelación se afirmó que el A quo analizó un hecho distinto al generador del supuesto daño. El quejoso reitera: los hechos que forman parte de una denuncia en el marco de una investigación que sigue vigente no pueden ser causantes de un daño moral como el que alega la actora. Por ello, la autoridad responsable estaba obligada a analizar si una denuncia, por su naturaleza, puede generar las afectaciones alegadas por la actora o si éstas fueron provocadas por la difusión masiva de ella, hecho que no es atribuible a Emilio Lozoya. Sin embargo, la Sala se limitó a repetir lo dicho por el A quo sin analizar los argumentos expuestos. De ahí que se configure una violación clara al principio de exhaustividad.

7.3.2. Segunda violación a la tutela jurisdiccional

La Sala responsable refirió a la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. Esta situación no fue expuesta por el quejoso en sus agravios, con lo cual se viola el principio de claridad de las sentencias. Además, dicho análisis fue llevado a cabo contradictoriamente, lo cual es violatorio del principio de congruencia.

La autoridad responsable considera que dicha ley es inaplicable al no estarse frente a un caso de libertad de expresión. Ello entra en contradicción con el propio acto reclamado, en que se establece que se está ante un caso en donde los derechos de la personalidad prevalecen por encima del ejercicio de la libertad de expresión.

7.3.3. Tercera violación a la tutela jurisdiccional

La autoridad responsable vuelve a violar los principios de claridad, congruencia y exhaustividad de las sentencias al exponer estándares contradictorios en el marco jurídico del derecho de acceso a la información pública. Los estándares expuestos por la responsable, lejos de permitir que se califique de legal la difusión de la denuncia, confirma lo contrario. Esta difusión violó los artículos 6 y 16 constitucionales y diversas normas del Código Nacional de Procedimientos Penales al no haberse difundido la versión pública de la denuncia, sino extractos íntegros y a la vez alterados sin protegerse los datos personales de quienes ahí son señalados.

Ahora, la autoridad responsable afirmó que ciertas personas sí pueden difundir la denuncia; entre ellas, quienes estén siendo sujetos de amenazas, irregularidades u obstrucciones en el proceso. Sin embargo, dicho argumento lleva a una conclusión distinta a la alcanzada por la autoridad responsable. Lourdes Mendoza no se encuentra dentro de los supuestos antes mencionados. Inclusive, y de acuerdo con lo señalado por la autoridad responsable, el derecho a la divulgación por parte de los sujetos mencionados no puede ser absoluto, sino que debe ser protegiendo los datos personales. En el caso, es evidente que no se cumplió con tal deber de protección.

Por otra parte, la afirmación de la responsable según la cual estamos en presencia de un ejercicio de responsabilidades ulteriores es incongruente por los motivos antes señalados. La

publicación de la denuncia tampoco se justifica en razón de su trascendencia, como la autoridad responsable sostiene. No sólo se desconoce hasta el momento el contenido íntegro de la denuncia, sino que debió de haberse superado la prueba de daño. La publicación de la denuncia debió, en todo caso, hacerse respetando los datos personales de las personas involucradas.

A pesar de todo lo anterior, la autoridad responsable afirmó que “no se acreditó que tuviera que estar en secreto” la denuncia. Ello no sólo es contrario a lo señalado en otras partes de su sentencia, sino que, como ya se estableció, las investigaciones no son información pública. En caso de que se ordene su publicación, siempre deben protegerse los datos personales, situación que no aconteció.

7.3.4. Cuarta violación a la tutela jurisdiccional

La autoridad responsable viola el deber de motivar adecuadamente su resolución y el principio de congruencia al sostener la existencia de una carga de prever que una denuncia va a ser íntegramente publicitada.

7.3.5. Quinta violación a la tutela jurisdiccional

La autoridad responsable afirma que la confidencialidad de la denuncia no otorga derecho a declarar hechos no verídicos o no demostrados. Esta afirmación es contradictoria, puesto que un hecho no verídico es distinto de uno no demostrado.

7.3.6. Sexta violación a la tutela jurisdiccional

La autoridad responsable considera que el quejoso debió de haber mesurado que, por su trascendencia política, era predecible que la denuncia terminaría siendo publicada en medios de comunicación. Esta determinación viola el principio de fundamentación y motivación al no existir fundamento legal para sostener la existencia de dicho deber. Además, declaró de manera responsable y respetuosa en su denuncia.

La autoridad responsable no analizó el primer concepto de agravio

7.3.7. Séptima violación a la tutela jurisdiccional

La autoridad responsable no analizó los argumentos de agravio de forma congruente con los hechos que fijan la litis y con las constancias de autos. La autoridad responsable evaluó manifestaciones que el quejoso nunca realizó y desacreditó afirmaciones con pruebas relacionadas con cosas distintas.

7.3.8. Octava violación a la tutela jurisdiccional

La autoridad responsable violó el principio de congruencia y exhaustividad al no haber estudiado el agravio propuesto y limitarse a repetir lo señalado por el *A quo*. Además, tergiversa las declaraciones vertidas por el quejoso en su denuncia de hechos.

7.3.9. Novena violación a la tutela jurisdiccional

La autoridad responsable se basa en el resultado de la confesional para justificar la reversión de la carga de la prueba al quejoso. Al hacerlo, se abstuvo de analizar los argumentos expuestos al respecto en el recurso de apelación. No hay base legal para invertir la carga de la prueba al quejoso. En todas las acciones en donde se alega falsedad de algo corresponde acreditar ese hecho a quien lo afirma; en este caso, la actora. A lo anterior debe sumarse la consideración de que las manifestaciones vertidas por el quejoso en su denuncia de hechos fueron en el marco de un procedimiento penal. La investigación de tales hechos corresponde por mandato constitucional al Ministerio Público.

7.3.10. Décima violación a la tutela jurisdiccional

La autoridad responsable señaló que el argumento relativo a la inaplicabilidad de la tesis invocada por el *A quo*⁴ era

⁴ Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis VI.2º. C.609 C, Novena Época, registro digital 169808, de rubro "RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE HECHO ILÍCITO. PARA LA

primera instancia, esta se evaluó para pretender acreditar que ella no había beneficiado a Luis Videgaray. La autoridad responsable sostiene que el quejoso no expresó “qué perjuicio le causó esa valoración”. Ello demuestra su inatención en el análisis del recurso de apelación.

7.3.14. Décima cuarta violación a la tutela jurisdiccional

La responsable concluyó, a partir de la valoración de la solvencia económica de la actora, que esta no tenía necesidad de solicitar el pago de la colegiatura de su hija. Lo anterior implica una violación al principio de congruencia interna y externa, así como al de exhaustividad. Es contradictorio puesto que, por una parte, valora sus declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria y, por otra, acredita su posición socioeconómica media. En este tema, la autoridad responsable se limitó a repetir los argumentos formulados por el *A quo* sin hacer caso de los planteamientos hechos valer en los agravios.

7.3.15. Décima quinta violación a la tutela jurisdiccional

La autoridad responsable señala que la ubicación de la tienda de la marca Chanel y la capacidad económica de la actora sí fueron parte de la litis y que esta ofreció pruebas para desvirtuar las manifestaciones del actor en su denuncia. Dicha determinación viola el principio de congruencia y exhaustividad. Primero, porque de conformidad con lo ya expuesto, los argumentos que combatieron dicha cuestión no fueron analizados. Además, en ninguna parte de la sentencia se acredita que la ubicación de la tienda de la marca Chanel en Masaryk 450 haya sido un hecho materia de la litis. Tampoco se advierte en ningún extracto del escrito inicial de demanda que la actora haya manifestado que trabajaba en el periódico Reforma. En cambio, sí mencionó otros medios en donde desempeñaba su labor.

7.3.16. Décima sexta violación a la tutela jurisdiccional

La responsable analizó de forma contradictoria el argumento del quejoso según el cual es incorrecto calificar a un hecho de ilícito sólo por no haberse acreditado la plataforma fáctica en la que se sustenta. Tal argumento se formuló en atención a que el A quo estableció en su sentencia que los hechos denunciados no habían quedado probados. La responsable se limitó a señalar que los argumentos eran inoperantes porque el hecho ilícito se había constituido con declaraciones falsas. Si bien podría interpretarse que la autoridad consideró a dichos argumentos como inoperantes por tratarse de hechos falsos, ello sería incongruente con la propia sentencia cuyo punto resolutive segundo hace referencia a hechos no acreditados y no así a falsos.

7.3.17. Décima séptima violación

Más allá de que los agravios fueron estudiados de forma deficiente, hubo casos en que estos simplemente no fueron estudiados por la responsable. Ello implica una violación al principio de exhaustividad.

Análisis del segundo agravio

7.3.18. Décima octava violación

La autoridad responsable determinó indebidamente que el A quo sí fundó y motivó la relación causa y efecto como elemento de la acción de reparación del daño. Además, hubo una incongruencia en el análisis del agravio en cuestión, puesto que en este no se atacan todos los elementos constitutivos de la acción de daño moral, sino únicamente el nexo de causalidad. Este último punto no fue estudiado por la responsable ni existen elementos para acreditarlo. Incluso de suponerse que los hechos en los cuales se basó la denuncia fueran falsos, el daño alegado solo pudo haberse producido ante la difusión de una denuncia sin la autorización de la autoridad.

7.3.19. Décima novena violación

La autoridad responsable no analizó los conceptos vinculados con la relación de causalidad, lo cual implicó una violación al principio de exhaustividad. En su respectivo agravio, el quejoso defiende una teoría de causalidad distinta a la abrazada por el A quo. Acorde con este, resulta imposible que la mera presentación de una denuncia genere, por sí misma, una *eficiente reacción* en la opinión pública. La actora no hubiere resentido un daño de no haberse difundido la denuncia.

Análisis del estudio que la responsable hizo al tercer agravio

7.3.20. Vigésima violación a la tutela jurisdiccional

La autoridad responsable violó los principios de congruencia y exhaustividad al no analizar los agravios tercero y décimo. La existencia de múltiples omisiones en el estudio de los primeros dos agravios impactó, a su vez, en el análisis del agravio tercero. El A quo sostuvo que el daño se ocasionó debido a que la denuncia se basó en hechos falsos y no así en su difusión. Esto es refutado por el quejoso, quien sostiene que una denuncia que no se hace pública no puede generar los daños alegados por la autoridad responsable. Sin embargo, tal argumento no fue estudiado por la responsable. Esta partió, en cambio, de premisas falsas. Primero, que la denuncia se filtró en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Segundo, que esta se filtró por personas que pueden hacerlo por ser víctimas de amenazas, irregularidades y obstrucciones en el proceso.

7.3.21. Vigésima primera violación a la tutela jurisdiccional

La responsable no analizó el antepenúltimo párrafo de la hoja 48 al primer párrafo de la página 50 del recurso de apelación. En dicho apartado, el quejoso argumenta que no se le puede responsabilizar de la filtración de la denuncia. Estos

argumentos jamás fueron estudiados por la responsable, motivo por el que se violó el principio de exhaustividad.

7.3.22. Vigésima segunda violación a la tutela jurisdiccional

La autoridad responsable no analizó el tercer agravio del escrito de apelación. Particularmente, los argumentos planteados en los párrafos segundo y tercero de la página 50 del escrito de apelación y que refieren a los daños que supuestamente hubiesen generado la denuncia de hechos.

Análisis del estudio al agravio décimo

7.3.23. Vigésima tercera violación a la tutela jurisdiccional

La autoridad responsable no analizó el décimo agravio del escrito de apelación. Dicho agravio busca controvertir el punto resolutivo de la sentencia de primera instancia por violar los artículos 17, 20, apartado A, fracción V, 21, 102 apartado A y 124 constitucionales al ser la denuncia en cuestión parte de una investigación penal federal abierta a cargo del Ministerio Público. La autoridad responsable declaró infundados sus argumentos a pesar de que jamás estudió la constitucionalidad de la sentencia emitida a la luz de los preceptos constitucionales referidos.

7.3.24. Vigésima quinta (sic) violación a la tutela jurisdiccional

La autoridad responsable no analizó el décimo agravio del escrito de apelación. En particular, su apartado denominado “Respecto del efecto corruptor del proceso civil en razón de las divulgaciones de la propia actora”. A lo largo de él, se expone cómo la actora ha generado presión a través de los medios de comunicación a fin de generar un efecto corruptor en el presente procedimiento. El quejoso acusa a la actora de haber fomentado ideas falsas, como que este estaría sujeto a la medida cautelar de arraigo o que se tratase de un “criminal confeso”.

Análisis del agravio quinto

7.3.25. Vigésima sexta violación a la tutela jurisdiccional

El agravio quinto del recurso de apelación fue estudiado parcialmente. En este se analizó la falta de claridad de la sentencia del A quo, misma que no fue corregida por la responsable. En tal agravio se argumentaba que el A quo no había analizado una a una las excepciones y defensas opuestas por el quejoso. La quejosa acepta la falta de estudio individual de estas, pero estableció que este análisis se advierte del cuerpo de la resolución. Esta conclusión es inaceptable ya que las sentencias definitivas deben ser claras y precisas. Además, la responsable no valoró que esta violó el principio de congruencia y exhaustividad en el estudio de la excepción de falta de legitimación pasiva.

7.3.26. Vigésima séptima violación a la tutela jurisdiccional

La autoridad responsable analizó defectuosamente las excepciones y defensas, violando así los principios de congruencia y exhaustividad. De forma específica, el quejoso señala que al valorar la excepción de legitimación pasiva esta sostuvo que los medios de comunicación que publicaron la denuncia carecen de una obligación directa frente a la actora. En cambio, la autoridad responsable consideró que esta obligación si recae sobre el quejoso por haber sido el autor de la denuncia. El hecho de que no haya sido el quejoso quien difundió la información distingue al presente caso de los precedentes invocados por la responsable. Por su parte, el estudio de la falta de acción y derecho por parte de la responsable vuelve a violar lo principios de congruencia y exhaustividad por las razones expresadas en puntos anteriores.

Análisis del agravio sexto

7.3.27. Vigésima octava violación

La autoridad responsable determinó que la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección a la Vida, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal era inaplicable al caso. Esto, al considerar que lo reclamado en el juicio era el daño moral por vulnerar la integridad psíquica de la actora, por lo que la norma aplicable era el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal.

Dicha determinación vulneró los principios de exhaustividad y congruencia al omitir el argumento del quejoso de que el caso es uno de libertad de expresión. Ello haría aplicable la Ley de Responsabilidad Civil mencionada. Además, contrario a la sostenido por la autoridad responsable, la existencia de un dictamen pericial que acredite un daño psicoemocional no modifica el marco jurídico aplicable.

7.3.28. Vigésima novena violación

La sentencia reclamada carece de claridad en los párrafos 3 y 5 de su página 54. En estos, la autoridad responsable señala que la libertad de expresión no implica el derecho a declarar hechos falsos. Ello es incorrecto. La libertad de expresión no es un derecho ejercitable únicamente ante hechos considerados como ciertos. El hecho de que el ejercicio abusivo de la libertad dé lugar a responsabilidades ulteriores no implica que no se esté ante un ejercicio del mismo. Por ello, la legislación aplicable es la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección a la Vida, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.

La sentencia es, además poco inteligible por referir a “notas” inexactas (párrafo 2 de la pg. 55), situación que no tiene relación con el caso que nos ocupa. Además, señala que se está en presencia de personas con proyección pública, pero en aspectos concernientes a su vida privada, lo cual es incongruente. Al respecto, solicita se tengan por reproducidos puntos anteriores.

Estudio del agravio quinto

7.3.29. Trigésima violación a la tutela jurisdiccional

Existen dos agravios “quinto” en el recurso de apelación. Uno, anteriormente estudiado, corresponde a las fojas 50 a 53 del recurso. El otro, analizado a continuación, corresponde de las fojas 63 a 73. En este agravio, vuelve a argumentar que quienes difundieron la información fueron los medios de comunicación, por lo que deben ser llamados a juicio. En primer lugar, solicita se tenga por reproducido lo declarado en puntos anteriores. Sumado a lo anterior, destaca dos violaciones cometidas por la autoridad responsable. Por un lado, solicita se tenga por reproducido lo señalado en los puntos anteriores relativo al supuesto carácter de interés público de la información difundida. Por el otro, acusa que el párrafo tercero de la página 57 de la sentencia reclamada resulta poco inteligible al hablar de “notas inexactas”. En el caso, estamos ante una denuncia publicada por medios de comunicación.

Análisis del agravio séptimo

7.3.30. Trigésima (sic) violación a la tutela jurisdiccional

La autoridad responsable consideró que el séptimo agravio era infundado e inoperante, argumentando que sólo se señaló una aplicación incorrecta del artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles sin aportar razones jurídicas que refutaran la decisión del juez de otorgar pleno valor probatorio a las pruebas. Esta apreciación viola los principios de congruencia y exhaustividad.

7.3.31. Trigésima primera violación a la tutela jurisdiccional

La responsable violó el principio de exhaustividad al no analizar el séptimo agravio.

Análisis del agravio octavo

7.3.32. Trigésima segunda violación a la tutela jurisdiccional

La autoridad responsable no hizo ninguna manifestación sobre el octavo agravio, en que el quejoso reitera la inexistencia de un nexo de causalidad entre el hecho ilícito y el daño ocasionado. Esta falta de análisis redundante en una violación a los principios de congruencia y exhaustividad.

Tercer grupo de conceptos de violación.

7.4. Único concepto de violación del tercer grupo: análisis del agravio noveno respecto de la admisión de las pruebas a la actora, desagregado en el estudio de tres autos

7.4.1. Auto de fecha 5 de agosto de 2021

El juez de primera instancia admitió, invocando el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles, pruebas que no fueron anunciadas ni exhibidas en términos del artículo 95 de dicho Código. Lo anterior implicó una violación al principio de igualdad de las partes, situación ante la cual el quejoso se inconformó en su noveno agravio. No sólo el juez no justificó su actuar ni indicó ejercer sus facultades en beneficio de la actora, sino que dichas pruebas carecen de relación con los hechos materia de la litis. La actora en ningún momento hizo referencia a los hechos consignados en las documentales en cuestión.

Por otra parte, no debió haberse admitido como prueba la denuncia de hechos presentada por el quejoso ante la FGR por ser contraria al artículo 384 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco debieron de haberse admitido como pruebas las inspecciones judiciales por no guardar relación con los hechos relatados por la actora en su escrito inicial de demanda. El quejoso también refiere a que el *A quo* debió dar vista a la actora previo a admitir las pruebas documentales.

La responsable consideró los agravios como infundados e inoperantes. Sin embargo, el quejoso reitera la ilegalidad que

permeó a lo largo de la tramitación del procedimiento, al igual que las violaciones al principio de igualdad procesal.

7.4.2. Auto de fecha de 24 de agosto de 2021

En un auto dictado en la etapa de procedimiento, el *A quo* tuvo por desahogada la vista ordenada en proveído de 5 de agosto de 2021 al apoderado de la parte demandada respecto de una fe de hechos ofrecida por su contraria como prueba superveniente. Esta determinación fue combatida en agravios, señalando la falta de relación entre la prueba y los hechos indicados en el escrito inicial de demanda. El quejoso reitera la ilegalidad en la admisión de las pruebas ofrecidas por la actora.

7.4.3. Auto de fecha 16 de febrero de 2022

Se negó la admisión de pruebas ofrecidas por el quejoso, mismas que resultaban perfectamente legales. En ese sentido, se ofreció –y negó la admisión– de una prueba superveniente consistente en una fe de hechos en donde se advierte que la parte actora fomentaba el apodo de “Ladychanel” en su cuenta de Twitter. Ello, por no considerar que dicha prueba resultara materia de la litis.

8. **Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito.** El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito registró el asunto con número de expediente D.C.746/2022. En sesión de 7 de diciembre de 2023, negó el amparo con base en las consideraciones que se exponen a continuación.

8.1. Tras recapitular los hechos expuestos en la demanda, así como las excepciones y defensas planteadas por el demandado en su contestación, la sentencia inicia el análisis de los conceptos de violación a partir del denominado “segundo grupo”. En particular, examina el argumento según el cual el asunto involucra actos relacionados con el derecho a la libertad de expresión, por lo que resulta aplicable la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen (“Ley de

Responsabilidad Civil"). El Colegiado sostiene que el caso no puede juzgarse como uno de libertad de expresión o de acceso a la información, puesto que el hecho causante del daño no guarda relación con el objeto y finalidad de estos derechos. No existe una colisión entre los derechos tutelados por la Ley de Responsabilidad Civil y los de libertad de expresión y acceso a la información. Por lo tanto, la norma aplicable es el artículo 1916 del Código Civil.

- 8.2. Después de dicho análisis, se puntualiza que no serán materia de estudio los razonamientos de la Sala responsable ni del quejoso que atañen a los hechos y pruebas con que la tercera interesada "desvirtuó las manifestaciones relacionadas en la denuncia". Esta cuestión no constituye un elemento de la acción y su estudio no conduciría a ningún fin práctico, por lo que se trata de argumentos inoperantes.
- 8.3. En relación con el hecho ilícito, son **infundados** los argumentos en que el quejoso señala un indebido estudio de su primer agravio. Se está ante una responsabilidad civil extracontractual de naturaleza subjetiva derivada de la comisión de un hecho ilícito. Para efectos de la responsabilidad civil, la configuración de un hecho ilícito requiere que la conducta estudiada cumpla con tres elementos: ser antijurídica, culpable y dañosa. En el caso, el tribunal de alzada reiteró lo siguiente: (a) que el daño moral señalado por la tercera interesada derivó del contenido de las manifestaciones que hizo el quejoso en la denuncia, (b) que del fallo apelado se observó que el A quo determinó que, si bien las investigaciones son estrictamente reservadas, tal confidencialidad no le otorga derecho alguno a la persona que denuncia un acto posiblemente delictuoso de declarar hechos no verídicos, y (c) que el acto ilícito comprendía solamente lo mencionado por el quejoso en la denuncia. Este estudio fue correcto, pues, aunque constituya un derecho formular una denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delitos, no por eso carecería de trascendencia lo dicho a fin de configurar un ilícito. La presentación de dicha denuncia se

trata, entonces, de un acto en que cobra relevancia el principio de buena fe.

8.4. Al margen del deber de guardar sigilo, los señalamientos realizados en una denuncia son importantes y, en caso de resultar falsos, configurarían un hecho ilícito. En apoyo a lo anterior, cita la tesis de rubro "DAÑO MORAL. LA PRESENTACIÓN DE UNA DENUNCIA O QUERRELLA CONSTITUYE EL EJERCICIO DE UN DERECHO, POR LO QUE SÓLO CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS FALSOS PUEDE SERVIR DE BASE PARA LA RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE".⁵

8.5. Ahora, son **ineficaces** los argumentos relativos a la indebida inversión de la carga probatoria. En términos de los artículos 281 y 282 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, acreditar hechos negativos es una labor que corresponde al quejoso y no a la tercera interesada.

8.6. Por otra parte, en la sentencia se considera que los argumentos relativos al daño son **fundados** pero **inoperantes**. Son fundados puesto que, de la lectura de la sentencia reclamada, no se aprecia que se hayan satisfecho los principios de congruencia y exhaustividad a la luz del deber de fundar y motivar. Sobre todo, gran parte de las consideraciones de la Sala responsable tuvieron apoyo en que no se acreditó que no debió difundirse la denuncia en razón de su trascendencia para la sociedad. Además de que el hecho de que la divulgación de la denuncia se haya o no ajustado a derecho no fue materia de los puntos controvertidos, tal proceder sería incongruente al haberse considerado que la Ley de Responsabilidad Civil resultaba inaplicable. Justificar la divulgación de la denuncia es inadecuado para dilucidar los puntos cuestionados.

⁵ Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis I.3º.C.373 C, Novena Época, registro digital 185209, de rubro "DANO MORAL. LA PRESENTACIÓN DE UNA DENUNCIA O QUERRELLA CONSTITUYE EL EJERCICIO DE UN DERECHO, POR LO QUE SÓLO CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS FALSOS PUEDE SERVIR DE BASE PARA LA RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE".

- 8.7. Una vez precisado lo anterior, lo cierto es que los argumentos en este punto son **ineficaces**. El hecho ilícito se configuró al haber sido formulada una denuncia con base en hechos sobre los cuales el quejoso no colmó la carga probatoria. Si bien hizo valer el ejercicio de un derecho, este no puede razonablemente derivar en un daño al patrimonio moral de la demandante. Al respecto, cita la tesis de rubro “DAÑO MORAL. SU RECLAMACIÓN NO PUEDE SUSTENTARSE EN LA SIMPLE PRESENTACIÓN DE UNA DEMANDA, A NO SER QUE ÉSTA SE BASE EN HECHOS FALSOS, CALUMNIOSOS, INJURIOSOS O DE NATURALEZA SEMEJANTE”.⁶
- 8.8. Además, argumenta que, dado que el artículo 1916 del Código Civil no distingue el contexto en el que se actualizan los elementos del daño moral, este no puede depender de la mayor o menor exposición del hecho ilícito. Tan es así que el daño moral no se acota a la consideración que tengan los demás sobre la persona afectada, sino que su conceptualización centra su objeto y contenido en los intereses no patrimoniales que pueden verse afectados. La afectación al patrimonio moral no requiere de una mayor exposición mediática, sino que bastaría que la afectada se enterara, incluso por conductos formales, de los hechos en que fue sustentada la denuncia para que esta se actualice.
- 8.9. A lo anterior, agrega que la exposición en medios de comunicación y redes sociales tiene por efecto magnificar el hecho ilícito y, por ende, el daño causado. Como lo apuntó el *A quo*, se debe tomar en cuenta que, por las características y alcance del ciberespacio, puede presumirse la existencia de una afectación en el fuero interno de la persona. Esto encuentra apoyo en la teoría de la prueba objetiva del daño moral conforme a la cual el demandante sólo tiene la carga de probar la existencia del acto ilícito y la incidencia de sus efectos en su persona

⁶ Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis I.3º.C.375 C, Novena Época, registro digital 185208, de rubro “DANO MORAL. SU RECLAMACIÓN NO PUEDE SUSTENTARSE EN LA SIMPLE PRESENTACIÓN DE UNA DEMANDA, A NO SER QUE ÉSTA SE BASE EN HECHOS FALSOS, CALUMNIOSOS, INJURIOSOS O DE NATURALEZA SEMEJANTE”.

para tener por acreditado el daño. En apoyo a lo anterior, el Tribunal Colegiado cita las tesis de rubros “TEORÍA OBJETIVA DE LA PRUEBA DEL DAÑO MORAL. SU APLICACIÓN CUANDO SE AFECTAN EL HONOR Y LA REPUTACIÓN DE UNA PERSONA POR INFORMACIÓN DIVULGADA A TRAVÉS DE INTERNET”⁷ y “TEORÍA DE LA PRUEBA OBJETIVA DEL DAÑO MORAL. SÓLO ES APLICABLE CUANDO EL DAÑO SE PRESUME”.⁸ Los anteriores criterios dejan ver que no debe exigirse prueba directa de los daños, sino que estos pueden acreditarse indirectamente. En el caso, los señalamientos del quejoso hicieron parecer a la tercera interesada como una periodista corrupta y sobornable. Por consiguiente, el daño se puede deducir con base en las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, mismo que se vio maximizado por la exposición que tuvo en medios el hecho generador.

- 8.10. Por otra parte, son **ineficaces** los argumentos relativos a la falta de nexo causal. El *A quo* sí proporcionó el fundamento y motivo detrás de su determinación; el nexo causal quedó conformado con el hecho ilícito y el daño.
- 8.11. Asimismo, la sentencia califica de **ineficaces** a los argumentos del quejoso según los cuales la sentencia reclamada no analizó la existencia de una conducta atribuida a los medios de comunicación. La autoridad responsable no omitió examinar dicho agravio, además de que la argumentación del quejoso no controvierte una consideración toral del fallo reclamado. Nada dice en relación con que el daño moral se reclamó con base en el contenido de la información en sí misma. En todo caso, era necesario explicar por qué los medios de comunicación podían adquirir legitimación, aunque no se les atribuya el carácter de autores de la información. Lo anterior es

⁷ Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis I.5º.C.21 C (10ª.), Décima Época, registro digital 2003785, de rubro “TEORÍA OBJETIVA DE LA PRUEBA DEL DAÑO MORAL. SU APLICACIÓN CUANDO SE AFECTAN EL HONOR Y LA REPUTACIÓN DE UNA PERSONA POR INFORMACIÓN DIVULGADA A TRAVÉS DE INTERNET”.

⁸ Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis I.4º.C.300 C, Novena Época, registro digital 163713, de rubro “TEORÍA DE LA PRUEBA OBJETIVA DEL DAÑO. SÓLO ES APLICABLE CUANDO EL DAÑO SE PRESUME”.

acorde con la tesis "MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CARECEN DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PARA COMPARECER AL JUICIO EN QUE SE HACE VALER LA ACCIÓN DE DAÑO MORAL CUANDO NO SON LOS AUTORES INTELECTUALES O MATERIALES DEL TEXTO QUE PUBLICARON".⁹

- 8.12. El quejoso también argumentó que la sentencia reclamada estudió deficientemente su quinto agravio al no examinar las excepciones que opuso. Sin embargo, se advierte que estas sí fueron examinadas, por lo que no hubo una violación a los deberes de claridad, precisión y congruencia de las sentencias.
- 8.13. Por otra parte, el quejoso señala que la Sala responsable no analizó el séptimo agravio de su recurso de apelación en el que impugnó la falta o indebida motivación del *A quo* al valorar diversas pruebas presentadas por la tercera interesada en el juicio de origen. Estos argumentos deben considerarse **inoperantes** puesto que, para efectos de tener por acreditada la acción de daño moral, es intrascendente examinar si la tercera interesada demostró la falsedad de las manifestaciones que constituyeron el hecho ilícito. Por su parte, son **fundados pero inoperantes** los argumentos del quejoso según los cuales la autoridad responsable omitió estudiar el octavo agravio en que combatió la cuantificación del daño moral. No sólo debe considerarse que el hecho de la ponderación del daño es distinto de su cuantificación, sino que esta se hizo depender del resultado de otros motivos de inconformidad que no prosperaron, por lo que seguirían su misma suerte procesal.
- 8.14. Los argumentos del quejoso en relación con la falta de estudio del décimo agravio, en que hizo valer temas de constitucionalidad en el

⁹ Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis I.3º.C.581 C, Novena Época, registro digital 173548, de rubro "MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CARECEN DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PARA COMPARECER AL JUICIO EN QUE SE HACE VALER LA ACCIÓN DE DAÑO MORAL CUANDO NO SON LOS AUTORES INTELECTUALES O MATERIALES DEL TEXTO QUE PUBLICARON".

fallo apelado, así como del planteamiento por analogía del efecto corruptor en el proceso civil, son **ineficaces**. El tribunal de alzada determinó infundado dicho agravio con base en los argumentos en que justificó la divulgación de la denuncia. Si bien se estima que ello fue inadecuado, la ineficacia radica en que lo fundado de la acción quedaba acotado al procedimiento civil sin perjuicio del resultado de la investigación ministerial, aunado a que el quejoso sí adquirió la carga de acreditar los hechos sobre los que afirmó “conducirse con verdad”. También es ineficaz argumentar la actualización analógica del efecto corruptor pues las circunstancias que lo configuran no guardan similitud con el procedimiento civil.

- 8.15. Por último, son **inoperantes** los argumentos planteados al interior del tercer grupo de conceptos de violación. Ello, puesto que debe privilegiarse la resolución del fondo del asunto por encima de las violaciones procesales que, de revertirse, no derivarían en ningún beneficio para el quejoso. Las pruebas que el quejoso señala como indebidamente admitidas no sólo no fueron ponderadas en la sentencia reclamada, sino que corresponden a medios de convicción intrascendentes para determinar lo fundado de la acción de daño moral, aunado a que la figura del efecto corruptor es inaplicable en materia civil. Además, es patente la inoperancia de los conceptos de violación puesto que el quejoso no precisó la forma en que las violaciones trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo en términos del artículos 174 de la Ley de Amparo. Ello no se alcanza a deducir ni de su causa de pedir.
- 8.16. Por lo tanto, al considerar como ineficaces a los conceptos de violación y no advertir la existencia de queja deficiente que suplir de conformidad con la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado determinó **negar** el amparo solicitado.

9. **Recurso de revisión.** Emilio Lozoya interpuso recurso de revisión en contra de esta sentencia. Formuló cuatro agravios, en donde los primeros dos se subdividen en diversos argumentos.

9.1. **Primer agravio.** El recurrente cita como motivo de agravio la interpretación de los artículos 1; 20, apartado A, fracción V; 21 y 102 constitucionales a la luz de los artículos 8 y 25 de la CADH llevada a cabo por el Tribunal Colegiado. Pese a que el Colegiado omite analizar las cuestiones de constitucionalidad planteadas, sí hace una interpretación implícita y explícita de dichos artículos. Bajo dicha argumentación equivocada, se llega a las siguientes consecuencias:

- a. Un investigado en una carpeta de investigación puede, por la vía civil, obtener información sobre los datos de prueba que soportan los hechos denunciados a pesar de que la investigación se encuentre en trámite y bajo reserva.
- b. Un denunciante, víctima u ofendido de hechos de corrupción debe acreditar su dicho en sede civil si es demandado por el investigado y éste último señala que son falsos los hechos.
- c. Un denunciante, víctima u ofendido de hechos de corrupción debe acreditar su dicho en la sede penal –asunto de origen– so pena de ser obligado a pagar una indemnización.
- d. Los derechos y deberes establecidos en los artículos 1; 20 apartado A, fracción V; artículo 21, y 102 de la Constitución no se aplican transversalmente.
- e. Un juez del fuero común puede determinar que los hechos de corrupción de una carpeta de investigación federal son falsos a pesar de que la misma se encuentre en trámite.

En su **primer argumento**, el recurrente sostiene que las denuncias penales tienen una naturaleza distinta a las demandas civiles. Cuando se trata de denuncias sobre actos de corrupción estatal o bien cuando el denunciante tiene la calidad de “alertador”, la distinción entre denuncias y demandas debe tener un efecto reforzado. Al respecto,

refiere que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte IDH”) ha sido enfática en señalar que una investigación seria y diligente debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio. Tratándose de hechos de corrupción, el Estado cuenta con un deber específico de investigación en que, por un lado, dirija los esfuerzos para desentrañar las estructuras que los permitieron y, por otro, prevenga la utilización de mecanismos que generen impunidad.

Además, la Corte IDH ha sostenido que, cuando se está frente a expresiones que involucran temas de interés público, la exigencia de la comprobación de la veracidad de los hechos constituye una carga imposible de cumplir para quien los denuncia. Su investigación corresponde a las autoridades pertinentes. En lo que interesa, destaca que denunciar un hecho delictivo no sólo es un derecho, sino una obligación en términos del artículo 21 constitucional, y que la labor de esclarecer los hechos y la carga de la prueba en materia penal no corresponde a las partes, sino al Ministerio Público de conformidad con el mismo artículo constitucional. Si bien es posible que la víctima o denunciante se constituyan como coadyuvantes, ello no se trata de una obligación. Señala que los tribunales federales han sostenido que las personas señaladas en una denuncia penal o que son materia de investigación no resienten, por este mero hecho, un perjuicio en su esfera de derechos.¹⁰ En cambio, el Estado tiene la obligación constitucional frente a hechos señalados como de corrupción de iniciar una investigación seria, imparcial y efectiva. Por ende, no puede calificarse de “hecho ilícito” una denuncia en donde el denunciante, víctima u ofendido no colma la carga probatoria.

No es obstáculo para llegar a esa conclusión el hecho de que el presente asunto se haya desarrollada en sede civil y no penal, puesto que los derechos humanos deben aplicarse transversalmente. La

¹⁰ Al respecto, cita la tesis XIII. P.A.32 P (10ª.), de registro digital 2017560 y rubro “MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLÉN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS”.

interpretación del Colegiado es, además, contraria al interés del Estado en fomentar que se denuncien hechos, sobre todo de corrupción. Entonces, son aplicables los artículos 20 apartado A fracción V, 21 y 102 de la Constitución a cualquier instancia cuando lo que está en el centro del debate es el análisis de la veracidad de la denuncia, incluyendo un proceso civil como el presente.

En su **segundo argumento**, el recurrente plantea que la imposición de la carga de la prueba que le fue hecha se basó en una interpretación errónea del artículo 20, apartado B fracción VI constitucional. Dicha norma es clara en establecer que, si bien el investigado tiene derecho a la carpeta de investigación, este se encuentra restringido a la actualización de las hipótesis referidas en la Constitución. Pese a que la reserva de la información se ha ido flexibilizando mediante criterios jurisprudenciales, esta flexibilización no existía al momento de establecerse la litis de la demanda. En todo caso, dicha gestión debe realizarse por la persona indicada ante las instancias penales, no por la víctima a través de la respuesta que se dé a acciones civiles.

Revertir la carga de la prueba al denunciante, víctima u ofendido implica que estos den a conocer los datos de prueba con los que cuenta a fin de no ser obligado a pagar una suma indemnizatoria. Ello sería contrario no sólo al artículo 20 en su apartado B, fracción VI, de la Constitución, sino también en su apartado A, fracción V, y a los artículos 21 y 102 constitucionales, los cuales deben aplicarse transversalmente. De imponerse esta carga en materia civil, se distorsionaría el diseño constitucional de la materia penal.

El **tercer argumento** se enfoca en demostrar que el diseño constitucional de la investigación de hechos delictivos, sobre todo tratándose de hechos de corrupción, coloca la labor de esclarecimiento sobre la autoridad estatal. La reversión de la carga de la prueba a cargo del denunciante, víctima u ofendido no sólo parte de una interpretación indebida de la Constitución, sino también desincentiva de

la obligación de denunciar hechos delictivos. Ello es contrario a los artículos 1, 17, 20 y 21 de la Constitución y a la Convención Interamericana contra la Corrupción.

El recurrente cita al Informe No. 20/29 elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”) en el Caso Rodolfo Robles Espinoza e Hijos vs Perú, en el cual se señaló que la denuncia presentada representaba el cumplimiento de obligaciones como ciudadano y funcionario público. En esa medida, dicho cumplimiento no podría volver ilícito el acto de denuncia. Sin embargo, ese derecho se desincentiva cuando la denuncia de tales hechos puede ser sancionada en la vía civil mediante la acción de daño moral; es decir, se estaría frente a un *chilling effect*.

- 9.2. **Segundo agravio.** El recurrente afirma que el Tribunal Colegiado no analizó el apartado de argumentos de constitucionalidad planteados. En apoyo de lo anterior, ofrece los siguientes dos argumentos.

En el **primero argumento**, refiere que el Tribunal Colegiado no resolvió el argumento relativo a la incompetencia de un juez local civil de conocer y calificar hechos materia de una investigación ministerial federal en trámite. Si en sede civil se establece que hay una falsedad en los hechos, invariablemente hay una invasión de competencia al valorar un hecho que en la etapa de investigación le corresponde al Ministerio Público. Este argumento se planteó en el décimo agravio de la apelación, así como en los conceptos de violación 1.2.4 y 1.2.5 del amparo.

El **segundo argumento** consiste en que el Tribunal Colegiado tampoco valoró la analogía planteada por el quejoso entre la doctrina del *efecto corruptor* del proceso penal en el proceso civil. A lo largo del juicio —sostiene— la actora/tercera interesada ha fomentado la idea según la cual el quejoso estaba sujeto a la medida cautelar de arraigo y que se trataba de un criminal confeso. Esta situación no fue valorada por el Colegiado a pesar de haber sido planteada.

En esta línea, sostiene que existe un deber de los tribunales de proteger “oficiosamente” a los “alertadores” o “*whistleblowers*” de demandas encaminadas a la inhibición de la denuncia para lo cual, con independencia de que se exponga o no como “excepción”, deben atender a las circunstancias del caso para determinar si estamos ante una demanda maliciosa. El Tribunal Colegiado debió analizar si la demanda presentada, sumada a las estigmatizaciones públicas al quejoso, representaban una forma de intimidación por haber hecho una denuncia sobre hechos de corrupción y que tuviera efectos en el procedimiento.

- 9.3. **Tercer agravio.** El recurrente señala como motivo de agravio la indebida interpretación del derecho a la libertad de expresión llevada a cabo por Colegiado. Al considerar que una denuncia relativa a hechos de corrupción no entra dentro de su protección, se niega la relevancia de la figura del alertador para la libertad de expresión. Tal visión acota la aplicabilidad de esta figura a los medios de comunicación y periodistas.

Contrario a lo anterior, la denuncia que realiza un “alertador” o “*whistleblower*” sobre hechos de corrupción es un ejercicio claro de libertad de expresión con una interdependencia con otros derechos. Por lo tanto, son aplicables la Ley de Responsabilidad Civil al igual que el marco jurídico del derecho a la libertad de expresión. En apoyo a lo anterior, refiere a que tanto la CIDH como su Relatoría Especial para la libertad de expresión han reconocido a la denuncia como una manifestación de la libertad de expresión.¹¹ La Corte IDH también ha destacado la vinculación entre libertad de expresión y los mecanismos de denuncia, especialmente cuando entraña asuntos de interés público.¹² Esta interpretación encuentra eco en los dichos del Relator

¹¹ CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ivcher Bronstein v. Perú

¹² Corte IDH. Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 1074, párr. 165.

Corte IDH. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 2937, párr. 140.

Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión¹³ y en lo fallado por la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso *Heinisch v. Alemania*.¹⁴

Además de lo anterior, y pese a que el A quo invisibilizó la difusión de la denuncia en su sentencia, lo cierto es que ello implica una incongruencia al haber referido que ese hecho maximizó los daños. Esto implicaba analizar el caso bajo los estándares de la libertad de expresión.

- 9.4. **Cuarto agravio.** El recurrente señala que el Colegiado realiza una indebida interpretación del artículo 17 constitucional. Dicho precepto ordena privilegiar la resolución de fondo por encima de los formalismos jurídicos, y contempla el derecho para recurrir el fallo. En el presente asunto, la autoridad de amparo se constituyó en autoridad ordinaria al pronunciarse y plantear argumentos que no habían sido analizados por las autoridades responsables bajo la excusa de privilegiar el fondo sobre la forma.

El recurrente afirma que la interpretación del artículo 17 constitucional llevada a cabo por el Tribunal Colegiado es indebida. Si bien debe privilegiarse la resolución de fondo por encima de los formalismos jurídicos, no puede llegarse al extremo de sustituirse en la autoridad ordinaria y resolver cuestiones esenciales del procedimiento mediante argumentos novedosos y que admitan distintas interpretaciones. La doctrina de la Corte —cita al Amparo Directo 23/2014 y al Amparo en Revisión 2814/2014— ha sido clara en ese sentido y ha establecido el carácter excepcional de asumir jurisdicción por parte de un órgano terminal.

Son tres los aspectos en los que sostiene que el Colegiado asumió la autoridad de instancia ordinaria y dejó al recurrente sin defensas.

¹³ David Kaye, 2015, pág. 4.

¹⁴ Corte Europea de Derechos Humanos (2011). Caso *Heinisch v. Alemania*. Sentencia (méritos y justa satisfacción). Considerando 93.

Primero, la reversión de la carga de probar la veracidad de los hechos denunciados se invirtió al quejoso a través de argumentos novedosos. Por ello, fue imposible para el quejoso defenderse frente a ellos. Las razones por las que se determinó que la carga de la prueba de acreditar la veracidad de los hechos denunciados son argumentos que ninguna autoridad había planteado y que admiten múltiples interpretaciones. El juez de primera instancia revirtió la carga de la prueba al quejoso al considerar que no estábamos ante hechos negativos, mientras que el juez de segunda instancia lo hizo con fundamento en la prueba confesional. Por su parte, el tribunal de amparo lo justifica puesto que, al contestar la demanda, afirmó que su única obligación ante el Ministerio Público es conducirse con verdad. Si bien el tribunal de amparo se apoyó en varios argumentos para negar el amparo, fue bajo este argumento “eje” y novedoso que declaró inoperantes diversos argumentos antes considerados fundados.

El segundo argumento novedoso es la exclusión de la exposición mediática como la fuente del daño. Esta exclusión nos impide identificar la existencia de un nexo de causalidad y, en consecuencia, de un daño. Fue a través de esta exxposición que la actora conoció de la denuncia. Así mismo, como tercer argumento novedoso pero que parte de la misma exclusión de la exposición mediática como hecho relevante, el Colegiado aseveró que aun supimiéndose esta divulgación se generaría el daño. Más allá del nexo causal, esta es una argumentación distinta a la de instancias ordinarias, en las que el daño se basó en la exposición mediática.

10. **Trámite ante esta Suprema Corte.** El 25 de enero de 2024, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte tuvo por recibido el recurso, le asignó el número de expediente 555/2024 y lo admitió a trámite. Asimismo, turnó el expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrante de esta Primera Sala, para la elaboración del proyecto de resolución.

11. **Avocamiento.** Finalmente, el 7 de mayo de 2024, el Presidente de esta Primera Sala señaló que la misma se avocaba al conocimiento del asunto y remitió el expediente al Ministro Ponente.

I. COMPETENCIA

12. Esta Primera Sala es competente para conocer del presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de esta Suprema Corte, por tratarse de un asunto de naturaleza civil que corresponde a la especialidad de esta Sala, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. OPORTUNIDAD

13. Como se advierte de la lectura de las constancias, la sentencia del Tribunal Colegiado le fue notificada a Emilio Lozoya por medio de lista el 14 de diciembre de 2023, por lo que surtió efectos al día siguiente –viernes 15 de ese mismo mes y año. Al ser el día 2 de enero de 2024 el siguiente día hábil, debe considerarse que el término de 10 días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió de los días 2 a 15 de enero del mismo año. Dado que el recurso de revisión fue presentado el 15 de enero, se concluye que se presentó de manera oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

14. El medio de impugnación fue interpuesto por el apoderado legal del quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se satisface el requisito de legitimación.

IV. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO

15. Esta Primera Sala estima que el presente asunto **no actualiza los requisitos de procedencia** de un amparo directo en revisión. Para explicar esta conclusión, delinearemos los criterios de procedencia de este tipo de recursos, para después aplicarlos al caso concreto.

Criterios de procedencia del recurso

16. El recurso de revisión en amparo directo se distingue por ser un medio de impugnación extraordinario, el cual sólo procede cuando se cumplen los requisitos señalados expresamente por la Constitución y la Ley de Amparo. Por este motivo, la procedencia de este tipo de recursos siempre debe ser analizada de manera previa al estudio de fondo.
17. Al respecto, los requisitos de procedencia han sido interpretados y clarificados en numerosas tesis jurisprudenciales y aisladas de esta Corte, así como en sus Acuerdos Generales Plenarios. De estos últimos destaca el Acuerdo 9/2015, el cual prevé dos condiciones conjuntivas para la procedencia de este recurso:
- a) En primer lugar, el recurso de revisión debe implicar un problema de constitucionalidad. Esto se actualiza cuando en la sentencia de amparo el tribunal colegiado haya decidido u omitido decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o haya interpretado directamente un precepto constitucional o un derecho humano establecido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
 - b) En adición a lo anterior y como segundo paso, el referido tema de constitucionalidad debe entrañar la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, requisito que se actualiza: (a) cuando se trate de la fijación de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional, o (b) cuando las consideraciones de la sentencia recurrida puedan implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la

Suprema Corte relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional.

18. Ahora bien, por reforma constitucional de 11 de marzo de 2021, se modificó el artículo 107, fracción IX, para modificar el segundo requisito de procedencia. Mientras en su redacción anterior refería a que el tema de constitucionalidad permitiera fijar un criterio de "importancia y trascendencia", ahora se establece que el recurso procede cuando el asunto revista un *interés excepcional* en materia constitucional o de derechos humanos, a criterio de esta Suprema Corte.¹⁵ Este cambio también se vio reflejado en la redacción del artículo 81 de la Ley de Amparo.¹⁶
19. De acuerdo con la exposición de motivos de la reforma, el propósito de esta modificación –y de los cambios a los requisitos de procedencia en general– fue otorgar mayor discrecionalidad a la Corte para conocer de este tipo de recursos. En este sentido, se hizo "hincapié en la excepcionalidad" que ameritan tener estos asuntos para ser conocidos en esta instancia.¹⁷ Todo esto de acuerdo con la naturaleza del amparo directo en revisión, el cual constituye una vía extraordinaria¹⁸ para la construcción y desarrollo de

¹⁵ **Artículo 107.** Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...]

IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En contra del auto que deseche el recurso no procederá medio de impugnación alguno;

¹⁶ **Artículo 81.** Procede el recurso de revisión: [...]

II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras.

¹⁷ "Recurso de revisión en amparo directo. Con el fin de fortalecer el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional se propone modificar la fracción IX del artículo 107 constitucional con el sentido de darle mayor discrecionalidad para conocer del recurso de revisión en amparo directo, únicamente cuando a su juicio el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Asimismo, se establece la inimpugnabilidad de los autos que desechen la revisión en amparo directo, con el objeto de fortalecer el trabajo del Alto Tribunal y hacer hincapié en la excepcionalidad de los recursos." Exposición de motivos, Ciudad de México, jueves 20 de febrero de 2020, iniciativa del Ejecutivo Federal.

¹⁸ Al respecto, el dictamen de la Cámara de Origen (Cámara de Senadores) establece que el amparo directo en revisión "*constituye una vía extraordinaria para fijar una agenda de protección*

jurisprudencia y no un recurso ordinario para la revisión de las sentencias que emitan los tribunales colegiados de circuito.¹⁹

20. Además, por regla general no es posible introducir cuestiones de constitucionalidad en los agravios del recurso de revisión si dichos planteamientos no se hicieron valer en la demanda de amparo, pues ello variaría la litis del juicio de amparo y transgrediría el principio de estricto derecho. Sin embargo, esta regla no cobra aplicación cuando, derivado de las particularidades del juicio de amparo, los agravios formulados en la revisión constituyen la única vía con la que cuenta la parte recurrente para hacer valer los planteamientos de inconstitucionalidad, ya sea porque (a) no estaba en aptitud de acudir al juicio de amparo en calidad de quejosa, o (b) estando en aptitud, el planteamiento de constitucionalidad deriva de la resolución del Tribunal Colegiado, al ser dicha sentencia el primer acto de aplicación de la norma impugnada o la primera ocasión que se introduce la interpretación constitucional que se controvierte, sin que esto implique desvirtuar la naturaleza excepcional que reviste el recurso de revisión.²⁰

Aplicación al caso concreto

21. Como se anticipó, el asunto que nos ocupa no reúne los requisitos de procedencia necesarios. Aunque el recurrente insiste en que el Tribunal Colegiado realizó diversas interpretaciones –explícitas e implícitas– de normas constitucionales, un análisis detallado del caso muestra que no existe, en realidad, un planteamiento de constitucionalidad que justifique la intervención de esta Corte en esta etapa procesal. Para demostrarlo, es necesario desmenuzar los agravios planteados.

de los derechos [...] por lo que esta propuesta permitiría que la Suprema Corte incida de manera más efectiva en jurisprudencia de derechos, evitando distraer de manera considerable sus esfuerzos institucionales”). Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, Ciudad de México, 27 de noviembre de 2020, Cámara de Senadores.

¹⁹ En el dictamen de la Cámara de Origen también se expresó que “con la propuesta no se actualizaría una violación al derecho de acceso a la justicia, ni de acceso a un recurso efectivo, toda vez que la revisión del amparo directo constituye una herramienta para construir esencialmente doctrina constitucional”. Ibid.

²⁰ Primera Sala, tesis aislada 1a. XLII/2017 (10a.), Décima Época, registro electrónico 2014101, de rubro “AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SUPUESTO EN EL QUE LA INTRODUCCIÓN DEL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO PUEDE DAR LUGAR POR EXCEPCIÓN A SU PROCEDENCIA.”

22. Los primeros dos agravios están estrechamente relacionados. En esencia, ambos parten de la premisa de que existe una conexión necesaria –una suerte de interdependencia– entre los ámbitos penal y civil. Esta idea se expresa de manera distinta en cada argumento del recurrente. El primer argumento del primer agravio plantea una vinculación a nivel de cargas probatorias, en donde se objeta que se le haya asignado la carga probatoria en este proceso (civil) cuando es el Ministerio Público quien detenta esta responsabilidad (penal). El segundo argumento cuestiona que, a través de un proceso civil, se tenga acceso a información que de otro modo estaría reservada por los principios del derecho penal. En el tercer argumento se plantea que esta aparente confusión entre esferas genera un desincentivo para la presentación de denuncias penales.
23. Luego, el segundo agravio inicia con un argumento competencial; bajo la concepción del recurrente, los jueces civiles son incompetentes para calificar hechos materia de una investigación criminal, lo que de nuevo asume que dicha calificativa de hechos tiene influencia en el eventual proceso penal.²¹ Finalmente, en el segundo argumento de este agravio sostiene que el Colegiado no estudió su planteamiento sobre el efecto corruptor en el proceso civil –cuestión que podemos descartar desde este momento dado que el Colegiado sí se pronunció sobre el tema²²– así como la necesidad de una protección reforzada de los “alertadores” o “*whistleblowers*”.
24. En este contexto, el recurrente pretende encuadrar su caso en los artículos 20, apartados A y B, fracciones V y VI respectivamente, 21 y 102 constitucionales,²³ los cuales contemplan los principios generales del proceso penal, los derechos de las personas imputadas y algunas de las

²¹ Este planteamiento también se hace en el sentido de que fue un argumento no analizado por parte del Tribunal Colegiado. Este punto es cierto, no hay un pronunciamiento explícito del Colegiado más allá del reconocimiento de su propia competencia. No obstante, como se argumenta en el cuerpo de esta sentencia, esta falta de estudio no es de un tema propiamente constitucional porque los artículos 20, 21 y 102 constitucionales ni siquiera entran en juego en este caso.

²² Páginas 109 a 112 y 119.

²³ El recurrente también menciona los artículos 1 de la Constitución y 8 y 25 de la CADH, pero, como se desprende de la narrativa recién realizada, el centro de toda su argumentación está en la supuesta interpretación implícita de los preceptos que regulan el proceso penal por parte del Colegiado.

facultades de la Fiscalía General de la República.²⁴ El problema es que los artículos 20, 21 y 102 en realidad no estén involucrados en este caso, lo que lleva a la ausencia de una cuestión de constitucionalidad como requisito procesal en el recurso de revisión.

25. La relación entre las materias civil y penal ya ha sido materia de estudio por parte de esta Sala. En suma y de manera general, se ha definido que lo ocurrido en una clase de proceso (dígase civil) no tiene por qué influir de manera determinante en uno de otra clase (penal), particularmente en relación con los aspectos probatorios. Por esto, la cosa juzgada refleja no se traslada en automático de los procesos penales a los civiles y viceversa, a pesar de que involucren los mismos hechos.²⁵
26. Un ejemplo útil es el Amparo Directo en Revisión 4900/2019. En este caso, una señora demandó la pérdida de patria potestad de su entonces cónyuge

²⁴ **Artículo 20.** El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales: [...]

V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; [...]

B. De los derechos de toda persona imputada: [...]

VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarle. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; [...]

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. [...]

Artículo 102. A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. [...] Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. [...]

²⁵ Cf. Primera Sala, *Amparo Directo en Revisión 4900/2019*, sentencia de 17 de mayo de 2023, fallada por mayoría de cuatro votos de la señora Ministra y los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Ríos Farjat, Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y Pardo Rebolledo (quien se reservó su derecho a formular voto concurrente), con voto en contra del Ministro Zaldívar Lelo de Larrea. De este precedente derivó la jurisprudencia 1a./J. 137/2024 (11a.), Undécima Época, registro digital 2029376, de rubro "COSA JUZGADA MATERIAL O REFLEJA. NO SE ACTUALIZA EN UN JUICIO DE PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD CUANDO PREVIAMENTE SE DICTÓ SENTENCIA ABSOLUTORIA EN UN PROCESO PENAL DERIVADO DE LOS MISMOS HECHOS."

respecto a su hija. Simultáneamente, la señora presentó una denuncia penal en contra del señor por abuso sexual. La cuestión es que el señor fue absuelto en el proceso penal, lo que llevó al tribunal colegiado que estudió el juicio civil a declarar la cosa juzgada refleja y a desestimar las pretensiones *civiles* del caso. Esta Sala revocó la sentencia del colegiado en este punto porque presupone un grado de interdependencia entre las materias civil y penal que no es adecuado.²⁶

27. En primer lugar, los procesos civiles y penales difieren en cuanto a su *objeto*. Mientras el proceso penal está encaminado a analizar la culpabilidad del acusado en torno a un hecho o conducta concreta, en donde se deben satisfacer los elementos probatorios de todos los requisitos del tipo penal, el proceso civil puede tener una variedad muy amplia de objetos pero que no abarca los del penal. En el caso concreto, las demandas de daños tienen como último objetivo cumplir con el derecho de reparación integral de quien sufre un daño que no tiene por qué soportar, además de que los elementos de las acciones de daños no tienen por qué coincidir con los tipos penales.²⁷
28. En segundo lugar, el *estándar probatorio* y las distintas *cargas procesales* para acreditarlo también son diferentes y atienden a racionalidades distintas.²⁸ En el proceso penal, el Ministerio Público tiene la obligación constitucional de ser quien investiga los hechos delictivos, pues es quien ejerce la acción penal una vez que reúne elementos suficientes para poder acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona acusada. En el proceso civil, en cambio, las cargas probatorias tienen una distribución muy variada que atiende a los casos concretos e incluso a cómo se desenvuelven los procesos en sí mismos. Aquí, el tipo de hechos (positivos o negativos), la facilidad probatoria, así como las declaraciones de las partes en litigio, tienen influencia en la determinación de estas cargas, lo que además se considera una cuestión de estricta legalidad.

²⁶ Ibid. párr. 71.

²⁷ Amparo Directo en Revisión 4900/2019, Op. Cit. párr. 71.

²⁸ Ibid.

29. El *objeto de las pruebas* también es distinto, pues responden a elementos normativos que no siempre coinciden a pesar de que puedan derivar de los mismos hechos. No es lo mismo acreditar los elementos de una acción de daño moral que de algún delito por hechos de corrupción. Asimismo, los elementos probatorios con los que se cuenta en cada proceso pueden –y en la mayoría de los casos son– distintos: los procesos civiles responden en general al principio dispositivo y son las partes quienes por lo general aportan las pruebas; en el proceso penal, por el contrario, el Ministerio Público cuenta con diversas facultades para hacer llegar elementos probatorios al juicio, los que compiten con lo aportado por la defensa o alguna otra persona legitimada.
30. En el Amparo Directo en Revisión 4900/2019 todas estas consideraciones se usaron para rechazar la actualización de la cosa juzgada refleja de un proceso penal respecto a uno civil, lo que difiere del presente caso. No obstante, lo que nos interesa destacar son los planteamientos en su nivel fundamental y que nos llevan a un grado de vinculación entre los procesos penales y civiles muy destino al que presupone el recurrente en sus agravios.
31. En cierta medida, el recurrente parece prever esta posibilidad de diferenciación entre el proceso penal y civil. Ante esta distinción (y el hecho de que el Tribunal Colegiado en efecto aseveró que lo sostenido en el caso era relativo únicamente al proceso civil²⁹), sostiene que “los derechos humanos deben aplicarse de manera transversal”.³⁰
32. Este argumento es insuficiente. La transversalidad de los derechos humanos no puede implicar una traslación acrítica de los elementos de la materia penal a la civil o viceversa. Justamente por esto la materia penal tiene una regulación mucho más específica que la civil a nivel constitucional, y es una regulación que simplemente no se aplicó en este caso dado que no es un asunto en materia penal. En este contexto, para esta Sala los primeros dos agravios no entrañan ningún estudio propiamente

²⁹ Páginas 110, 111 y 119 de la sentencia.

³⁰ Página 26 del recurso.

constitucional, por lo que no pueden dar paso a la procedencia del presente recurso.

33. El tercer agravio es parecido, pero en relación con la libertad de expresión (artículo 6 de la Constitucional y 13 de la CADH). La pretensión fundamental del recurrente es cuestionar la ley aplicable: en su concepto, este es un caso de libertad de expresión, por lo que era necesario analizarlo conforme a la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, no conforme al artículo 1916 del Código Civil de manera exclusiva.
34. Más allá de que la definición de la ley aplicable es un tema de legalidad, el problema de este argumento es que la sentencia del Colegiado es clara en que la fuente del daño no está en una expresión particular por parte del recurrente. Además, con este tipo de argumentos solo se busca recategorizar el caso bajo un lente distinto para ampliar las posibilidades de defensa frente a una acusación de daño moral, lo que en realidad impacta en una dificultad en acreditar los supuestos de este daño en un plano de legalidad.
35. Ahora bien, si se considerara que este argumento sí alcanza el plano de constitucionalidad, el mismo no constituiría un interés excepcional que actualice la procedencia del recurso. Esta Primera Sala cuenta con una doctrina muy vasta en materia de libertad de expresión, particularmente en casos de daño moral que involucran tanto servidores públicos³¹ como medios de comunicación.³² Todos estos casos han dado paso al desarrollo del *sistema dual de protección*, el cual delimita de una manera diferenciada a las afectaciones de las que deben ser susceptibles ciertas personas por su interés público, así como el estándar de *real malicia* que deben acreditar en una demanda de responsabilidad civil. En este sentido, esta Sala ya cuenta con una multiplicidad de criterios, particularmente en el tipo de casos

³¹ Véase, entre muchos otros, los amparos directos 30/2020, 3/2016 y 25/2010, así como los amparos directos en revisión 172/2019, 2598/2017, 1105/2014, 3111/2013 y 2044/2008.

³² Véase, entre otros, los amparos directos 2806/2012 y 28/2010, así como el amparo directo en revisión 2411/2012.

como el presente: una disputa entre un exfuncionario público y una periodista.

36. Finalmente, el cuarto agravio tampoco involucra una cuestión de constitucionalidad. Aquí, la pretensión del recurrente de encuadrarlo en el plano de constitucionalidad descansa en el artículo 17 constitucional y la prevalencia de la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales.³³ Su agravio es que, en su concepto, el Tribunal Colegiado utilizó esta fórmula (la prevalencia del fondo sobre la forma) para comportarse como “autoridad ordinaria” y plantear argumentos novedosos respecto a tres temas: la reversión de la carga de la prueba, la existencia del nexo causal como elemento de la responsabilidad civil, y la exclusión de la exposición mediática de la denuncia como un hecho relevante.
37. El problema, de nuevo, es el presupuesto necesario de la argumentación del recurrente: que los tribunales colegiados, al juzgar un juicio de amparo, están atados a confirmar o negar lo decidido por la autoridad responsable sin poder desplegar ningún ejercicio argumentativo propio. Esto es incorrecto y no tiene nada que ver con la prevalencia del fondo sobre la forma del artículo 17 constitucional. De hecho, la mera posibilidad argumentativa de los colegiados es una garantía de acceso a la justicia. Gracias a esta autonomía de razonamiento es que pueden confirmar una sentencia con razonamientos *diversos* a los sostenidos en instancias ordinarias, tal como lo ha hecho la Corte en innumerables precedentes.
38. En el mismo sentido, esta Primera Sala no encuentra cómo es que la prevalencia del fondo sobre la forma sirvió como base para las tres determinaciones que agravan al recurrente. Al final el Colegiado tenía jurisdicción sobre estas preguntas de manera autónoma a la aplicación de esta fórmula de priorización de estudio, por lo que no vemos cómo es que el Colegiado tuvo que interpretar el artículo 17 constitucional para llegar a las conclusiones que alcanzó en las tres temáticas señaladas.

³³ Artículo 17. [...]

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. [...]

39. Finalmente, es importante destacar que estas tres temáticas son en sí mismas cuestiones de mera legalidad. Como ya vimos, la asignación de la carga de la prueba en los procesos civiles es casuística y en el caso concreto respondió a cómo se desarrolló el litigio, no a una consideración de orden constitucional. Por su parte, el nexo causal es un elemento de la responsabilidad civil que simplemente une el hecho ilícito con el daño causado, lo que depende de determinaciones probatorias y es en sí un factor de mera legalidad. Por último, la relevancia o no de la exposición mediática de la denuncia de nuevo corresponde a la identificación de los elementos que configuraron la responsabilidad civil en el caso concreto, lo que no asciende al plano constitucional. En estos términos, no se puede invocar el artículo 17 constitucional como pretexto para controvertir, en amparo directo en revisión, determinaciones de mera legalidad.
40. Por estas razones, y en atención a la discrecionalidad con la que contamos para considerar que un asunto no actualiza los requisitos de procedencia en los amparos directos en revisión, estimamos que este recurso debe desecharse. No es obstáculo para arribar a esta conclusión que la presidenta de esta Suprema Corte hubiese admitido el recurso bajo examen, pues no constituyó una decisión definitiva. Esta decisión corresponde a esta Primera Sala y es en el sentido de que el recurso es improcedente.³⁴

V. DECISIÓN

Por todo lo expuesto y fundado, se resuelve:

Primero. Se desecha el presente recurso de revisión.

Segundo. Queda firme la sentencia recurrida.

Notifíquese; en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

³⁴ Tribunal Pleno, Jurisprudencia P.J.19/98, Novena Época, registro electrónico 196731, de rubro "REVISIÓN EN AMPARO. NO ES OBSTÁCULO PARA EL DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, SU ADMISIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."

ANEXO 4

ANEXO 5

ANEXO 6

← Post



Presidenta @ClaudiaShein dejo aquí mi testimonio SIN MIEDO. Urge que
 el Caso Lozoya se resuelva @SCJN, para hacer justicia en México
 @ONU_es @ONUMujeres @CIDH @sip_oficial @USAGov
 @USAGovEspanol @WhiteHouse @article19mexa @SecRUBio
 @ChrisLandauUSA @USAmbMex



7:43 a.m. · 1 jul. 2025 · 37 mil visualizaciones

194 O

17.11.11

3 mil

80

0 Ler 194 rospuotas

No te pierdas lo que está pasando
Las personas en X son las primeras en enterarse.

Iniciar sesión

Registrate

¿Eres nuevo en X?

Regístrate ahora para obtener tu propia cronología personalizada.

G Registrarse con Google

Registrarse con Apple

Crear cuenta

Al registrarte, aceptas los **Términos de servicio** y la **Política de privacidad**, incluida la **política de Uso de Cookies**.

Algo salió mal, intenta recargar.

 Intentar de nuevo

[illegible]

2011.09.09 14:56:45

Information and Management Sciences

3-2925X-0000

ANEXO 7

Post

Lourdes mendoza ✓
@lumendoz

Gracias a la Corte por abrir espacio a este asunto y espero por fin que ponga punto final a este asunto que tanto me ha dejado en resiliencia y aprendizaje.

PRIMERA SALA
 SE REANUDARÁN LOS SEÑALES EN LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
 DEL 1.º DE AGOSTO DE 2025 A LAS OCHO HORAS.
 EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PUEDE QUE REZARÉ ORTIZ AGRA.
 EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PUEDE QUE REZARÉ ORTIZ AGRA.
SEÑALES LISTADOS CON ANTERIORIDAD
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

Nº	DATOS	ASIR
26	MAESTRO CAMILO RAZIEL WEINSEL ZAPATA (GUTIERREZ) TALLERES INTERNALES MARIA DE LOURDES SANCHEZ PLATA (GUTIERREZ) ADJUNTA ACTO RECLAMADO: LA SINIENITA DICTADA EN 1934 (1936) TITULO DE ORIGEN: NOVENO TRIENNAL CERTIFICADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE 1936	ASIR NÚMERO 58 FOLIO 101 SUPERIORE DE LA CL MEARO

20 a. m. · 8 ago. 2025 · 5.309 Visualizaciones

Q 51 154

378 ♡

6

↑

No te pierdas lo que está pasando
Las personas en X son las primeras en enterarse.


Las personas en X son las primeras en enterarse;

Iniciar sesión

Registrate

¿Eres nuevo en X?

Regístrate ahora para obtener tu propia cronología personalizada.

 Registrarse con Google

 Registrarse con Apple

Crear cuenta

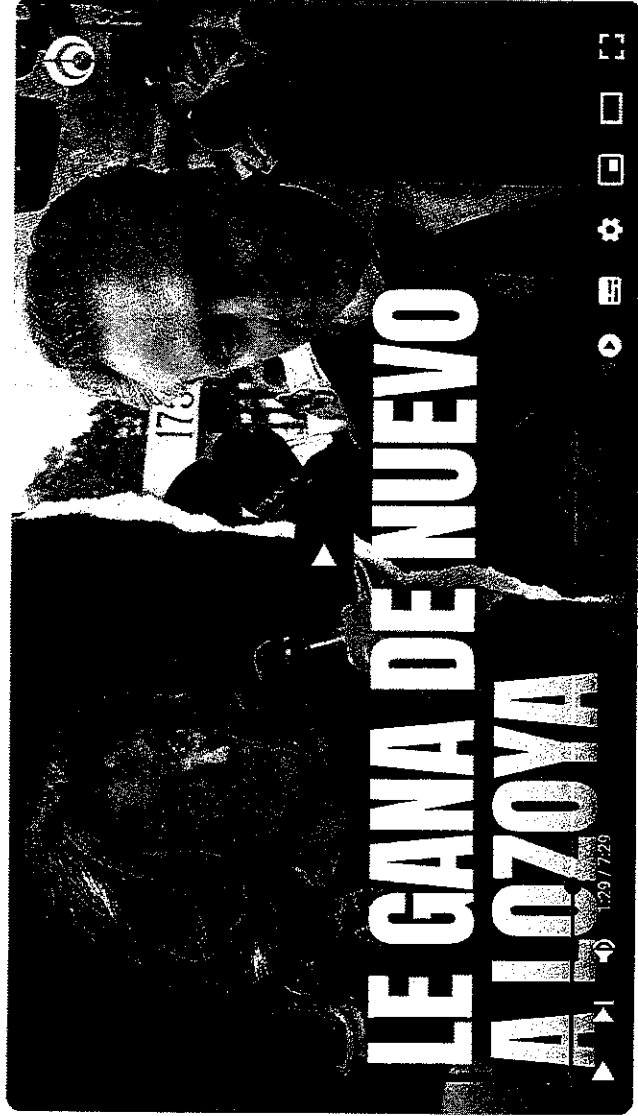
Al registrarte, aceptas los [Términos de servicio](#) y la [Política de privacidad](#), incluida la política de [Uso de Cookies](#).

Algo salió mal. Intenta recargar.

↻ Intentar de nuevo

Condiciones de Servicio Política de Privacidad
Política de cookies Accesibilidad
Información de anuncios Más opciones ...
© 2025 X Corp.

ANEXO 8



Lourdes Mendoza va contra abogado de Emilio Lozoya

🔔 **Grupo Fórmula**

3.05 M de suscriptores

Suscribirse

👍 122 🗨️ 122 📌 Guardar

4.8 K Vistas hace 1 día · **Ciro Gómez Leyva** Por la Mañana · Agosto 2025

- Promociones, descuentos y más**

Ofertas, descuentos y promociones

Petrolizado - zornobartolo.com...

Visitar sitio
- Sergio Gutiérrez Luna defiende a su esposa 'Dato protegido' y ...**

Grupo Fórmula

34 k vistas · hace 22 horas

Nuevo
- Israel Vallarta revela el detrás del montaje televisivo de su ...**

MILENIO

695 k vistas · hace 6 días

Nuevo
- Andy López Beltrán no tiene el talento como lo tenía AMLO, ...**

Grupo Fórmula

84 k vistas · hace 1 día

Nuevo
- 2Televisa, TV Azteca y la AFI: reptieron la toma hasta queda...**

Aristegui Noticias

178 k vistas · hace 4 días

Nuevo
- Periodista responde a 'Dato'**

ANEXO 9

Inicio (/) > Jorge Mario Pardo Rebolledo ()

Jorge Mario Pardo Rebolledo



Estudios

Licenciatura en Derecho, Escuela Libre de Derecho de 1979 a 1984. Fecha de Titulación: 16 de abril de 1986, con la tesis: La reclamación electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis laureada con Mención Honorífica.

Maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Master en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, con la tesina: El Síndrome de Alienación Parental.

Doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, con la tesis de grado: Propuesta para una real y efectiva garantía del Derecho a la defensa.

Cursos Recibidos

Especialización Judicial, Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial de la Federación; Diplomado en Derecho Constitucional y Amparo, Diplomado en Temas Selectos del Pensamiento Jurídico Contemporáneo, Diplomado en Proceso, Contexto Social y Derecho Internacional, Instituto de la Judicatura Federal; Diplomado en "Desarrollo del Factor Humano y Organizacional en la Gestión Jurisdiccional", Universidad Iberoamericana.

Actividades Académicas

Ha impartido el curso de Amparo Civil en el Instituto de Capacitación y

**Justicia**

6d79669e47c932a1d3b0481fa44223ec7952443e211d624618587b44d153babc61534da226a0e783edb8618dab7a2b8ad1db3ce4bb12644b59ba73d69176fdf9



Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en Toluca, Estado de México; Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en Toluca, Estado de México; Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Sala Penal y Civil a partir del 10 de febrero de 2011; fungió como Presidente de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 1 de octubre de 2012, cargo que desempeñó por un periodo de 2 años.

UBICACIÓN

Suprema Corte de Justicia de la Nación: Pino Suárez no. 2, Colonia Centro. Cuauhtémoc, C.P. 06065, México, Ciudad de México (<https://goo.gl/maps/So7jpmUrWE12>)

MAPA DE SITIO (/mapa-de-sitio)

TÉRMINOS Y CONDICIONES (/terminos-condiciones)

CONTÁCTANOS



(https://www.internet2.scjn.gob.mx/Directorio_Trans/Directorio.aspx) (/contact)

REDES SOCIALES



(<http://twitter.com/scjn>)



(<https://www.facebook.com/SCJNMexico/>)



(<https://www.youtube.com/scjn>)



(<https://instagram.com/scjnmexico>)



(<https://www.threads.net/@scjnmexico>)



(<https://www.linkedin.com/company/suprema-corte-de-justicia-de-la-naci%C3%B3n/?viewAsMember=true>)



(<https://www.tiktok.com/@lacortemx>)





DENUNCIAS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (<https://www.se.pjf.gob.mx/Buzon/Buzon>)

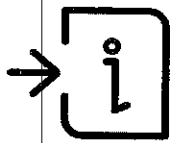


ASISTENCIA EN CASOS DE ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO (/ igualdad-de-genero/orientacion-materia-acoso-violencia)



- Información Pública / Denuncias
- Solicitudes
- Recursos
- Buscador

(<https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio>)



Consulta nuestras
Obligaciones de
Transparencia
(LGT Artículo 64)

([http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/?](http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/?idSujetoObligadoParametro=305&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=30)

[idSujetoObligadoParametro=305&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=30](http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/?idSujetoObligadoParametro=305&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=30))



ANEXO 10



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

Comunicados de Prensa

No.235/2009

México, D.F. a 26 de octubre de 2009

SE DEFINE TERNA DE LA QUE SURGIRÁ NUEVO CONSEJERO DE LA JUDICATURA FEDERAL

- En el Pleno de la SCJN, los magistrados César Esquinca Muñoa, Arturo Iturbe Rivas y Jorge Mario Pardo Rebolledo obtuvieron el mayor número de votos en el proceso de designación.
- Será en sesión pública, el martes 3 de noviembre, cuando se designe al integrante del CJF, mediante votación de los ministros.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conformó una terna de la que se designará a un consejero de la Judicatura Federal, en sustitución del consejero Luis María Aguilar Morales, cuyo periodo constitucional vence el próximo 30 de noviembre.

La terna quedó integrada por los magistrados César Esquinca Muñoa, Arturo Iturbe Rivas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes obtuvieron el mayor número de votos en una sesión pública efectuada hoy, en la que 10 aspirantes tuvieron que desarrollar un escrito con las respuestas a dos preguntas que les fueron formuladas al inicio.

Será el martes 3 de noviembre cuando se realice una nueva sesión, pública también, en la que se designará a quien ocupe el cargo, con vigencia del 1 de diciembre de este año, al 30 de noviembre de 2014.

En esa fecha, sólo se efectuará la votación correspondiente, y bastará que alguno de

los aspirantes alcance mayoría calificada de ocho votos, o más, de los ministros, para convertirse en integrante del órgano de administración, vigilancia y disciplina de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la SCJN.

En el supuesto de que ninguno alcance los votos requeridos, se realizará una nueva ronda con los dos aspirantes que hayan alcanzado el mayor número de sufragios.

De manera pública y transparente, se efectuó el sorteo de las preguntas a resolver – una relativa a las facultades del Consejo de la Judicatura Federal y otra en relación con el conocimiento de los acuerdos generales emitidos por ese organismo-, así como el orden en el que expondrían su respuesta ante los ministros del alto tribunal.

Con las preguntas señaladas, los aspirantes se trasladaron al antepleno, en donde dispusieron de 45 minutos y el equipo informático necesario para formular el escrito con sus respuestas.

De regreso en el salón de plenos, leyeron ante los ministros sus respuestas, y tras ello se efectuó la votación.

El magistrado César Esquinca Muñoz obtuvo ocho votos, el magistrado Arturo Iturbe Rivas, siete, cifra igual a la del magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo, con lo que se convirtieron en integrantes de la terna.

ANEXO 11

proceso

VIERNES 8 DE ABRIL DE 2011

Manda Calderón terna para ministro de la Corte; repite Pardo Rebolledo

■ NACIONAL Por La Redacción miércoles, 2 de febrero de 2011 - 01:00

MÉXICO, DF, 2 de febrero (apro).- A cuatro meses y medio del fallecimiento del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, el presidente Felipe Calderón envió hoy al Senado una terna de candidatos a sustituirlo.

Luego de que el lunes pasado los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) urgieran al Ejecutivo federal a enviar su propuesta, Calderón ofreció los nombres de tres jueces con trayectoria en el Poder Judicial.

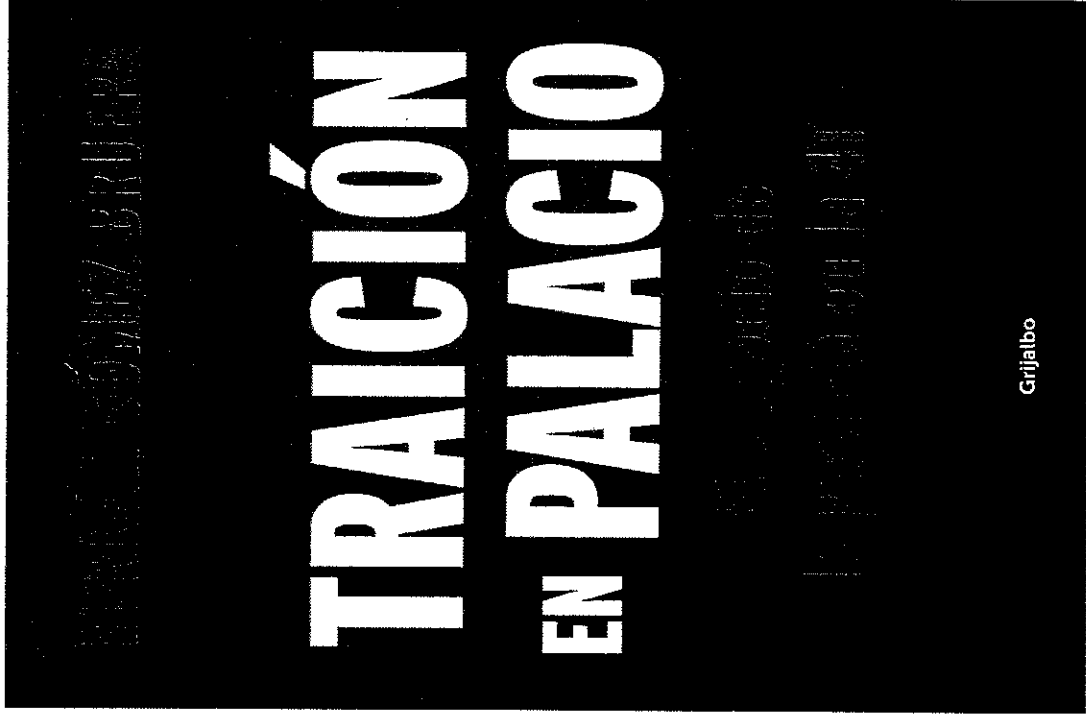
Las quejas de los ministros se agudizaron el lunes, pues no pudieron resolver un



-FIN DE NOT-

Ordenar por Más antiguo

ANEXO 12



Traición en Palacio

El negocio de la justicia en la 4T

A los y las responsables de que esta historia no se repita.

HERNÁN CÓMEZ BRUFRA

Grijalbo

Advertencia

El contenido, información, narrativas y documentación del presente libro se desprenden de un cúmulo de 80 testimonios provenientes de funcionarios de alto y medio rango de diversas instituciones públicas, así como de litigantes que afirman conocer al personaje aludido aquí o su forma de trabajar. Por lo anterior, todas las observaciones del autor se basan exclusivamente en premisas fácticas narradas a este, así como en los registros de litigios y negocios puestos a la vista del periodista. No son, en ningún momento, conjeturas personales o elucubraciones. Las premisas en las cuales se sustentan las observaciones del autor son producto de la investigación, y de ninguna manera debe entenderse como propósito suyo afectar la consideración que del sujeto aludido tengan terceros o como un deseo personal de dañar la reputación de aquel. Esta obra es única y exclusivamente resultado de una indagación documentada y con fuentes sólidas que permiten formular los señalamientos que nos fueron revelados, a fin de aportar información sustancial para nutrir el criterio público y proporcionar una versión histórica, por informantes cuya identidad, a petición suya y en ejercicio del secreto profesional, se ha mantenido bajo reserva.

Presentación

La mentira es el demonio,
la verdad es revolucionaria.

AMLO, 14 de diciembre de 2019

“Quiero dar a conocer que el licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo federal, ha decidido dejar el cargo y el encargo porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado”, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana del 2 de septiembre de 2021. El presidente quería mostrar que la relación entre ambos terminaba de forma amistosa, porque inmediatamente después agregó: “Julio es como mi hermano; nos ha ayudado mucho. Él es parte del proceso de transformación”. Naturalmente, la prensa corporativa, y el grueso de la burocracia, registró especialmente la segunda parte del mensaje.

Lo relevante de sus palabras, sin embargo, estuvo en una sutileza que solo registraron quienes conocen bien a Andrés Manuel López Obrador, para quien el compromiso con su proyecto político obedece a una entrega que va mucho más allá de las responsabilidades formales de un puesto burocrático: “ha decidido dejar el cargo y el encargo”. Ahí estaba lo relevante del asunto, el mensaje que quería dirigir a los más cercanos. Con estas palabras AMLO no solamente cerraba la posibilidad de que Scherer pudiera ocupar nuevamente un puesto en su gobierno, sino también que apoyara en determinado tipo de tareas, que siguiera gravitando en la órbita de la 4T o incluso ser considerado parte de su equipo de confianza. El subtexto del mensaje era claro. Quien entendió entendié: Julio Scherer Ibarra estaba fuera, fuera de todo.

Diez meses antes de eso, López Obrador había despedido a otra figura relevante de su gobierno, Alfonso Romo, aunque de una manera muy distinta. Cuando el empresario dejó la Oficina de la Presidencia, el presidente publicó un tuit que decía: “Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es

un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo". AMLO anunciaba también que Romo seguiría ayudándolo por fuera y le daba un espaldarazo claro llamándolo "honesto".

Sabemos que, en realidad, Alfonso Romo no volvió a ocupar un papel relevante; tal vez nunca lo tuvo. Pero el hecho que importa aquí consignar es que el presidente lo seguía considerando uno de los suyos. A Scherer Ibarra, en cambio, AMLO le agradeció públicamente su contribución y su trabajo en buenos términos, pero no le concedió la posibilidad de mantener ningún "encargo", ni abrió puerta alguna para que continuara ayudándolo. Por cierto, en su despedida tampoco se refirió a él como un hombre honesto. Quizás las cosas no habían terminado tan bien como el presidente López Obrador y su consejo se esforzaron por aparentar en esa ocasión.

Este libro cuenta la historia que podría explicar lo que vimos aquella mañana: una historia de traición. La de un hombre que se ganó la confianza del presidente López Obrador y usó su nombre y buena reputación —la de un político honesto y comprometido con la lucha contra la corrupción— para satisfacer una ambición creciente de dinero y poder, alimentada desde la privilegiada posición de ser el consejero jurídico del Ejecutivo federal; asimismo, dispuso de su enorme influencia sobre el aparato de procuración e impartición de justicia y de haber sido, quizá, el segundo hombre más poderoso del país durante los primeros tres años de esta administración. Una historia de traición al ejemplo que ha buscado dar el presidente, a su movimiento político, así como a la narrativa central de erradicar la corrupción y separar el poder económico del poder político. Pero Julio también tricionó el legado de su padre, don Julio Scherer García, un viejo amigo de López Obrador, por quien logró acercarse al hoy presidente.

Comencé a interesarme por el consejero jurídico unos meses después de iniciado el gobierno de López Obrador. Personajes del entorno presidencial, leales al mandatario, me compartieron, con estricta reserva, historias sobre presuntas conductas irregulares y negocios en los cuales estaba involucrado el consejero jurídico de la Presidencia. Me sorprendió sobremedura escuchar que cuadros tan convencidos del ideario obradorista pudieran hablar de esa forma de un hombre tan cercano al mandatario. ¿Se trataba de uno de esos pleitos internos o había un verdadero trasfondo que justificaba sus aseveraciones?

En un principio me resultó difícil creer todo lo que escuchaba, pero lo que llegaba a mis oídos de forma reiterada se volvió imposible de ignorar. Eran historias dolorosas para algunos de los hombres y mujeres que han seguido luchando todos estos años junto a López Obrador, así como para sus simpatizantes. Por eso empecé a recopilar información y testimonios de cuadros destacados de la 4T en distintos niveles; personas preocupadas por la conducta de un personaje que daba la apariencia de haber llegado a servirse con la cuchara grande.

La lucha contra la corrupción estructural y la separación del poder económico del poder político han sido quizás las mantras más importantes del obradorismo. Lo que a partir de entonces se me revelaba acerca de Julio Scherer Ibarra, sin embargo, se apartaba cada vez más de ello. Más aún, la forma en la que Scherer actuaba dentro del gobierno, a juzgar por los testimonios que fui logrando recopilar, dice mucho acerca de la manera en que esas dos expresiones del poder —el económico y el político— están íntimamente vinculadas en México y son muy difíciles de separar.

El presidente le confió a Scherer Ibarra, en su carácter de funcionario público, un gran número de tareas. Resultaba estremecedor atestiguar la cantidad de poder que concentraba un personaje oscuro dentro de un gobierno que ha buscado ser diferente. Todos lo iban a ver: políticos del oficialismo y la oposición, líderes sindicales o empresarios pasaban por la oficina de un funcionario que comenzó a ser percibido como una suerte de vicepresidente. "Julio sí resuelve, Romo no", se escuchaba en el empresariado. "Es él quien realmente tiene acceso a López Obrador".

Aprovechándose de esa posición, el personaje tuvo una intensa actividad en los negocios. Varios elementos permiten suponer que no solamente se fue topando a lo largo del camino con oportunidades para hacerlos en grande, sino que, desde antes de llegar al poder, ya se venía preparando para beneficiarse económicamente, a pesar de que ello implicaba engañar u omitir verdades inconvenientes al presidente López Obrador.

Si algo me llamó la atención desde entonces era que el consejero raramente aparecía en público y casi nunca daba entrevistas. ¿Por qué alguien con tanta influencia, que ocupaba las funciones de un secretario de Gobernación, raramente mostraba la cara? Comencé a ver también que, dentro de Morena y el gobierno, muchos le tenían un gran temor (algunos todavía se lo tienen), lo que probablemente lo ha hecho doblemente poderoso, pues no hay poder comparable al que emana del miedo. Incluso a muchos todavía les resulta inconcebible cuestionar siquiera a una figura como esta.

En plena era de la 4T había un personaje intocable, alguien de quien no se podía hablar y, cuando se hacía en comidas o cenas, los comensales invariablemente bajaban la voz. "No le metas con Julio, no te conviene", me decían ciertos integrantes de la 4T, e incluso ejecutivos de algunos medios cuando empecé a hablar y escribir sobre este personaje. Nada me motivó más a publicar este libro que ese tipo de comentarios, en muy buena medida porque, si voté por López Obrador en 2018, y por todos los candidatos de su partido en 2021, no fue para seguir viviendo en un país de intocables. ¿Por qué Scherer Ibarra parecía serlo? La curiosidad de averiguarlo no me dejaba tranquilo.

Los testimonios que comencé a reunir apuntaban a que Scherer Ibarra habría montado una red de negocios judiciales con una serie de despachos asociados, junto con los cuales incurrió en presuntos casos de corrupción, extorsión y tráfico de influencias. Así lo vino a plantear el abogado Paulo Díez Gurgari, el primero en señalar esto públicamente, en una entrevista concedida a Carmen Aristegui en octubre de 2021.

Julio se develaba en los testimonios como un personaje poseído por una ambición desmedida por el dinero, la cual lo llevaría a ocupar todos los espacios posibles y tratar de aprovechar cuanta oportunidad de hacer negocios se presentara en el camino. A tal punto crecería su ambición que su proceder empezó a ser cada vez más torpe y a dejar cada vez más rastros. Nada de eso se hizo visible, sin embargo, porque el personaje supo blindarse con la moralidad de la 4T y refugiarse detrás del nombre del presidente López Obrador, igual que alguna vez lo hizo detrás de su padre, un referente de la ética periodística en México.

Muy convenientemente, Scherer Ibarra se apropió de un ámbito poco conocido para López Obrador, y ante el cual suele mostrar una gran antipatía: el de los abogados y el sistema de justi-

cía. Scherer, en cambio, sabía perfectamente de qué se trataba el asunto y se aprovechó de un punto ciego presidencial para satisfacer sus propios intereses y darles rienda suelta a sus ambiciones.

En el curso de esta investigación me di cuenta de que debía ir más allá de Julio Scherer Ibarra. Este caso podía y debía arrojar luz sobre un tema aún más profundo y complejo: la existencia de una cofradía mafiosa entre abogados que representan intereses económicos poderosos, jueces y políticos que administran el negocio de la justicia en México, así como el mercado en el que se negocia la impunidad. El exconsejero no era más que una pieza del mecanismo. Alguien que no llegó a inventar nada nuevo a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal; todo lo emprendió de una manera poco prolija, dejando muchos rastros de su actuación y un gran número de agravios en el camino.

El consejero habría replicado en gran escala y de forma descarada un *modus operandi* empleado por otros personajes antes que él: un esquema usado una y otra vez por otros gobernadores, a través del cual ciertos *brokers* o intermediarios, a nivel local o federal, modulan e intervienen en una relación corrupta y corruptura que se establece entre grandes despachos de abogados y el Poder Judicial para obtener sentencias favorables en juicios de élite.

La gran paruloja es que un esquema de este tipo, que hace tiempo han venido usufructuando algunos abogados y políticos, llegó a extremos pocas veces vistos, justamente en el único gobierno que se ha planteado con cierta seriedad luchar contra la corrupción estructural y desmontar los privilegios. Un gobierno que, a pesar de eso, no entendió la necesidad de transformar al más opaco de todos los poderes de la unión: el Poder Judicial.

Entre finales de 2020 y la primera mitad de 2021, busqué varias veces a Julio Scherer Ibarra. Como es habitual entre los políticos, después de escribir una serie de artículos en los que lo cuestionaba,¹ aceptó recibirme para conversar. El encuentro se pactó para el 3 de agosto de 2021. Fue un mes antes de su salida del gobierno, en su oficina de Virrey de Mendoza, en las Lomas, donde lo mismo atendía asuntos públicos y temas de Estado que sus propios negocios privados.

En esa ocasión hablamos por más de dos horas y lo cuestioné sobre una gran variedad de temas, incluida su actividad empresarial. Por tratarse de una plática que acordamos tener *off the record*, no reproduzco ni cito sus respuestas en estas páginas. Puedo decir, sin embargo, que el consejero se veía desgastado, cansado y molesto. Por momentos tuve la impresión de que sobrevivía y buscaba generar empatía, mostrándose ya como víctima, ya como objeto de una serie de injusticias y actos de mala fe. Confieso que me costó creerle. En algún momento llegué a sentirme incómodo, cuando elevó el tono mucho más de lo normal para exigirme que lo viera a los ojos en lugar de tomar notas.

En cualquier caso, puedo decir que encontré en Julio Scherer a un tipo inteligente —sobre todo listo— y de amena conversación, e incluso que aquel día me convencí de que el personaje era suficientemente interesante en sí mismo como para escribir un libro. Irónicamente, cuando le formulaba mis preguntas al todavía consejero jurídico, uno de sus colaboradores allí presentes llegó a bromear con la idea de que escribiera un libro sobre su jefe. Si ya venía considerando esta posibilidad, ese día decidí tomarme la sugerencia en serio.

En aquella ocasión, en su oficina privada de las Lomas, el todavía consejero jurídico se comprometió a responder las dudas que pudieran surgirme y acordamos establecer una línea de comunicación a través de quien se ocupaba de su relación con los medios. En algún momento entreuve la idea de que podía contar con un testimonio de Scherer *on the record* o al menos ampliar mi indagatoria en la misma modalidad anterior. Intenté contactarlo dos veces más, pero, lamentablemente, ya no tuve éxito.

Dice Paco Ignacio Taibo II que los libros se hacen con lo que se tiene y no necesariamente con lo que se quiere. En ese sentido, lo que aquí se presenta no es más que una serie de pistas a partir de las cuales, posteriormente, será posible sacar conclusiones. Escapa a las posibilidades de esta investigación hacer una revisión exhaustiva de los presuntos negocios que Scherer habría hecho al amparo del poder. Lo que se pretende es ofrecer elementos, varios de los cuales requieren de una investigación más amplia para ser plenamente esclarecidos.

Este libro —que se compone de dos partes— revisa al personaje desde su historia personal y familiar, antes de llegar al gobierno y una vez que aterrizó en él. La primera parte arranca con su trayectoria personal y profesional, como abogado, y termina con su consolidación como un litigante y *broker* de la justicia. Se analizan aquí los distintos ámbitos en los que Scherer Ibarra incurrió en una traición: al legado de su padre, don Julio Scherer García, cuyo nombre e influencia política usó siempre en su provecho; al presidente López Obrador, de cuya confianza abusó; a Morena, que buscó instrumentalizar como si fuera una franquicia de dinero y poder; y a los valores más importantes de la 4T. La segunda parte examina con lupa el *modus operandi* de la red de negocios judiciales que comandó desde la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal a partir de siete casos concretos que tuvo posibilidad de reconstruir: Juan Collado, Alonso Ancira, Miguel Alemán, Cruz Azul, Aleutica, Oro Negro y Banco Santander.

Me ha parecido importante recabar la información disponible hasta el momento sobre Scherer y sus socios, tanto a partir de lo que ha aparecido en la prensa, como de las denuncias que han presentado en su contra y las carpetas de investigación existentes, así como de algunas otras evidencias documentales, algunas de ellas derivadas de solicitudes de transparencia.² Mi fuente principal, sin embargo, son unos 80 testimonios. Amparándome en el secreto profesional, no daré sus nombres, pues la mayoría de ellos así lo solicitó expresamente.³

Una parte importante de los testimonios fue recabada entre figuras de la propia 4T, con cargos y encargos de mayor o menor relevancia, así como de otras instituciones públicas en el nivel federal y local. Otra parte relevante proviene de litigantes familiarizados con el funcionamiento del Poder Judicial en México, muchos de los cuales conocen a Julio Scherer desde hace tiempo o tienen conocimiento de la forma en que operó el sistema de justicia durante la actual administración, e incluso antes. A todas y todos ellos les agradezco enormemente su contribución a este esfuerzo. No menciono a ninguno por su nombre, como tampoco a las muchas personas que me apoyaron en esta investigación, para no perjudicarlas. Ellas y ellos, en cualquier caso, saben de mi enorme gratitud.

El principal obstáculo para esta investigación ha sido el miedo de mis fuentes, las cuales en general han sido en extremo cautelosas. Casi nadie ha querido ser el primero en revelar información y pocos estuvieron dispuestos a compartir documentos. Todo esto representa una enorme

dificultad para precisar detalles y proporcionar datos más específicos, so pena de exponer y poner en riesgo a quienes aportaron testimonios.

He de decir que yo mismo no pude hacer esta investigación con la comodidad y soltura que hubiera deseado; debí moverme con mucho cuidado, como me lo sugirieron mis fuentes dentro y fuera del gobierno. No es fácil, como periodista, investigar un perfil como el de Julio Scherer y sus socios sin ponerse en riesgo. De hecho, más de un medio de comunicación para el cual he colaborado —no todos— me pidió dejar de hablar sobre este personaje, ya por haber recibido llamadas suyas, ya por tener una relación de negocios o interés con el exconsejero. Otros se negaron a publicar mis textos, y en uno terminaron por cesarme, tres días después de que se enteraron del tipo de investigaciones que estaba llevando a cabo. El mensaje era muy claro: no te metas con Julio.

En la etapa final también recibí amenazas por redes sociales y correo electrónico. Una de ellas me llamó la atención especialmente porque ocurrió 36 horas después de encontrarme en un sitio público con una de las presuntas víctimas de extorsión del exconsejero. Ante tales hechos, que difícilmente pueden ser fortuitos, me vi obligado a presentar una denuncia penal y adoptar medidas de protección. Por todas estas circunstancias, no siempre pude indagar libremente, contrastar posturas y escuchar la versión de todos los involucrados (lo que en condiciones óptimas debe hacerse en un trabajo periodístico), porque no quise levantar más sospechas. Aun así, me comprometí a darles difusión en mis redes sociales y otros espacios en los que colabore a aquellos aludidos en esta investigación que deseen ejercer su derecho de réplica.

Debo mencionar, asimismo, que en esta investigación usé como referencia, también, una serie de audios que llegaron a mí de forma anónima, luego de publicar varios artículos sobre Scherer, y en los que pueden escucharse conversaciones telefónicas comprometedoras para el exconsejero jurídico y sus socios, tanto en el ámbito empresarial como en el de los despachos de abogados a fines a él. Hay más de 100 conversaciones, las cuales he decidido mantener mayoritariamente bajo reserva, aunque no dudaré en divulgarlas en caso de que el exconsejero o sus socios intenten hacerme daño. Por esta razón, he encargado estos audios a una persona de mi confianza, a la que le he pedido hacerlos del conocimiento público en caso de ser necesario.

En las siguientes páginas no acuso a nadie por cometer alguna conducta ilícita, tan solo soy la voz de mis fuentes. Además, difícilmente una persona en solitario podría generar el tipo de pruebas que requeriría sustentar una acusación formal sobre casos como los que aquí se relatan. Lo que se presenta en este libro, en todo caso, es una recapitulación de investigaciones previamente publicadas en la prensa —algunas de mi propia autoría—, así como pistas y aproximaciones adicionales que podrían servir para llevar a cabo una investigación más amplia que pueda arrojar conclusiones.

En última instancia, lo que busco es entender los desafíos que presenta la justicia en México y mostrar el tipo de mecanismos a través de los cuales opera y se perpetúa la corrupción en el Poder Judicial, especialmente, en casos que involucran a los grandes capitales. Centrarse en Julio Scherer Ibarra no solo es importante por el hecho de que un personaje que era cercano al presidente de la República presuntamente emprendió negocios al amparo del poder. También lo es

porque su conducta pública, como veremos, afectó o pudo afectar los objetivos planteados por la 4T.

Por último, soy consciente de los riesgos que implica denunciar la existencia de una cofradía mafiosa entre abogados y jueces que controla áreas del sistema de justicia, un mecanismo que les ha reportado cuantiosos lucros. Mencionar a algunos de sus presuntos integrantes no les va a gustar, y varios, especialmente quienes se sientan más aludidos, podrán sentir que este ejercicio periodístico interfiere con un negocio que se ha nutrido por mucho tiempo del silencio en el que transcurre su forma de actuar.

Sé que Scherer y sus socios intentarán buscar alguna justificación —por ridícula que sea— para proceder legalmente en mi contra o perjudicarme por cualquier vía. Buscarán esgrimir, quizás, que mi actividad periodística afecta su honra. Por ello es importante recordarle que nuestra Constitución protege la libertad de expresión y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en casos como el de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo, ha señalado que, cuando está en pugna el derecho a la libertad de expresión frente al derecho al honor, el primero tiene un lugar preferente en el ordenamiento jurídico, al considerarse un derecho humano y constitucional fundamental.

En el mismo sentido, el Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión establece en su numeral 105 que, dado el interés del debate sobre asuntos públicos, la libertad de expresión adquiere un valor ponderado mayor, al tiempo que "las expresiones de interés público constituyen un discurso objeto de especial protección bajo la Convención Americana".

Con todo esto, y aunque la razón jurídica no los asista, sé que Scherer y sus socios abogados intentarán usar a esos jueces a sueldo de los que echan mano normalmente para tratar de silenciar al mensajero, evitar que se escuche el mensaje y que nadie quiera volver a hablar de este tema. Estoy preparado para eso, y también para continuar documentando —con todo interés periodístico— su *modus operandi*, aun cuando la víctima sea yo mismo. Con todo, estimo que, al actuar de esta forma, seguramente estarán pensando con la lógica del pasado. Lo harán porque no se han dado cuenta de que este país —aunque no ha cambiado todo lo que quisiéramos— ya no es el mismo de antes.

De hecho, estoy convencido de que no lo es. El simple hecho de que un político tan poderoso como Julio Scherer Ibarra haya tenido que despedirse del gobierno y de la Cuarta Transformación es un signo de que las cosas no son iguales. En administraciones anteriores, perfiles como el del exconsejero jurídico permanecían en sus cargos hasta el último día de su gestión, con pleno conocimiento de sus actos por parte del presidente. En este caso no fue así. Por eso creo que valga la pena contar esta historia.

Ciudad de México, 30 de mayo de 2023

Ese poder, de hecho, le permitió a Julio Scherer convertir en sus rehenes políticos a un gran número de altos mandos del gobierno, en la medida en que podía forzarlos a tomar cierto tipo de decisiones, so pena de meterlos en problemas legales o involucrarlos en escándalos mediáticos. Después de todo, los jurídicos no estaban ahí para cuidarles la espalda a los secretarios o titulares de dependencias, ni tenían como tarea principal cuidar los actos de legalidad de sus instituciones y superiores directos. Su obligación principal era responderle al consejero jurídico que los había nombrado y podía fácilmente removerlos si no obedecían sus instrucciones. No importaba si estas eran o no legales.¹⁴

A través de los jurídicos de las dependencias, además, Scherer no solo podía tener amenazados a varios altos funcionarios del gobierno federal y obligarlos a subordinarse, sino también allegarse de información muy valiosa con la cual beneficiarse él mismo o alguno de sus socios. Podía así evidentemente influir en el curso de cualquier tipo de compra gubernamental o negocio susceptible de hacerse desde las distintas oficinas de gobierno.

Tan solo hace falta imaginar la cantidad de información que, a través de su red de directores jurídicos, Scherer podía obtener sobre cuestiones fiscales, licitaciones o contratos con privados y dificultar el tamaño de negocios que estaba en posición de emprender. El consejero, además, tenía la capacidad de allegarse de información muy valiosa sobre los grandes litigios y de esa forma recurrir a los interesados para que esa red de despachos de la que hablaré en detalle más adelante pudiera hacerse de los casos más atractivos y cobrar las comisiones más envidiadas en el mundo de los abogados.

Sin duda esta potestad de nombrar a los directores jurídicos le permitió a Julio crear una estructura funcional a sus intereses. En ocasiones, el consejero nombró a cuadros sin capacidad ni preparación jurídica, pero cuya característica más importante era su disposición a obedecer sin cuestionamientos las instrucciones que les impartía. Así ocurrió, por ejemplo, con Román García Álvarez, a quien hizo director de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Este personaje —según una denuncia de Paulo Díez Gargari— fue usado por el consejero para elaborar un acuerdo que le permitió al accionista de control de Alcatel seguir explotando ilegalmente el Viaducto Bicentenario, sin contar con una concesión del gobierno federal. Como explicaré en el capítulo 15, este es un caso en el que el exconsejero impidió un procedimiento de sanción a la empresa, actuando en contra del compromiso que hizo en campaña López Obrador y engañándolo para favorecer intereses personales y familiares.

Dentro de la propia Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, Scherer también nombró a varios funcionarios que formaban parte de su red. Así lo hizo, por ejemplo, con Raúl Mauricio Segovia Barrios, por años uno de sus socios en el despacho Ferré, Benet, Segovia e Igarúa (RBSI) y a quien hizo titular de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso (ver capítulo 4). Lo mismo aconteció con Mario Iván Verguer Cazadero, un exdirector jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México que casualmente siempre perfiló los juicios en los que Scherer y sus socios tenían interés y a quien más tarde habría premiado con la Consejería de Control Constitucional y de lo Contencioso.

INFLUENCIA SOBRE EL PODER JUDICIAL

Quizás el poder más importante que amasó Scherer se dio dentro del propio Poder Judicial. Desde un principio, el consejero jurídico ejerció una influencia decisiva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura Federal, donde se controla a jueces y magistrados de tribunales colegiados y unitarios de circuito, así como en juzgados de distrito, por no mencionar otros tribunales especiales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Nada de esto habría sido posible sin la colaboración del entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Varios testimonios señalan que el consejero fue clave al operar directamente su nombramiento. Zaldívar y el exconsejero, quienes tienen una amistad de larga data, se conocen al menos desde hace 30 años, e incluso tuvieron un buen tiempo la costumbre de desayunar juntos todos los sábados en el Café de la O, en las Lomas, sitio que a Scherer le gusta frecuentar.

En 2018 no pintaban fácil las cosas para que Zaldívar llegara a la presidencia de la Corte. Buena parte de sus pares —a quienes tocaba la decisión— no veían su perfil con los mejores ojos por no proceder de la carrera judicial. Los votos no le daban y no le hubieran dado de no ser por la intervención de Scherer. Si bien en el entorno de Zaldívar se asegura que el ministro llegó a la presidencia por el apoyo de López Obrador, el presidente no lo conocía realmente. Por ello es que, para satisfacer su ambición de presidir el máximo tribunal del país, el ministro tuvo que hacer varias concesiones al consejero jurídico, con lo que quedó obligado a hacerle todo tipo de favores. A cambio de ello, Scherer le aseguraba cercanía con el presidente y hacerse de un creciente poder.

Zaldívar y Scherer probablemente acordaron el nombramiento de dos puestos clave en el Consejo de la Judicatura, donde se definen los ascensos en el Poder Judicial y se toman medidas de disciplina: el secretario general del Consejo, Carlos Antonio Alpízar, quien al poco tiempo se revelaría como un habilidoso operador en el Poder Judicial, y el jefe de administración, Alejandro Ríos Camarena. Político de usos y costumbres típicamente priistas, Alpízar fue antes magistrado con Eruviel Ávila y es conocido por haber acumulado un patrimonio que ha generado dudas entre los abogados consultados que han seguido su trayectoria. Tiene un rancho en Ocoyoacac, donde las propiedades no suelen ser baratas, y una casa en La Herradura, donde en los últimos años se han estado haciendo diversas ampliaciones que son visibles desde fuera de la propiedad.¹⁵ Con gran influencia entre magistrados de primer, segundo y tercer circuito —especialmente en la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco—, su rol dentro del Poder Judicial consistió en bajar línea a jueces y magistrados, buscando a aquellos que tenían quejas en su contra y prestándolos a grados extremos, ya con amenazas de trasladarlos a sitios inhóspitos y de alta criminalidad, ya a través de otro tipo de presiones, como incluso dan cuenta diversas notas publicadas en la prensa.¹⁶ Según funcionarios del Poder Judicial y fuentes de la Presidencia de la República, Alpízar llevaba una lista de temas prioritarios para Julio Scherer —algunos para el presidente, otros solo para el consejero— y se reunía regularmente con él para darle cuentas de cómo evolucionaban.

Tanto el perfil de Carlos Alpiñar como el de Ríos Camarena han sido sujetos de diversos cuestionamientos. El 4 de febrero de 2022 apareció una denuncia anónima en contra de ambos funcionarios, donde se señalaba precisamente que fueron nombrados en sus cargos por recomendación de Julio Scherer Ibarra. El primero, por su amistad con el abogado Alonso Rivera Gaxiola, a quien el denunciante señalaba como “operador” del exconsejero jurídico; y Ríos Camarena, por la amistad con integrantes del despacho de abogados FRSI, del cual Scherer es socio.¹⁷ En el caso de Ríos, la denuncia fue por haber otorgado contratos por asignación directa con sobresueldos de hasta un 30%; en cuanto a Alpiñar, por coaccionar a jueces y magistrados de forma indebida para conceder amparos de acuerdo a la voluntad del exconsejero.¹⁸

Volviendo a Zaldívar, vale la pena mencionar que este personaje habría sido tan funcional a los intereses del consejero jurídico que, probablemente por esa razón, Scherer terminó siendo clave para negociar su tan cuestionado y fallido intento reeleccionista en abril de 2021, cuando el Senado aprobó un transitorio que ampliaba su periodo como presidente de la Corte. Aunque es sabido que la enmienda fue presentada en el Senado por Raúl Bolaños, un político cercano a Montreal, difícilmente el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta se habría lanzado solo a tomar esa decisión, la cual fue convenida entre Zaldívar y Scherer, con pleno conocimiento de ambos.

¿Hasta qué punto Arturo Zaldívar fue cómplice y cómplice de los negocios judiciales de Julio Scherer? No lo sabemos. Las fuentes consultadas presentan versiones encontradas. Unos sostienen que lo que animaba al expresidente de la Corte era la ambición política y no el dinero; señalan que Zaldívar es un hombre probo al que no le interesaba usar su puesto para hacer crecer el ya considerable patrimonio que hizo como abogado litigante. Otros, sin embargo, creen que el nivel de servicio que le prestó a Scherer, aun después de que este último dejara la Consejería Jurídica (como se refleja en el caso Collado que reviso en el capítulo 9), solo puede explicarse por un vínculo económico que habría obligado al ministro a seguir brindándole protección.

En el caso de otros ministros de la Suprema Corte, Scherer Ibarra procesó el nombramiento de al menos dos, a quienes también conocía de tiempo atrás: Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa.¹⁹ Si bien ambos llegaron a la Corte por el apoyo del presidente, la opinión de un consejero jurídico siempre importa cuando se trata de proponer a un ministro. Hay versiones dentro del Poder Judicial de que, en más de una ocasión, estos perfiles se alinearon a los intereses del consejero.

En el caso de González Alcántara, no se puede hablar de un alineamiento automático; en el de Esquivel, la subordinación fue muy clara. La ministra, que más tarde quedaría inmersa en el escándalo por el plagio de sus tesis de licenciatura y doctorado, probablemente fue la que más se sometió al exconsejero jurídico. Como anécdota, un ministro o ministra de la Corte contó que, en una ocasión en el que los togados tenían una reunión por Zoom, fue posible distinguir un cuadro de notas de Esquivel en el que aparecían enlistados los temas que Scherer le había pedido sacar.

Es posible que entre Esquivel y Scherer haya existido una relación de complicidad desde que ella presidió el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, entre enero de 2012 y diciembre de 2015, en plena era del cártel inmobiliario mancerista. En esos años,

como se aborda en el capítulo 4, se emitieron en ese colegiado varios fallos que beneficiaron a Scherer y a sus socios. El tema requiere mayor investigación.

Otro ámbito del Poder Judicial de la Federación, instancia clave por el carácter inapelable de sus decisiones y el poder que tiene para dirimir disputas al interior de los partidos. Como es sabido, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Humberto Castillejos logró controlar al menos a cuatro de sus siete magistrados, especialmente los nombrados a partir de un acuerdo político entre el PAN y el PRI, quienes más tarde caerían bajo influencia de Scherer. Para tener en cintura al órgano, lo primero que hizo el consejero en enero de 2019 fue remover a su entonces presidenta, Janine Oñalora, quien llegó a su puesto en 2016 y cuyo mandato no debía terminar sino a finales de 2020.

Oñalora había dado muestras de independencia que incomodaron al consejero y al nuevo gobierno. Un hecho que había molestado particularmente fue el caso de Puebla, donde, tres semanas antes de la renuncia de la magistrada presidenta, el Tribunal rechazó la propuesta de José Luis Vargas de anular la elección para gobernador en la que Martha Érika Alonso se impuso sobre Luis Miguel Barbosa. En la votación, tres integrantes del Tribunal se pronunciaron a favor y cuatro en contra; el voto de Oñalora era decisivo. De la mano del ministro Zaldívar —como máxima autoridad del Poder Judicial—, Scherer operó para forzar a la presidenta a renunciar. En el caso de Zaldívar, este le “sugirió amablemente” separarse del cargo, como lo narró con precisión Roberto Zamarripa.²⁰ En el caso de Scherer, según las fuentes consultadas en el Tribunal, la presión fue brutal, al grado de incurrir en amenazas directas e insinuaciones contra su propia integridad.

Varios magistrados se quejan del trato despota que les dio Scherer, y hasta su hijo, Julio Scherer Pareyón (Julio II), quien en ocasiones les llamaba directamente para hacerles distintos tipo de solicitudes e incluso en una ocasión llegó a levantarles la voz. De entre los cuatro que seguían línea directa del consejero estaba, en primerísimo lugar, José Luis Vargas Váñez, quien encabezó el Tribunal entre el 3 de noviembre de 2020 y el 4 de agosto de 2021. Este personaje estuvo involucrado en tal cantidad de escándalos que no tuvo otra opción que actuar como un auténtico incondicional de Scherer, quien a su vez le daría protección e impunidad. Los otros tres fueron Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizana y Mónica Soto Fregoso. Tanto Scherer como Zaldívar sabían cómo manipular a cada uno, y la amenaza de destitución siempre flotó en el aire.

El mecanismo parece haber servido bastante bien hasta que en marzo y abril de 2021 le tocó al Tribunal deliberar sobre la candidatura de Félix Salgado Macedonio, acusado de no reportar adecuadamente sus aportaciones de precampaña. En el Tribunal había resistencias a permitir que el senador guerrereño fuese candidato, especialmente por las acusaciones de haber violentado a dos mujeres y por haber acumulado dos denuncias de abuso sexual en su contra. Cuentan que en una reunión con los también llamados “cuatro fantásticos” (los magistrados antes mencionados), Scherer llegó al extremo de reprenderlos simultáneamente. Les gritó, los amenazó con su destitución y hasta sugirió que haría desaparecer el Tribunal. Para los magistrados el consejero cruzó en esa ocasión una línea. Tal vez por eso decidieron rebelarse y, por una mayoría de seis a uno (el voto del siempre fiel magistrado José Luis Vargas) frenaron la candidatura de Salgado. Al final,

puntos, que le bastaban para ganar: ¿Cómo pudo caer a un humillante cuarto lugar el día de la elección? Recordemos cómo sucedieron las cosas.

El 23 de marzo, por recomendación de Hugo Scherer, Clara Luz se lanzó contra Adrián de la Garza, señalándolo por corrupción. Estando ella en el primer sitio, ¿qué necesidad había de atacar? Primer error. A toda acción corresponde una reacción. Y esta llegaría pronto.

El 24 de marzo la candidata asistió a una entrevista con Julio Astillero. En lo que algunos morenistas creen que fue una pregunta sembrada, el periodista la cuestionó por su participación en la secta NXIVM y le preguntó si había conocido al líder de esa agrupación, Keith Raniere, condenado en agosto de 2020 por delitos como tráfico de personas y explotación sexual. Siguiendo nuevamente las recomendaciones del marketero, la candidata negó categóricamente los hechos, en lo que resultó ser el segundo y más grave error de su campaña. Y es que dos semanas después, el equipo de Adrián de la Garza, respondiendo al golpe de la candidata, dio a conocer aquel video tan poco favorecedor, en donde Clara Luz mantiene una conversación con Raniere.

Inmediatamente, Hugo Scherer organizó las cosas para que la candidata fuera hasta su propia casa, en la calle Rubén Darío de Polanco —donde le gusta recibir a sus clientes en shorts y sandalias— a grabar un video de respuesta, en lo que pareció el tercer error de la campaña, o quizás la tercera de una serie de acciones concatenadas para hundirla definitivamente. Basta ver ese video en el que Flores aparece insegura, nerviosa y sin aplomo alguno, leyendo de un telepromter, para darse cuenta de que algo así solo pudo subirse a las redes para afectarla. Y eso fue precisamente lo que terminó por ocurrir, pues la intención de voto de la candidata morenista se desplomó a partir de ese momento, y en cuestión de días ya estaba en el tercer lugar, para quedar finalmente en un humillante cuarto sitio el día de la elección, donde apenas obtuvo 14% de la votación.

Cuando observamos cómo se dieron estos hechos, solo caben dos posibilidades: o Hugo Scherer es un pésimo consultor político, o resultó ser un traidor que, en algún momento, decidió privilegiar a quien podría aportarle algún beneficio material. No hay muchas posibilidades más. A juzgar por la anécdota que me refirieron integrantes del equipo de campaña de Clara Luz, parece que estamos ante lo segundo, pues la noche de la elección, cuando la candidata perdedora estaba reunida con su equipo, entró una llamada de Hugo Scherer que fue puesta en altavoz. Allí se escuchó cómo decía: “Nos chingaron, compadre, los votos se fueron para los naranjas”. En su estado de ebriedad, fácil de notar en su voz, Hugo se había confundido al momento de tratar de llamarle a Adrián de la Garza, y en su lugar le había marcado a quien parece haber sido su otro cliente. Dice la subiduría popular que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Tal vez este episodio compruebe esa gran tesis de la subiduría popular.

SIRVIENDO AL ENEMIGO

Lo que más llama la atención en la actuación de Hugo Scherer —y que llegó a irritar en demasía al presidente López Obrador— fue que en la elección de 2021 el primo incómodo del consejero

no operó solamente a favor de los candidatos de Morena. Fiel a su estilo, lo mismo llevó las campañas de Clara Luz en Nuevo León y Alfonso Durazo en Sonora que las de panistas como María Eugenia Campos en Chihuahua y Mauricio Kuri en Querétaro, o Ricardo Gallardo por el Partido Verde en San Luis Potosí. Julio, por su parte, no se quedó al margen, al prestarse y ser parte del juego de su primo. En Campeche, por ejemplo, recurrió a Layda Sansores para que recibiera a su primo y platieran. Como la hoy gobernadora no se interesó en los servicios de un sujeto arrogante que llegaba de la capital, cual si conociera mejor que ella la política local, los Scherer aparentemente terminaron apoyando a otro candidato.

En Chihuahua, varios testimonios dan cuenta de la forma en que buscaron favorecer la candidatura de la hoy gobernadora Maru Campos. No es un dato menor el hecho de que, a finales de 2020, Maru tuvo algunos contactos con gente de Morena para intentar ser candidata por ese partido. La panista no tuvo éxito, pero un mes más tarde el primo del consejero ya figuraba como consultor de su campaña. La estrategia de Julio y Hugo a partir de entonces fue tratar de debilitar a quien ya se perfilaba como candidato del partido guinda, Juan Carlos Loera. Para ello buscaron persuadir al senador Rafael Espino para compeler en el proceso interno en el estado —e incluso le cobraron una buena suma de dinero como a González Cruz—, ya para generar división interna, ya para que llegara un candidato menos competitivo que Loera y pudiera despejarle el camino a su clienta.

Como parte de su oferta de servicios, Hugo usaba el poder de Julio para influir en decisiones políticas que, evidentemente, estaban más allá de un consultor o estratega, desde operar para intervenir en los procesos internos de Morena hasta venderles a los candidatos para los que trabajaba la posibilidad de tener una buena relación con el presidente. A valores entendidos, su oferta de servicios parecía incluir también la posibilidad de obtener ciertos favores en el ámbito de la justicia. Fue así como Julio operó directamente a favor de Maru Campos en su estrategia judicial para librar una serie de causas penales que tenía en su contra.⁵

Según las fuentes consultadas, el consejero jurídico le habría facilitado las cosas a la defensa de la candidata panista para prepararse mejor y obtener suspensiones que le permitieran postergar plazos y comprar tiempo. Para lograr ser candidata, Campos inició una estrategia legal consistente en promover una serie de amparos para obtener acceso a la carpeta de investigación y así retrasar las acusaciones judiciales lo más posible. En suma, nada muy distinto a lo que hacen otros políticos que tienen acusaciones de corrupción: prolongar los procesos, saltar a otro puesto y ganar un fuero detrás del cual esconderse.

Aunque la carpeta de investigación se había originado en Chihuahua, la defensa optó por llevar el caso a juzgados federales, donde el exconsejero jurídico habría hecho un par de llamadas para apoyar a la panista. Así, el 25 de enero de 2021 Campos logró finalmente convertirse en candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, y el 6 de junio se alzó con una victoria sobre su rival, Juan Carlos Loera.

Maru Campos no habría tenido un camino tan sencillo para sortear las dificultades legales que enfrentaba de no ser por el apoyo que le brindaron los Scherer. Hechos narrados por diversas fuentes así lo apuntan: a mediados de abril de 2021, Campos se reunió, por intermediación de Hugo, con uno de los accionistas más influyentes de Latinus, Alexis Nickin. Allí la panista le

dijo a este empresario que su candidatura estaba firme, que no había nada de que preocuparse y que su vinculación a proceso no significaba que ella hubiera cometido algún delito. “Pero, además”, agregó, “Julio Scherer me está ayudando con los amparos”, fue lo que le contestó.

Esa versión se la contó Nickin a Javier Corral después de las elecciones, y estaban presentes, en ese momento, dos colaboradores de este último: Francisco Muñoz y Francisco Lozano. Durante el encuentro, el exgobernador le preguntó al director de Latínus:

—¿Eso te dijo?

—Sí, que Julio Scherer la estaba ayudando.

Sorprendido, Corral aventuró:

—Eso es una mentira, ella está usando a Scherer.

Ante ello, Nickin contestó:

—No, de hecho fue Hugo el que me habló para concertar una entrevista que Lorel le hizo a Maru.

Algo aún más interesante ocurrió después de las elecciones. Fue el día 7 de julio, cuando Maru Campos se juntó a comer con Julio en el hotel Nikko, de la Ciudad de México. Según dos testigos diferentes que presenciaron estos hechos, Maru llevaba una caja de chocolates que le regaló a Julio para agradecerle por todas sus amables y boultas atenciones que había tenido con él. El consejero, que no podía perder tiempo, llevó a su hijo, Julio II, para empezar a plantearle a la futura gobernadora algunos negocios, aparentemente relacionados con la venta de luminarias.

La pareja que contó esta anécdota —sentada en una mesa cercana, aunque oculta detrás de una cortina— dice haber registrado también el momento en que Julio le decía a Maru Campos que podía contar con él y la apoyaría en todo lo necesario. Scherer incluso le dio a la panista algunos “tips” sobre cómo tratar al presidente, justamente porque al día siguiente tenía su primera cita con él en Palacio Nacional. Una de las sugerencias del consejero, según los testigos, fue apoyarlo a él y a su partido de cara a 2024, “porque de todas formas el PAN no va a ganar”. No se conocen bien las razones, pero lo cierto es que, al día siguiente, Maru Campos llegó a ver al presidente a Palacio Nacional, vestida con una blusa de color guinda que hacía un bello juego con la corbata del presidente. Extraña forma de agradecerle a un mandatario...

A finales de julio, el todavía gobernador Javier Corral fue recibido en Palacio Nacional para una reunión con el presidente López Obrador. Allí le contó a AMLO acerca del papel que los Scherer habían tenido en la elección de Chihuahua en contra del candidato de su propio partido y le habló de la forma en que le habían facilitado los amparos a Maru Campos. Como ya se había referido en el capítulo 4, al día siguiente de aquel encuentro, en una reunión del gabinete de seguridad, AMLO soltó ese comentario de “los Scherer son unos mercenarios”, y luego agregó “Bueno, tú no, Julio”. Es sabido que este asunto fue uno de los que más malestar le generaron a López Obrador y que precipitarían la salida de Scherer del gobierno seis semanas después.

Un año más tarde, el 19 de junio de 2022, en una entrevista que hice al exgobernador Javier Corral para La Octava, le pregunté si eran ciertas las versiones de que alguien dentro del gabinete de López Obrador le había otorgado facilidades a Maru Campos dentro de la justicia federal. Su respuesta fue inequívoca: “Está acreditado. A ella la apoyó en la campaña para conseguir amparos muy relevantes, en términos de eludir el proceso penal, el exconsejero jurídico de la Repúbli-

ca, Julio Scherer. [...] En esa oficina no solo se tejieron traiciones al propio presidente de la República. También se fabricaron negocios a partir de la influencia judicial”.⁶

Otro caso más que muestra la falta de lealtad de Julio Scherer Ibarra al obradorismo fue su apoyo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas entre 2016 y 2022. Siendo uno de los panistas más cuestionados y de peor reputación, uno esperaría que dentro de la 4T se hubiese producido un cierre de filas para concretar su desafuero. Sin embargo, no fue así, en parte por la protección que le habría vendido el exconsejero. De hecho, varios intereses han ligado a los Scherer, tanto a Julio como a Hugo, con Cabeza de Vaca. Hugo, como ya se señaló, fue el estratega de su campaña en 2016 y después llevó la imagen de su gobierno a través de la marca Tam, según un periodista tamaulipeco con conocimiento del tema. En el caso de Scherer, por ejemplo, consta que La Cosmopolitana, la empresa de los Landsmans con la que Scherer tenía un patente conflicto de interés,⁷ recibió en 2019 un contrato por un monto de 103 millones de pesos.⁸

Recordemos que el 23 de febrero de 2021 llegó a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas, y el 30 de abril, por una mayoría de 302 votos a favor, 134 votos en contra y 14 abstenciones, el gobernador fue desafuero. El mismo día que eso ocurría, el Congreso de Tamaulipas rechazó homologar la decisión de desafuero al gobernador y ya tenía lista una controversia constitucional para frenar la declaratoria de procedencia, la cual sería presentada el mismo 30 de abril. Una vez que esta llegó a la Corte, el caso cayó en manos de Juan Luis González Alcántara, quien actuó como ministro instructor. El ministro, conocido por su histórica cercanía a Scherer y por ser íntimo de uno de los socios de este último, Daniel Carrancá, adoptó desde el principio una postura favorable a la continuidad del mandato de Cabeza de Vaca. Primero lo hizo al darle la razón en el congreso local, cuando planteó que, al no retirarle la inmunidad procesal al gobernador, el congreso local ejerció sus atribuciones con apego a la Constitución. Siguiendo esa lógica, el ministro consideró que no había materia para una controversia constitucional.

Según fuentes con conocimiento de la política tamaulipeca, en distintas etapas de la investigación, y a lo largo del proceso de desafuero que le siguió, era evidente que Cabeza de Vaca estaba siendo bien asesorado desde Palacio Nacional, a juzgar por la prontitud con la que lograba reaccionar a cada uno de los movimientos. Incluso una periodista del estado, con buen acceso a los círculos políticos locales, comentó: “Durante todo el proceso de desafuero parecía que desde Presidencia le avisaban a Cabeza de Vaca lo que venía. A cada paso que daban, él salía con un nuevo recurso y ya tenía una estrategia preparada. Parecía como si alguien le soplara las respuestas del examen”. Y ese alguien, algunos creen, fue Julio Scherer, quien habría ido alertando al gobernador desde que comenzaron a seguirse las investigaciones en su contra.

El 24 de marzo de 2022 la directora del portal *En un 2x3* de Tamaulipas, Martha Olivia López, le lanzó al presidente una pregunta bomba durante la mañana: “¿Ha considerado usted alguna línea de investigación para saber si desde la oficina del exconsejero jurídico Scherer se brindó información de alerta privilegiada al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en su proceso de desafuero y en su proceso legal en su contra?”.

Llama la atención que el presidente no desestimó la pregunta ni dijo, como otras veces, que eran "chismes". AMLO pudo salir en defensa de su exconsejero jurídico, que había dejado el puesto seis meses antes, pero no lo hizo. En lugar de eso prefirió irse por las ramas: "Eso tiene que ver básicamente con la Fiscalía General de la República, que fue la que llevó a cabo la investigación sobre la presunta responsabilidad del actual gobernador de Tamaulipas"⁹, contestó en una clara muestra de que estaba esquivando el asunto. Es probable que el presidente supiera ya algo comprometedor y prefirió evitar una respuesta.

En cualquier caso, el tema debe ser investigado a mayor profundidad, pues hay versiones encontradas. Un integrante del equipo de Cabeza de Vaca reveló que Scherer en realidad nunca ayudó al exgobernador. Que le cobró un millón y medio de dólares a cambio de detener el desafuero en su contra en la Cámara de Diputados, cosa que no cumplió. El testimonio asegura que, más tarde, Scherer todavía le fue a pedir al exgobernador que renunciara a su puesto y a cambio de ello le ofreció protegerlo para no ir a prisión. Al parecer, Cabeza de Vaca rechazó esta opción y rompió con el consejero.

7

El litigio como mina de oro

La justicia se inventó para que los hábiles, los audaces y los poderosos se la pasen por el arco del triunfo. Cuándo me iba a imaginar que durante gran parte de mi vida esa sería mi divisa.

EUGENIO AGUIRRE, *El abogado*¹

"Siempre tuve dudas de si Julio sabía derecho, aunque no me cabía duda de que era un hombre astuto", soló sin querer el socio de uno de los bufetes de abogados más cercanos a Scherer Ibarra con quien tuve la oportunidad de conversar. Casi las mismas palabras empleó un reconocido litigante, históricamente cercano al obradorismo, aunque sin el mismo tipo de cercanía: "Es hábil, inteligente, pero no es un buen abogado ni un jurista preparado". En general, quienes conocen su trabajo consideran que no es especialmente brillante en el mundo del derecho.

En efecto, Scherer nunca destacó en ese ámbito. No se le conoce ninguna publicación relevante en el ámbito jurisprudencial, ni tampoco haber encabezado algún litigio de relevancia. Son más bien algunos de sus socios quienes lo han hecho. En todo caso, dentro del ámbito legal y político, es conocido como un "coyote", nombre que recibe cierto tipo de abogados que operan en los juzgados a partir del tráfico de influencias, el fraude y el engaño, y con el cual más de uno de los consultados se refirió a él.

Luego de las elecciones de 2000, habiendo perdido su candidato y sin lograr colarse en el foxismo, como fue su intención después de la derrota de Labastida, para quien trabajó, Julio se concentró en el mundo del litigio, el cual usó como un instrumento para hacer todo tipo de negocios. Aunque aparentemente montó un despacho propio, Scherer y Asociados,² lo verdaderamente relevante es la manera en que se asoció a otros bufetes para actuar como un intermediario o *broker* de la justicia.

Fue así como este personaje "encontró en el litigio una mina de oro", como refiere un texto de Ausencio Díaz.³ Gracias a las relaciones que logró tejer dentro del Poder Judicial y a la formación de una red de relaciones políticas con los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México, Scherer Ibarra comenzó a actuar como un intermediario para conseguirles favores a terceros e incluso apalancar sus propios negocios.

Su gran espacio de actuación y nicho de oportunidad fue el Poder Judicial de la capital.⁴ No es casual: la corrupción más fuerte y descarada dentro de la justicia mexicana se da en el ámbito local, donde es más fuerte la presencia de jueces que diseñan sentencias a la medida de los despidos de élite y abogados más influyentes, así como la colusión con los ministerios públicos. Esas prácticas ocurren en varias entidades del país, aunque en la Ciudad de México tienen mayor relevancia por la cantidad de dinero que se maneja en los litigios.

Las cosas no siempre fueron así en la justicia capitalina, según cuentan viejos litigantes. El sistema empezó a debilitarse paulatinamente a partir de mediados de los años noventa, conforme se redujeron los presupuestos y sueldos de jueces y magistrados, y los montos de los sobornos a los jueces crecieron. Como resultado, los abogados más preparados fueron perdiendo interés en ejercer como jueces locales o agentes del ministerio público en la ciudad, mientras la justicia local comenzó a volverse más atractiva para los menos escrupulosos, aquellos que, antes que prestigio profesional, buscaban oportunidades para hacerse de dinero fácil.

Fue precisamente en ese contexto, donde se precarizaba la justicia capitalina y la corrupción se generalizaba, que Scherer Ibarra empezó a litigar y armar la red de abogados que años más tarde llevaría al ámbito federal, con un poder cualitativamente mayor. El hijo de don Julio Scherer García se fue erigiendo paulatinamente como un mediador entre cierto tipo de abogados y autoridades del Poder Judicial. A partir de ello, cobraría sumas importantes por hacer gestiones que iban desde conseguir reuniones y tramitar citas con jueces y magistrados, hasta intermediaciones de mayor envergadura, como refirieron las fuentes que han seguido su trayectoria.

Julio iba apuntalando esta labor con otra no menos importante para los abogados de élite, como ya he señalado, que es la de las relaciones políticas y el "cabildeo", por llamarlo de forma elegante. Conforme se convertía en un actor relevante para los sucesivos gobiernos del PRD en la capital, el personaje comenzó a fungir también como un canal de comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. En el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, Scherer logró hacerse de un derecho de picaporte que le ha dado acceso incluso a las oficinas de los sucesivos presidentes de ese órgano.

Scherer tuvo una cercana relación —y aparentemente todavía la tiene— con Juan Luis González Alcántara Carrancá, el presidente del Tribunal entre 2000 y 2004, donde acumuló un poder decisivo dentro del Poder Judicial capitalino. La relación entre ambos es de larga data, pues aparentemente el hoy ministro de la Suprema Corte llegó a despachar en el bufete de Araujo y González, e incluso es paciente de uno de sus socios, Daniel Carrancá. Aunque González Alcántara es conocido por tener un modo de vida honesto, sin que se le conozcan mayor interés por el dinero, parece ser uno de los personajes que le han hecho favores a Scherer.

Pero la gran oportunidad de Scherer Ibarra —y en esto coincide más de uno de los testimonios en el mundo de los abogados que conocen su trayectoria— llegó en 2007, cuando Édgar

Elías Azar se convirtió en presidente del Tribunal. Este personaje, secretario de Finanzas del gobernador José Francisco Ruiz Massieu y oscuro personaje de la política guerrerense, encabezó una de las etapas más corruptas en la historia reciente del Poder Judicial de la Ciudad de México. No es casual que con este personaje Julio haya tenido una relación estratégica —aún más importante que con su antecesor—, la cual podría explicar el origen de su fortuna.

Me detengo un momento en Édgar Elías, a quien un funcionario muy cercano a Miguel Ángel Mancera describió como "un buen pijo" y un "auténtico mercenario del Poder Judicial local". Conocido coloquialmente en los círculos políticos de su natal Guerrero como "Tropelías", y entre abogados de la Ciudad de México como "la Garra", por su mano larga, este abogado y político condujo el Tribunal Superior de Justicia con mano de hierro y escasos contrapesos, y controló por muchos años la carrera de varios jueces y magistrados, instruyéndolos a votar en determinado sentido con estrategias ya de zanahoria, ya de garrote.

Con el enorme poder que acumuló, Elías Azar hizo toda clase de negocios. Por sus manos pasaban todos los asuntos grandes que llegaban al Tribunal y representaban sumas importantes de dinero. Incluso existe la versión de que los magistrados tenían la indicación precisa de informarle cuando supieran de casos que excedían ciertas sumas.

Promotor de los intereses de grandes corporaciones empresariales y mediáticas, y protegido por ellas,⁵ los informes de Elías congregaban a políticos conocidos y a notables empresarios, y era común encontrarse en las primeras filas a grandes hombres de negocios y dueños de los medios de comunicación como Carlos Slim, Olegario Vázquez o Ricardo Salinas Pliego.⁶

Édgar Elías acumuló también una enorme fuerza política, gracias, en buena medida, a que los jefes de gobierno de la capital, principalmente Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, encontraron en él un perfil dispuesto a sacarlos de los asuntos que más les preocupaban. A cambio del control político que a través de este personaje lograban tener sobre los jueces, se despreocuparon frente a su conducta indebida.

Fue tal la influencia política del magistrado Elías que pudo reelegirse dos veces y permaneció como presidente del Tribunal por 10 largos años, de 2007 a 2017.⁷ Y aunque en su segunda reelección el proceso fue controvertido y polémico, 60 de 77 magistrados votaron su permanencia en el cargo.⁸

A lo largo de este periodo, Elías emprendió una serie de proyectos inmobiliarios, casualmente o no asesorado por uno de los padrinos políticos de Scherer Ibarra, Pedro Aspe, que formaban parte de una red de negocios sobre los que en su momento llegaron a aparecer varios reportajes periodísticos.⁹

Durante esos 10 años llegaron al Tribunal, promovidos por él, varios magistrados de perfil cuestionable, algunos incluso con antecedentes de inhabilitación, que, a pesar de ello, aún permanecen hoy en sus puestos.¹⁰ Un ejemplo es el propio Rafael Guerra Álvarez, la cabeza actual del Tribunal, quien también se reelegió en el puesto de forma cuestionable y que, como veremos más adelante, tuvo un papel clave en la red de negocios judiciales de Scherer Ibarra, como lo dieron a conocer diversas fuentes.

Con el tiempo, Elías Azar terminaría siendo objeto de innumerables acusaciones. Entre otras, fue señalado en Estados Unidos por supuestamente permitir sobornos a jueces a cambio de fallos

a su favor,¹¹ y haber hecho negocios inmobiliarios poco éticos y transparentes hasta acumular cerca de 70 propiedades. Incluso, el 7 de enero de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo denunció ante la Fiscalía General de la República por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, al señalar que el exfuncionario contaba con ingresos anuales de 78 millones de pesos, provenientes de inmuebles de los cuales no queda clara su procedencia.

¿Y qué tiene que ver todo esto con Scherer Ibarra? Que en el momento en el que “el Tribunal se convirtió en un mercado, Julio era en uno de sus mercados”, como lo señaló uno de varios testimonios recibidos entre litigantes e integrantes de la carrera judicial. Estos aseguran que el personaje se benefició considerablemente de su cercanía con Elías Azar, al recibir los más diversos favores, como facilidades en juicios mercantiles, civiles y penales.

A través de su red de despachos, Julio fungía como un intermediario entre jueces, magistrados del Tribunal y abogados que buscaban obtener sentencias favorables para sus clientes. A partir de este presunto mecanismo de corrupción y tráfico de influencias, señalan las fuentes, Scherer se reportaba con dinero ante jueces y magistrados, en gran medida a través del propio Elías.

En esos años Scherer Ibarra aprendió a operar con mucha destreza, empleando la habilidad y la astucia que indudablemente lo caracterizan. “Era alguien que conocía bien las cañerías del Poder Judicial y que llegó bien recomendado por el jefe de plomería”, explicó un litigante con varios años de experiencia en la Ciudad de México que conoce algunos de sus secretos mejor guardados. “Scherer conocía bien a las Lupitas y a los Gutiérrez de los juzgados y trabajaba con gente en todos los niveles de los tribunales y ministerios públicos”. Al mismo tiempo, señalaba la fuente, supo aprovecharse de la fragilidad del sistema para colocar a personajes clave en el Poder Judicial de la ciudad que, con el paso del tiempo, también terminarían por deberle sus favores.

Otro de los vínculos que habrían de reportarle beneficios al hijo de don Julio Scherer García, según el testimonio de litigantes, fue Víctor Carrancá, quien en 2011 se convirtió en procurador de justicia en Puebla, con el gobernador Rafael Moreno Valle, para más tarde, a partir de 2016, tornarse el “fiscal carnal” del panista en el estado. Durante los noventa, Carrancá fue integrante, junto a Juan Araujo y otros abogados, del despacho Araujo, Carrancá, Acosta y Riquelme (fundado en 1992, hoy bajo el nombre de Araujo, González, Paimbert, Robledo y Carrancá), uno de los principales bufetes a través de los cuales Scherer ha operado sus negocios en el ámbito judicial, como explico más adelante.

Según un reconocido litigante, Carrancá —primo del ministro González Alcántara Carrancá, como ya se ha señalado— habría establecido, junto con Scherer, un *modus operandi* muy similar al de otros *brokers* de la justicia. Con un fiscal aliado y socio, dice el testimonio, Araujo, González y sus socios aparecían formalmente defendiendo a ciertos clientes, mientras Scherer Ibarra operaba la relación con el Poder Judicial y la fiscalía locales. Al igual que con Tropelías, Scherer fue uno de los encargados de organizar el esquema. “Era quien conseguía al cliente, hablaba con el juez y hacía la labor de mediación”, señala la fuente. Como en tantos otros casos, sin embargo, Julio nunca firmaba nada y su nombre no aparecía en ningún lado, por lo que no figuran evidencias en su contra.

Al parecer, para que Araujo, González o sus allegados pudieran ser contratados, la Fiscalía desempeñaba un papel esencial, pues, como en otros casos similares, la misma institución que

giraba las órdenes de aprehensión era la que les “recomendaba” a los imputados contratar a cierto tipo de abogados. Cuentan que el mecanismo era relativamente simple: “A ti te detenían y en cuanto te ponían a disposición del ministerio público los agentes te decían: ‘Lo mejor es que te pongas en contacto con este despacho y lo contrates, si no, va a estar difícil que salgas’, o bien, le anticipaban al detenido: ‘Si quieres salir rápido de aquí, te recomendamos contactar a este despacho’”. Se antoja difícil que un sujeto que está en prisión se pueda resistir a semejantes “recomendaciones”.

Al parecer, un esquema similar se puso en práctica cuando Víctor Carrancá fue subprocurador de Procesos, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, entre 1997 y 2010, a donde se llevó como director general de Consignaciones y luego como subprocurador de Procesos Penales a Alejandro Robledo Carretero (otro socio de Araujo y Scherer que más tarde llegaría a la subsecretaría de Planeación y Prevención de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana —SSPC— con la 4T) para llevar a cabo una serie de prácticas que buscaban favorecer a clientes de su despacho.

El tipo de esquema que Scherer utilizó en la justicia local —y que no inventó él— en algún punto sería replicado, en mayor escala y con mucho más poder, en el ámbito federal. Al parecer, era tan clara la intención que este personaje tenía de recurrir al mismo *modus operandi* que, según algunas fuentes, en 2018 le recomendó a Claudia Sheinbaum los nombres de Víctor Carrancá y Juan Araujo para encabezar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, la jefa de gobierno se decantó finalmente por Ernestina Godoy, un perfil honesto vinculado a Morena y ajeno al mundo de los abogados cercanos a Scherer.

MODUS OPERANDI A NIVEL FEDERAL

Julio Scherer Ibarra no reveló su esencia al llegar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal. La suya ha sido una carrera ascendente que comenzó como una suete de “coyote vip” y *broker* de la justicia en la Ciudad de México hasta establecer, ya como consejero, un enorme control sobre el aparato de justicia en el país. Antes de 2018, Julio no era de los abogados más encumbrados a nivel nacional; no estaba en el círculo más selecto ni podía considerarse tampoco un litigante de alto nivel. La transición obradorista, sin embargo, le ofreció una oportunidad de oro para dar un salto cualitativo en su carrera, situándose en una posición que hasta entonces solo habían ocupado “los grandes”: figuras de la talla de Diego Fernández de Cevallos o Manlio Fabio Beltrones. En ese contexto, el consejero adquirió un poder inédito que le permitió apropiarse de forma cuasi monopólica de un botón que antes solían repartirse los abogados y políticos más vinculados a gobiernos emanados del PRIAN.

El 27 de marzo de 2022 *Reforma* llevó a ocho columnas la denuncia del abogado Juan Collado en contra de Julio Scherer Ibarra por extorsión y tráfico de influencias.¹² Scherer intentó presentar esto como resultado de una fabulación de la exsecretaría de Gobernación y una maquinación en su contra por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero para perseguir una venganza per-

SEGUNDA PARTE

Los negocios judiciales

8

El modus operandi de la red Scherer

La presunta red de negocios judiciales creada por Julio Scherer Ibarra durante el gobierno de AMLO ha tenido como protagonistas a cuatro grandes despachos de abogados (véase figura 1). Al menos en tres de estos el vínculo fue reconocido públicamente por el propio exconsejero jurídico. De hecho, en el currículum que él mismo presentó a la Secretaría de la Función Pública al asumir el puesto admitió haber sido socio del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá Consultores Legales, S. C. (AGPRyC); Rivera Gaxiola, Kállo, Fernández, Del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca Abogados (al que identificaremos aquí como Rivera Gaxiola y socios); así como Ferráez, Benet, Segovia e Igartúa, S. C. (FUSI).¹ Hay, no obstante, un cuarto despacho adicional, cuya relación no ha sido reconocida por Scherer, a pesar de ser el que desempeñó el papel más importante dentro del esquema de negocios judiciales del exconsejero: el bufete García González y Barradas (GGyB).

Scherer nunca ha aclarado el tipo de relación que tiene con todos estos abogados, ni si ha sido formalmente socio de ellos.² Los vínculos, sin embargo, pueden rastrearse fácilmente, pues incluso varios familiares del exconsejero están asociados, trabajan o han trabajado para estos despachos.

La actuación de los abogados que integran la red Scherer no siempre resulta fácil de rastrear, ya porque en ocasiones disfrazan su intrusión a través de litigantes menos conocidos, quienes figuran formalmente en los expedientes, ya porque disimulan su participación en ciertos litigios en los que constan domicilios distintos a los de sus oficinas principales.³

No. EMPLEADO: 729

ESCOLARIDAD:

EXPERIENCIA LABORAL:

[illegible]

Nota: Versión resumida de artículo que se localiza en expediente en resguardo de la Dirección de Desarrollo Humano y Organización, no incluye el puesto actual, el cual puede verificarse en la Plataforma Nacional de Transparencia: <http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>

Despachos con quienes Julio Scherer Ibarra tuvo relación laboral.

Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá (AGPRyC) es un despacho fundado originalmente en 1992 por Juan Araujo Riva Palacio, su principal cerebro, y Víctor Carrancá de la Mora, exsubprocurador de Justicia de la Ciudad de México y exfiscal de Puebla, además de

El primo del hoy ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancho. En 1997 se sumó Agustín Acosta, famoso por haber sido el abogado de Florence Cassez.⁴ Hoy integran este bufete, además del propio Arayú, César Omar González Hernández —principal vínculo con la Mova, hijo de Víctor—, José María Peimbert Calvo, Alejandro Robledo Carretero y Daniel Carrancho de la Moya, letrado de Víctor.

ACRPyC se dedica fundamentalmente a temas penales y es conocido por haber defendido a Florence Cassez, René Bejarano, Alfonso Ramírez Cuevas, personaje cercano a Scherer, e incluso a Guillermo Zayas, procesado por el caso New's Divine cuando era jefe de la policía capitalina, durante el gobierno de Marcelo Ebrard. Araujo, particularmente, ha sido mencionado en la prensa por su controvertido papel en el caso del polémico Lord Ferrutí.⁵

Entre diversos litigantes ha llamado la atención cómo estos socios de Scherer, según diversas fuentes, se hicieron rápidamente de una inmensa casona —prácticamente una mansión— en la calle Francisco Sosa, en Coyoacán, cuyo valor asciende hoy a unos 8 millones y medio de dólares. Ese sitio, además de ser usado como una de las oficinas del despacho, alberga hoy el llamado Instituto Mexicano de la Justicia.

Circulan distintas versiones sobre esta propiedad: algunos señalan que Araujo y González se la quitaron a la mala a uno de sus clientes, y otros cuentan que estos actuaron a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que se ordenara incautarla, ofrecer una solución legal y finalmente adquirir la propiedad en el momento en el que había perdido su valor en el mercado, precisamente como resultado de la incautación que estos abogados promovieron.

Lo que es claro, y puede comprobarse en el folio real núm. 9513829, relativo a esta propiedad, es que desde finales de 2019 el inmueble fue hipotecado en circunstancias poco habituales a nombre de Vertical CDMX, S. A. de C. V. para garantizar un crédito a favor de Unifin Credit. Cabe destacar que Vertical CDMX, constituida apenas en 2018, es propiedad de un socio de Araujo llamado Augusto Pi Suñer Azcuaga, cuya dirección registrada, por cierto, es un espacio de trabajo compartido (*coworking*). Lo primero que llama la atención, como señala Paulo Diez Gargari, es que una sociedad aparentemente controlada por Araujo haya constituido una hipoteca sobre un bien inmueble de su propiedad para garantizar el pago de un crédito a un tercero. Lo segundo es que la tasa de interés es de 45% anual, un valor muy superior al del mercado. Esta operación no fue celebrada en términos de mercado. De hecho, es común que cuando una persona garantiza una obligación de otra por medio de un inmueble de su propiedad, en realidad es porque se trata de uno perteneciente a otra, no de quien se ostenta como dueño. Algunos creen que el verdadero propietario de este palacete pudiera ser Julio Scherer Ibarra, aunque no hay mayores elementos de prueba.

Pese a que el juez Delgadillo tiene una obvia animadversión en contra de Collado y una amistad con los imputados, no presentó un impedimento para conocer los hechos. Así, el 19 de mayo de 2022, después de resistirse tres veces a comparecer ante otros juzgados que probablemente no consideraban favorables a su causa, los acusados se presentaron a comparecer ante este juez que les venía como anillo al dedo.

Probablemente, el simple hecho de que el caso haya caído en manos de Felipe de Jesús Delgadillo Padriana no es fortuito. Podría ser una muestra más del poder de Julio Scherer para manipular el sistema de justicia, aun después de haberse marchado. Como era de esperarse, este juez penal con sede en el Reclusorio Sur ignoró las pruebas presentadas por la Fiscalía y decidió sobreseer el caso, saliendo incluso en abierta defensa de Scherer, sin estar él mismo siquiera imputado.

Pero las cosas no terminaron ahí. El 26 de octubre de 2022, el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito determinó revocar el sobreseimiento decretado por Delgadillo, con lo que echó atrás la decisión del juez de cerrar la investigación. Presionada por Zaldívar, según revelan fuentes consultadas, la magistrada Graciela Rocío Santes confirmó el auto de no vinculación a proceso. Aunque el juicio estaba en una etapa inicial, para la que bastaba simplemente con presentar indicios, el fallo planteó que la investigación de la PCR no demostraba elementos suficientes para imputar a los acusados. En particular, se argumentó que la institución no entregó evidencia de las supuestas gestiones hechas por los acusados ante la UIF para poder sustentar un presunto tráfico de influencias, como tampoco pruebas contundentes de que se hubiera consumado una extorsión.

A pesar de todo esto, el tribunal no se atrevió a ir tan lejos: con la revocación del sobreseimiento de la causa, dictado por el juez Delgadillo, la Fiscalía quedó facultada para continuar con la investigación inicial, a partir de nuevas pruebas o elementos que puedan integrarse a la carpeta del caso.¹⁷

No deja de llamar la atención el manejo informativo que algunos medios hicieron del caso. En lo que pareciera una operación mediática típica de Julio, el jueves 17 de noviembre —tres semanas después haberse dictado el fallo, que ni un solo medio había hecho público— *Milenio* llevó una nota de Laura Sánchez Ley (quien en otras épocas condujo importantes investigaciones sobre uno de los negocios del exconsejero) que en ocho columnas decía: “Exculpan a Scherer Ibarra y abogados de ‘extorsión’ a Collado”. Extrañamente, la nota en ningún momento decía que el sobreseimiento dictado por Delgadillo había sido revocado. En el ciñillo tan solo podía leerse: “Magistrada desecha por ‘incongruentes’ las supuestas 20 pruebas de la Fiscalía General de la República contra el exconsejero jurídico de Presidencia”.¹⁸

Alonso Ancira y Altos Hornos de México

Durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto estalló un escándalo público por la venta de Agronitrogenados que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), hizo a Pemex. Según denunciaría más tarde la paraestatal, el empresario vendió a sobreprecio una planta de fertilizantes en Veracruz que estaba en muy mal estado a un precio de 274 millones de dólares, cuando su valor era de 58 millones de dólares.

El 2 de agosto de 2018, *Quinto Elemento Lab* publicó una investigación donde se exhibían los vínculos de esta compra con el caso de Odebrecht.¹ Con estos antecedentes, Lozoya fue citado a declarar, e inició un proceso judicial que solo adquirió potencia con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El 5 de marzo de 2019 Pemex presentó una denuncia contra Ancira por daño patrimonial contra la paraestatal.²

Tres meses después, el 27 de mayo de 2019, se dio a conocer que la UIF había congelado las cuentas bancarias de Emilio Lozoya y Altos Hornos, y al día siguiente la Policía Nacional española detuvo a Ancira en Mallorca. Inmediatamente después de la detención, el gobierno de México solicitó su extradición y, tras un complicado proceso legal que se prolongó casi dos años, el 3 de febrero de 2021 Ancira llegó a México.

Desde un primer momento, Julio Scherer Ibarra metió mano en el caso por medio de sus socios, no solo con el probable objetivo de cobrar presuntas comisiones a los abogados encargados de llevar el caso, sino para entregarle una parte de Altos Hornos a su amigo y socio, Julio Villarreal, probablemente para beneficiarse él mismo de la operación, igual que en el caso de Juan Collado.

Por un lado, Scherer dio su visto bueno para que el despacho de Araujo y González se ocupara de la supuesta defensa de Ancira.³ Por otro lado, el exconsejero buscó persuadir al fiscal general de la República, Alejandro Cieriz Manero, para que Antonio Navatón, un abogado, perio-

disto y empresario español que llegó a México después de estar implicado en un caso de corrupción en su país —hombre también cercano a Araujo y a Scherer— se ocupara de llevar el juicio de extradición, junto al juez Baltasar Garzón. De esa forma, el consejero muy probablemente buscaba obtener algún tipo de beneficio.

En un principio, Ancira llegó al despacho de Araujo recomendado por el abogado civilista Jaime Guerra (del bufete Guerra González & Asociados), quien le habría sugerido que, por tratarse de un tema político y no jurídico, le convenía recurrir a uno de los despachos vinculados al consejero jurídico.

En diversas entrevistas Araujo Riva Palacio ha buscado minimizar su participación en la “defensa” de Ancira y asegura que su trabajo se limitó a preparar a los peritos mexicanos en la Audiencia Nacional en Madrid.⁴ En realidad, su participación en el caso se dio antes y después de estos acontecimientos, aunque el abogado buscó disfrazar su actuación por medio de terceros —como lo ha hecho en otros casos—, ya fuese a través de socios, prestanombres o empleados. Un ejemplo es Tonatuh Emmanuel de la Cruz Franco, a quien recurrió en julio de 2020 para combatir la orden de aprehensión en contra del dueño de Altos Hornos y así intentar —sin éxito— que la Suprema Corte resolviera un amparo para frenar la orden de aprehensión en su contra.

Según las indagatorias, para hacerse de Altos Hornos, Julio Scherer Ibarra habría actuado como intermediario en una serie de negociaciones entre esta empresa y Grupo Villareal, propiedad de su amigo y socio Julio Villareal. El 9 de diciembre se firmó un acuerdo entre la empresa de Ancira y Lámina Placa Comercial, S. A. de C. V., filial de Villareal, el cual asentaba que Villareal y su socio, Jorge Silberstein, comprarían 55% de las acciones de Grupo Acerero del Norte, sociedad tenedora de las acciones de AHMSA, en una operación disfrazada de “alianza estratégica” que llevaría a cabo una reparación del daño a Pemex por la venta de Amonitrogenados.

El hecho de que en los dos casos —Collado y Ancira— apareciera una venta a Villareal difícilmente es casual. Araujo y sus socios aseguran, sin embargo, que el vínculo es fortuito y acaso se explica porque tanto Ancira como Collado necesitaban capitalizarse para poder librar los procesos penales que enfrentaban. Por esa razón, sostienen estos abogados, ambos recurrieron a Julio Villareal, según ellos por voluntad propia. El lector podrá juzgar si esta versión le resulta creíble.

Lo cierto es que, mientras Ancira estaba en España, Araujo viajó allí varias veces a entrevistarse con él para plantearle los términos y condiciones que habría establecido Scherer para lograr un acuerdo. A cambio de no pisar la cárcel en México, le pidieron al dueño de AHMSA no solamente indemnizar a Pemex, sino también vender la mayor parte de las acciones de la empresa. Ante lo primero, Ancira estuvo de acuerdo; frente a lo segundo, puso serias objeciones, como también lo hizo Collado. La presión para vender era muy clara.

Araujo acordó con Ancira un pago de “unos 6 millones de dólares”, aunque aseguró que después tuvo que devolverle parte del pago, cuando dejó de representar a su cliente. Al parecer, la devolución terminó siendo muy significativa, pues de otra forma Ancira habría presentado una denuncia por extorsión, como ocurrió en el caso Collado.

El juego de Araujo se desmuda de forma prístina cuando revisamos una entrevista concedida al diario *El Universal* el 2 de febrero de 2021, donde declara: “fij [Afonso Ancira] está dispuesto a llegar a este acuerdo y si le parece justo o no ese es otro tema”.⁵ Se trataba de una declaración insólita viniendo de un abogado que supuestamente estaba para proteger los intereses de su cliente (¿o al menos aparentarlo?) y a quien no podía resultarle indiferente la opinión de quien le pagaba por sus servicios.

Antes de regresar a México, el 26 de enero de 2021, Ancira presentó a la Fiscalía un escrito en el que solicitaba la aprobación de un acuerdo reparatorio. El documento no solamente lo firmó él; extrañamente, también lo hicieron Villareal y Silberstein, con lo que queda claro que sabían de qué se trataba el juego. El texto incluía, entre otras cosas, una disposición que obligaba a Ancira a venderle al amigo de Scherer 55% de las acciones de Altos Hornos, cláusula que además de absurda también sería ilegal. ¿Qué sentido tenía sujetar un acuerdo reparatorio entre Pemex y el dueño de Altos Hornos al trato entre dos particulares, donde uno le compraría la empresa al otro?

Incluir semejante cláusula era más que innecesario. Contrario a la falsa versión de Araujo, Ancira no requería de la capitalización de Villareal, pues había negociado previamente un compromiso de pago a tres años. Pemex, por su parte, tampoco necesitaba del acuerdo —como me lo explicaron funcionarios de la paraestatal—, pues, además de que no era de su incumbencia, Ancira había ofrecido poner su propia empresa como garantía de cumplimiento.

El 3 de febrero de 2021, el dueño de Altos Hornos aterrizó finalmente en México. Las cosas no salieron como se las habían prometido el exconsejero y sus socios. Unos días antes, al parecer, Scherer fue a ver al fiscal para plantearle la necesidad de que, al llegar al país, Ancira quedara libre, dado que ya existía un acuerdo con él para que pagara lo que debía. Gertz, sin embargo, se negó a proceder de esa manera, pues, a diferencia de lo que se negoció con Lozoya, donde había de por medio un criterio de oportunidad por el cual el exdirector de Pemex se comprometía a dar información, con el dueño de Altos Hornos no había ningún convenio semejante que justificara evadir la prisión. Por ello, el fiscal le puso peros a la negociación y se negó a firmar el acuerdo reparatorio. Entre otras objeciones, la FGR señaló que el texto tan solo estaba avalado por un funcionario del área jurídica de Pemex, sin contar con el visto bueno de su consejo de administración. Acostumbrado a recibir respuestas favorables, en esa ocasión Scherer se fue de la Fiscalía muy, muy enfadado.

Fue así como se frustró el plan del consejero jurídico, quien buscaba llegar a la audiencia inicial con todo planchado ante el juez. Por eso, cuando el dueño de Altos Hornos llegó a México, se vino abajo lo pactado en España y el caso se trabó en dimes y diretes durante al menos tres meses. Contrario a lo que Araujo le había prometido a Ancira (el primero niega categóricamente haberlo hecho), el empresario acerero fue a dar al Reclusorio Norte cuando, el 9 de febrero, al llevarse a cabo la audiencia inicial, el juez José Artemio Zúñiga Mendoza rechazó el acuerdo reparatorio propuesto por considerar que se trataba de un convenio ilegal e insistió en el mismo argumento de la Fiscalía: el documento tenía que ser aprobado por el consejo de Pemex.

Al verse evidentemente engañado, Ancira se enfurece con Araujo y decide prescindir de sus servicios como “abogado”, pues para entonces ya le había fallado en todas las promesas que le

había hecho. Según la versión que pude obtener, primero le había dicho que no sería extraditado a México; luego, que no iba a prisión preventiva; y más tarde, ya en México, que su caso no sería vinculado a proceso.⁶ Además, Ancira estaba convencido de que había una prueba crítica que Araujo, probablemente de forma deliberada, había decidido no usar.

Así las cosas, Scherer influyó para que se convocara al consejo de administración de Pemex, a fin de que pudiera aprobarse allí su ansiado acuerdo reparatorio. Se convocó entonces a una sesión extraordinaria (la número 967), donde sorprendió la presencia del consejero jurídico de la Presidencia. Probablemente, decidió apersonarse ahí para ejercer presión sobre los consejeros de la paraestatal, usando una vez más el nombre de la institución presidencial, para asegurarse de que las cosas salieran conforme a sus deseos.

En aquella sesión, celebrada el 19 de abril de 2021, se logró finalmente dar legalidad al acuerdo reparatorio, del cual existe una versión pública en la web. En el documento no solo se incluyó el pago de 216.6 millones de dólares, sino también (páginas 9 y 10) un contrato de compraventa de acciones con la Alianza MineroMetalúrgica Internacional, representada por Villarreal y Silberstein, para adquirir hasta 55% de las acciones de la empresa.⁷ La inclusión de ese acuerdo de compraventa, como ya se ha dicho, no solo resulta de dudosa legalidad, sino también particularmente sospechosa.

En efecto, no había razón por la cual Pemex debiera aprobar semejante acuerdo para capitalizar Altos Hornos: en nada incumbía a la paraestatal y nada tenía que ganar con ello. Esto probablemente se hizo porque ya existía un arreglo entre los amigos tocapos, Julio Scherer y Julio Villarreal, para que este último pudiera quedarse con la mayor parte de la empresa en condiciones ventajosas, igual que se buscó hacer con Caja Libertad.

A través de esta enredada operación, lo que probablemente buscaba el astuto consejero era darle una apariencia de legalidad a un interés y beneficio particulares. En otras palabras, Scherer Ibarra habría querido hacer pasar un presunto acto de corrupción y tráfico de influencias por una decisión tomada por Pemex y su consejo de administración.

Las cosas, sin embargo, no le salieron tal cual lo esperaba, porque la paraestatal no aceptó la versión original del texto que promovió Scherer, donde Ancira se veía expresamente obligado a vender la empresa. En el documento final, la abogada de Pemex, Luz María Zarza, retiró esa cláusula y tan solo dejó constancia de que se celebraría una acuerdo de compraventa de acciones para adquirir el 55% de la empresa por parte de Villarreal y Silberstein. A diferencia de lo que pretendía el consejero, sin embargo, nada en el acuerdo reparatorio obligaba a Ancira a vender.

En el texto se contempló, finalmente, que Ancira pagaría en tres momentos: un primer pago de 50 millones de dólares ese mismo año, otros 54.1 millones de dólares en 2022 y los restantes 112.5 millones de dólares en 2023. Asimismo, llevaría a cabo estos pagos el 30 de noviembre de cada año a través de un fideicomiso a favor de Pemex como garantía de reparar el daño. Con ello, el 20 de abril de 2021, Ancira logró salir del Reclusorio Norte, aunque —cosa extraña— todavía sin pagar un solo peso. Esto no gustó al presidente López Obrador cuando llegó a sus oídos.

En el arreglo se contemplaba la creación de un fideicomiso, pero no se daban mayores detalles. En realidad, lo único firme era que Ancira iba a vender su empresa. No obstante, quien supuestamente la iba a comprar tampoco daba garantías de pago; quien lo hacía era Ancira. Por

lo visto, a Scherer no le interesaba tanto resucitar a la hacienda pública como concretar el negocio de compraventa del que probablemente buscaba obtener un beneficio particular.

No menos grave, el acuerdo negociado por el consejero no impedía que Ancira se marchara del país, lo que terminó haciendo el 21 de abril, justo al día siguiente de abandonar la prisión, cuando se marchó a los Estados Unidos. Desde ese país, y amparado en su doble nacionalidad, el dueño de Altos Hornos empezó a considerar presentar una denuncia por extorsión. No lo hizo, finalmente, porque llegó a un acuerdo para que Araujo y los suyos le devolvieran buena parte de la suma que le habían cobrado, como ya se mencionó al principio de este capítulo.

A poco tiempo de haberse marchado del país, el dueño de Altos Hornos empezó a ponerle pelos al asunto, suscitando una serie de controversias en torno al establecimiento del fideicomiso para resarcir a Pemex.⁸ En una muestra más de su descaro, Scherer Ibarra habría solicitado también que el fideicomiso se aperturara en Banca Afirme, casualmente, propiedad de su amigo Julio Villarreal, lo que quizás era otra manera más de asegurarse el negocio que tenía en mente.

Las cosas se complicaron. El 27 de agosto de 2021, Darío Celis, el columnista que una y otra vez aparece en los negocios judiciales del exconsejero, escribió un texto en *El Financiero* donde contaba que Ancira estaba desconociendo el acuerdo pactado y no pretendía pagar los 216 millones, como se había comprometido. En la columna de Celis —transmisión extorsiva de Scherer—, se le mandaba una advertencia a Ancira: “Si en cinco días no honra el compromiso que adoptó con Pemex, la FGR le reactivará la orden de aprehensión”.⁹

El asunto solo se resolvió cuando Scherer se marchó y Adán Augusto López Hernández, el nuevo secretario de Gobernación, entró a enmendar el entuerto que había dejado el exconsejero. El secretario se acercó a Ancira para ofrecerle garantías de que nadie le intentaría quitar su empresa y este finalmente se comprometió a pagar la suma a la que se había comprometido, lo cual a la fecha de concluir esta publicación ya había terminado de materializarse.

Según fuentes dentro del gabinete presidencial, la forma en que Scherer manejó el caso Ancira fue uno de los temas que más enfurecieron al presidente y abonaron a su salida del gobierno, la cual tuvo lugar seis meses después de que el dueño de Altos Hornos se marchara del país.

pudieran conocer del caso. Ellos mismos aceptaron dar un paso al costado en septiembre de 2022.

En ese momento, Scherer ya no era consejero jurídico y el poder de Alpízar no era el mismo de antes. Tal vez para entonces los dos magistrados ya se habían percatado del problema en que se habían metido y prefirieron desentenderse de un asunto tan comprometedor como haber emitido una resolución así de cuestionable en contra de una entidad tan poderosa como un banco internacional que tiene en México uno de sus centros de operación más importantes.

En noviembre de 2022, el Consejo de la Judicatura decidió cambiar a Trejo de adscripción y designar un reemplazo. La decisión que tuvo que operar Alpízar probablemente estuvo influenciada por el hecho de que, siete meses antes, en abril de 2022, López Obrador recibió en Palacio Nacional a Ana Botín, presidenta de Santander a nivel global. Circula fuertemente la versión de que este polémico juicio fue uno de los asuntos comentados durante la reunión, con lo que el mandatario podría ya estar enterado del rol que tuvieron Scherer, Zaldívar y Alpízar en esta trama.

Como último recurso, los abogados de Santander intentaron recurrir a la Suprema Corte de Justicia por dos vías: el amparo indirecto y la capacidad de atracción. Sobre la primera vía, en abril de 2022, los abogados de Santander presentaron un amparo de revisión ante la Corte para que esta atrajera el asunto, pero, el 27 de mayo, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, rechazó la admisibilidad de este, con el argumento de que el recurso carecía de un carácter excepcional y de que se trataba de un tema entre particulares.¹² El 22 de agosto de 2022, ante un segundo intento de Santander para que el máximo tribunal atrajera el caso, ningún ministro de la Suprema Corte se mostró dispuesto a revisar el asunto.

En lo jurídico, Zaldívar tenía la ley de su lado porque la ya comentada reforma constitucional del 11 de marzo de 2021, que él mismo promovió (capítulo 1), le dio poderes al presidente de la Corte para ser el único capaz de decidir qué recursos de revisión en contra de amparos directos pueden llegar al pleno. En lo político, las fuentes consultadas aseguran que el ministro claramente actuó en este caso a favor de los intereses de Julio Scherer Ibarra. Algunos de los litigantes involucrados en el caso señalan incluso que el ministro llegó a decir: "No es un asunto de legalidad, sino de lealtad, tengo que ayudar a mi amigo".

Oro Negro: la venganza personal

Dicen que la venganza es un plato que se saborea mejor frío. Julio Scherer Ibarra supo hacerlo con el hijo del secretario de Hacienda de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, casi 20 años después de haber sido perseguido durante la administración del panista por el caso del Consorcio Azucarero Escorpión que estuvo a punto de llevarlo a prisión. El mismo Julio Scherer Ibarra, que en abril de 2022 acusó al fiscal Cetz Manero de "valearse de su poder y de recursos públicos para buscar venganzas personales",¹ usó su influencia sobre el Poder Judicial para hacer algo similar: cobrarle a Gonzalo Gil White la asignatura que tenía pendiente con su padre.

ANTECEDENTES DEL CASO

A partir del sexenio de Vicente Fox comenzaron a generarse algunos nichos de oportunidad para la inversión privada en el sector energético. Uno de los personajes que a partir de ese momento lograron abrirse camino en ese ámbito fue Gonzalo Gil White, hijo del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. Junto a José Antonio Cañedo White (sobrino de uno de los socios de Televisa, Guillermo Cañedo White), Gonzalo fundó Oro Negro, empresa que inició operaciones en 2012, cuando se interesó en el sector petrolero, para tener sus años de mayor expansión luego de la aprobación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

Una vez capitalizada con recursos provenientes de las afores de Banamex y Grupo Sura, en apenas tres años Oro Negro logró obtener contratos por más de mil 500 millones de dólares con Pemex, gracias al arrendamiento de cinco plataformas petroleras. Con Emilio Lozoya al frente de la parastatal, se le otorgaron los contratos para rentar las plataformas Primus, Fortius, Laurus, Decus e Impetus.

En los años siguientes, sin embargo, el escenario cambió radicalmente. Cuando en 2017 enayaron los precios internacionales del crudo, la parastatal entró en una situación financiera complicada que la obligó a renegociar sus contratos con varias compañías, incluida Oro Negro. A esto se sumó el hecho de que, desde febrero de 2016, había cambiando la dirección general de Pemex, y al frente quedó José Antonio González Anaya, quien tenía interés en favorecer a una empresa distinta a la de Gonzalo Gil White y sus socios.

Ante el complicado escenario que enfrentaba Oro Negro, la compañía entró en una situación de insolvencia y, el 11 de septiembre de 2017, no tuvo otra opción que irse a concurso mercantil, el recurso legal al que acuden las empresas que no están en condiciones de cumplir con el pago a sus acreedores; de esta manera pueden buscar acuerdos para reestructurar sus obligaciones. Al no fructificar esta opción, el 13 de octubre de 2017, la petrolera notificó a la compañía la decisión unilateral de dar por terminados anticipadamente los contratos de arrendamiento. Ante ello, la compañía planteó que las razones para terminar los contratos de arrendamiento eran ilegales y demandó a Pemex.

El 20 de febrero de 2019 se emitió una sentencia de primera instancia donde el juez le daba la razón a Oro Negro, al encontrar que las causas mencionadas por Pemex no justificaban la terminación anticipada de los contratos de arrendamiento. Con ello, se condenó a la petrolera a pagarle hasta mil millones de dólares a Oro Negro y dar cumplimiento a los contratos en sus términos originales. Dicha sentencia, sin embargo, fue posteriormente revertida el 25 de octubre de 2019, como producto de una apelación.

EL USO DE LA JUSTICIA PARA VENGANZA PERSONAL

Como referí en el capítulo 2, hace más de dos décadas Julio Scherer Ibarra fue acusado de haber cometido un fraude, al simular exportaciones para beneficiarse de estímulos fiscales cuando estaba al frente del Consorcio Azucarero Escorpión (Caze). El exconsejero seguramente nunca olvidó aquel encuentro con el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, a quien su padre fue a pedirle clemencia por él. El secretario en ese momento le respondió, con toda frialdad, que la autoridad actuaría conforme el Estado de derecho. Con el paso de los años, Julio encontraría la oportunidad de vengar aquel vergonzoso episodio y, al mismo tiempo, facturar una buena suma a través su red de negocios judiciales.

Cuarenta que en primera instancia fueron los acreedores de Oro Negro quienes en 2018 llegaron a Scherer, pues calculaban que su asunto tendría mayores probabilidades de éxito si contrastaban a alguno de los despachos asociados a quien habría de ser el futuro consejero jurídico del presidente. Seguramente se informaron previamente sobre el contexto político y calcularon que su caso avanzaría si alineaban sus acusaciones contra Gil White con la antipatía personal del consejero jurídico. Por lo visto, acertaron en su cálculo. Scherer mordió el anzuelo sin mayores dificultades.

Para que su denuncia contra Gonzalo Gil White y su reclamo de recibir un pago de 900 millones de dólares pudiera desahogarse con más agilidad y prosperar en el sistema de justicia, acudieron a Guillermo Burradas y Roberto García González, cuyo despacho era hábil para conseguir favores entre jueces y magistrados, como ya hemos visto. No es casual que, antes de actuar en el Poder Judicial federal, la estrategia de estos abogados se haya enfocado en el Poder Judicial local, sin duda más corrupto y manipulable que el primero. Como se ha explicado ya, desde hace un buen tiempo, Scherer y sus socios han operado a sus anchas en el ámbito de la justicia de la Ciudad de México. Tan es así que la operación contra Gil White no requirió que Scherer llegara al gobierno federal: comenzó a fraguarse antes, echando mano de su influencia en la justicia capitalina.

En efecto, el 18 de junio de 2018, el apoderado legal de un conjunto de bonistas (Oro Negro Primus, Pte. Ltd.; Oro Negro Laurus, Pte. Ltd.; Oro Negro Fortius, Pte. Ltd.; Oro Negro Impetus, Pte. Ltd.; y Oro Negro Decus, Pte. Ltd.) presentó una denuncia ante la FGR en contra de dos sociedades mexicanas del grupo: Perforadora Oro Negro e Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, así como de sus principales funcionarios y directivos, entre los cuales figura Gonzalo Gil White.

De manera genérica y con poca claridad, la demanda señalaba que Oro Negro había violado el procedimiento de pago establecido en un fideicomiso, aunque escondía el propósito de recabar información fiscal de las sociedades antes mencionadas para luego fabricar un supuesto caso de fraude fiscal a través de empresas factureras. De hecho, tan solo una semana después de que se presentara la denuncia, el ministerio público solicitó la información al SAT, sin mediar una autorización judicial.

La información resultó ser falsa, como el propio SAT lo reconoció más tarde. Esto mostró la intención de fabricar evidencias para acusar a Oro Negro de haber recurrido a empresas factureras para evadir impuestos. Fue con base en esa información, sin embargo, que el 17 de septiembre de 2018, ya durante la transición de gobierno, el ministerio público federal solicitó autorización de un juez federal para asegurar las cuentas bancarias de Oro Negro. Este, sin embargo, negó la solicitud, al argumentar que los recursos que se pretendían asegurar no estaban relacionados con delito alguno.

El despacho de García González y Burradas no se detuvo ahí, sino que recurrió al ámbito local, donde las cosas resultaban más sencillas para abogados de su perfil, más ahora que su socio Julio Scherer ocuparía la Consejería Jurídica. Así, usaron nuevamente la información apócrifa que había proporcionado el SAT, pero ahora para probar suerte ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Allí presentaron prácticamente la misma denuncia que antes, y esta vez la maquinaria se activaría para asegurar las cuentas bancarias de Oro Negro y el mencionado fideicomiso.

Fue así como Scherer y sus socios echaron mano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Poder Judicial de la capital para tomar por la fuerza las plataformas de Oro Negro en altamar y luego tratar de meter preso a Gil White. Para ello recurrieron a Andrés Maximino Pérez Hicks, uno de sus alfiles en la fiscalía y el mismo agente de la Unidad de Investi-

ción C-6 del ministerio público en el que “caerían” otros asuntos de interés para Scherer, como el de la cooperativa Cruz Azul que se verá a continuación.

El apoderado de las empresas del grupo solicitó medidas de resitución para tomar posesión de las plataformas Fortius, Laurus, Primus, Impetus y Decus, de Oro Negro. Cuando el caso llegó a la Unidad de Gestión Judicial Número 12 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (donde también se libró la orden de aprehensión contra Carlos Cabal y se involucró el caso Cruz Azul) ocurrió algo insólito: en contra de lo que había previamente ordenado un juez federal, el 19 de octubre de 2018, Enrique Cedillo García, integrante de la misma unidad, ordenó a través de una medida cautelar la entrega provisional de las plataformas petroleras a los demandantes. Para ello recurrió a la Marina para tomar las estructuras ubicadas en el mar territorial, cuyo mantenimiento y seguridad estaba a cargo de Oro Negro.

Esta decisión es de muy dudosa legalidad, pues un tribunal local no puede tomar una decisión de carácter federal. Llamó la atención, además, porque estaba en trámite un concurso mercantil, y lo normal en esas condiciones es esperar a que concluya el proceso y sea un juez federal quien ordene la entrega de los activos a quien corresponda. ¿Por qué el apuro?, esta es la pregunta. ¿Cómo explicar o justificar la decisión de ordenar una toma de las plataformas en altamar sino por el arreglo que existía entre el despacho García González y Barradas, representando los intereses de Scherer, y ciertos elementos de la Fiscalía y el Poder Judicial capitalinos?

Como ya se ha señalado, si algo caracteriza a la corrupción en el sistema de justicia es esa capacidad para conseguir medidas cautelares a modo, con las que se puede reducir o ganar tiempo en los asuntos. Incluso, en ocasiones como esta, las medidas cautelares que se dictan sin que la parte afectada tenga oportunidad previa de defenderse son de tal magnitud que el caso termina con ellas, independientemente de la resolución de fondo que se dicta una vez desahogado el proceso. En el caso de Oro Negro, en particular, los acreedores de la compañía pudieron adelantarse a una decisión judicial que habría demorado hasta un año y medio más en instancias federales. De haber contado con ese tiempo, Oro Negro podría haber continuado operando sus plataformas y, en ese periodo, posiblemente haber generado el flujo necesario para reestructurar los adeudos a sus acreedores y salvarse.

Pero eso no ocurrió. Scherer no quería que ocurriera. Por eso, el domingo 21 de octubre de 2018, en cumplimiento a la orden del juez Cedillo, se llevó a cabo un aparatoso y cuasi cinematográfico intento por tomar las cinco plataformas de Oro Negro en altamar, empleando helicópteros y personal de la Marina. La intentona falló, sin embargo, porque el personal se atrinchero y repelió el acto como si se tratara de una invasión, activando los cañones de agua que por protocolo de seguridad se emplean frente a ataques piratas, con lo que los helicópteros ni siquiera pudieron aterrizar.

Al día siguiente de estos hechos, el columnista Darío Celis (quien en sus columnas casi siempre respaldaba de una u otra forma la actuación de Scherer) escribió un artículo en el que criticaba a Oro Negro por haberse resistido a la orden judicial “poniendo en peligro helicópteros y a sus pasajeros: abogados, marinos y policías federales”. De más está decir que el periodista también justificaba en su columna el fallo del juez Cedillo, al señalar que la decisión fue tomada después de revisar una “amplia evidencia de fraude administrativo”.²

Al final, las medidas cautelares emitidas por el juez Cedillo terminaron por mostrarse tan endeble que fueron revertidas tan pronto como el asunto escaló a la justicia federal. A pesar de ello, al poco tiempo Cedillo fue ascendido de juez a magistrado del Tribunal Superior de Justicia, donde fue asignado a una de las salas más codiciadas por el tipo de negocios que suelen hacerse en ella.³

Este caso, sin embargo, no es el único donde se puede presumir la participación de Scherer, sus abogados y jueces de consigna. Como ya se adelantó, en julio de 2019, otro juez de la Ciudad de México, Joel de Jesús Garduño Venegas, adscrito a la misma Unidad de Gestión Judicial Número 12 (la “unidad Scherer”), giró una orden de aprehensión en contra de Gil White y otros socios y funcionarios de Oro Negro por administración fraudulenta y abuso de confianza.

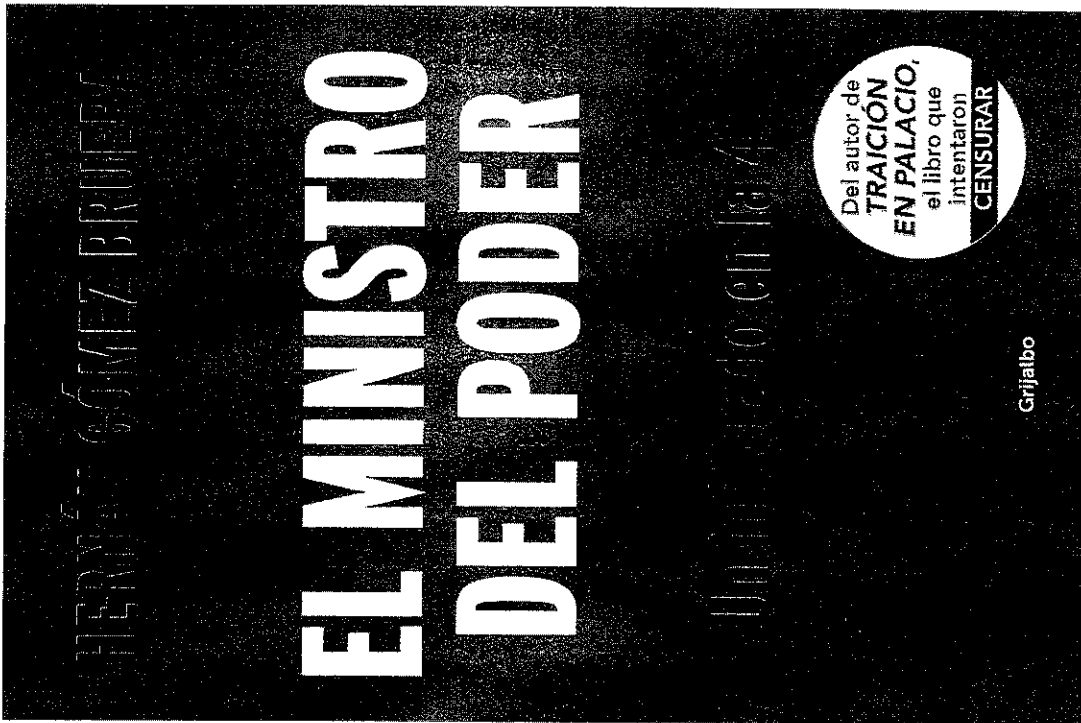
En una clara muestra de uso faccioso de la justicia, la orden se libró con motivo de la supuesta existencia de unos pagos indebidos por concepto de “mantenimiento” de las plataformas, según la exposición que llevó a cabo el agente Maximino Pérez Hicks ante este juez. Llama la atención que en la carpeta de investigación no existe evidencia alguna de que dichos pagos existan, lo que sugiere que el ministerio público habría falseado los hechos e inventado la existencia de transferencias de dinero que nunca se hicieron.

El 28 de noviembre de 2019, el mismo juez, Joel de Jesús Garduño, dictó una nueva orden de aprehensión contra Gil White y dos directivos de Oro Negro más por un supuesto desvío de recursos por 160 millones de pesos. Como tantos otros asuntos de interés para Scherer, la orden fue procesada con inusual rapidez y la investigación se llevó a cabo en unos cuantos días. Cabe señalar que esta se dictó sin más pruebas que la acusación y sin llamar a que los acusados testificaran, como en su momento refirió Salvador García Soto.⁴ Como también observó el columnista, si los turnos judiciales supuestamente se asignan de forma aleatoria o por sorteo, ¿cómo es que este caso había vuelto a caer en el mismo juez Joel de Jesús Garduño?

Dentro de la fiscalía capitalina, buena parte de estas investigaciones de Oro Negro se fraguaron en el área de Delitos Financieros, a la sazón encabezada por Édgar Pineda Ramírez, así como a través del agente ministerial Maximino Pérez Hicks. Según escribió en su momento Jorge Fernández Menéndez, este funcionario, ya removido de su cargo, tenía un ministerio público dedicado exclusivamente al caso Oro Negro. Según la información del periodista, esa oficina operaba en un área cerrada al público, junto a la oficina de la fiscal, vigilada permanentemente por cámaras y micrófonos para evitar cualquier filtración. Además, el proceso se llevaba “por fuera del sistema informático oficial, por lo que las partes investigadas no tienen derecho a conocer los asuntos ni a visitar esta área de trabajo que exige un registro especial”. Ese esquema, que Fernández Menéndez calificaba como un “paquete VIP”, les garantizaba, en el caso Oro Negro, órdenes de embargo, aseguramientos y arrestos.⁵

En retrospectiva, todo parece indicar que, en el caso Oro Negro, el aparato de justicia al servicio de Julio Scherer y sus socios falseó primero información fiscal, con el objeto de asegurar cuentas bancarias y hacerse de las plataformas petroleras de su deudor, y, más tarde, distorsionó los hechos y las pruebas existentes para obtener órdenes de aprehensión en contra de Gil White y sus socios. Hay que decir que su captura finalmente no fue posible porque estos lograron darse a la fuga...

ANEXO 13



El ministro del poder

Un infiltrado en la 4T

Índice

EL MINISTRO DEL PODER

ADVERTENCIA

PRESENTACIÓN

- 1. El abogado de los ricos
- 2. Zaldívar en la Corte
- 3. Zaldívar en la presidencia
- 4. La primera reforma judicial
- 5. El ministro swift
- 6. Los operadores del ministro
- 7. El escándalo del piso 14
- 8. El testimonio de Arturo Guerrero
- 9. La presión sobre los jueces
- 10. La lista de Alpizar
- 11. Frida Martínez y el juez Roldán
- 12. María Emilia Molina
- 13. Madrazo y el negocio hipico
- 14. Los concursos mercantiles, la mina de oro
- 15. La tentación del dinero
- 16. La segunda reforma judicial y la elección de 2025

NOTAS

SOBRE ESTE LIBRO

SOBRE EL AUTOR

CRÉDITOS

HERNÁN GÓMEZ BRUERA

Grijalbo

cer ni a figurar. Todo ello, sumado a la presentación de un sonado plan de combate al nepotismo,⁴³ que presentó en diciembre de 2019, le permitió posicionarse dentro de la 4^{ta} y en los medios de comunicación como uno de los principales actores políticos del país, con un poder y una visibilidad pocas veces antes vistos en un presidente de la Suprema Corte.

LA CENTRALIZACIÓN DEL PODER EN ZALDÍVAR

Cuando asumió su puesto como presidente, Zaldívar afirmó: "El presidente de la Corte no es la cabeza del Poder Judicial de la Federación, no es el titular del Poder Judicial de la Federación; la cabeza del Poder Judicial de la Federación es este tribunal pleno y el presidente de la Corte solamente es su representante".⁴⁴ Con el tiempo, sin embargo, Zaldívar actuó en una lógica completamente opuesta, al personalizar cada vez más decisiones que debían tomarse de forma colectiva, centralizando crecientemente el poder. De entrada, la dinámica de las sesiones de la Corte cambió considerablemente, pues empezó a romper con el orden de los debates para posicionarse primero desde la presidencia en los asuntos de interés para el gobierno, como ocurrió en el caso de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, donde se estableció que ningún funcionario percibiera más ingresos que el presidente de México.⁴⁵

Una de las acciones más criticadas tuvo lugar entre el 5 y 7 de abril de 2021, cuando se acusó de manipular la votación sobre la invalidez de la Ley de la Industria Eléctrica⁴⁶ a fin de que no pudieran alcanzar los votos necesarios para declarar su inconstitucionalidad.⁴⁷ Para audar esta ley, se necesitaban ocho ministros, los cuales se habían alcanzado, pese a que en la argumentación previa había diferencias. Los votos a través de los cuales los ministros se pronunciaron por la invalidez ahí estaban, pero Zaldívar decidió que lo que debía contabilizarse eran los votos previos, a través de los cuales los togados habían planteado sus argumentaciones para llegar a esa conclusión. Con ello, el secretario de Acuerdos validó únicamente siete votos e impidió la declaratoria de inconstitucionalidad.⁴⁸ Esa forma de contar claramente contravino la ley reglamentaria,⁴⁹ pero no hubo nada que hacer porque arriba de la Corte no hay otra instancia ante la cual se pueda impugnar semejante violación. Zaldívar le había hecho otro favor al gobierno.

Si uno de los grandes problemas del Poder Judicial en México —como ya se ha mencionado— es que la presidencia de la Suprema Corte y la del Consejo de la Judicatura recaen en una misma figura, el ministro Zaldívar rápidamente se acomodó a este esquema de concentración de poder para usufructuarlo en su beneficio, con una influencia decisiva en las reglas de los concursos, con la capacidad de incidir en los cambios de adscripción o amenazar con ellos, pero sobre todo a través del control total que tenía para abrir investigaciones a jueces y magistrados. Este tipo de medidas, particularmente las últimas, se emplearon para premiar a los fieles y castigar a quienes se rehusaban a seguir la línea que se les buscaba imponer desde arriba.

De entrada, Zaldívar utilizó las normas a su antojo y conveniencia para ser él quien tomara las decisiones más importantes. Así fue desplazando a los funcionarios de la carrera judicial, al restarles poder sobre la estructura administrativa y asumiendo él junto a su círculo más cercano. Una magistrada en materia administrativa del Primer Circuito narró lo siguiente: "Ciertamente, Zaldívar llegó a cuestionar e incluso desconocer una cultura de privilegios. Al mismo tiempo, el ministro presidente no recibía siquiera a los jueces. La entrada libre que teníamos a la SCJN se nos cerró cuando él llegó y se rompieron muchos canales de comunicación porque el ministro quería mandar sin escuchar".

Si el Consejo de la Judicatura ha sido tradicionalmente una instancia débil para ejercer contrapesos, con la nueva presidencia perdería aún más relevancia. Las cosas llegaban ya planchadas a esa instancia para ser aprobadas en automático. Cuentan algunos de los consejeros que Zaldívar mostraba un cierto desdén frente a lo que se discutía en las sesiones. Uno de ellos relata cómo

incluso durante las reuniones el ministro "pasaba todo el tiempo viendo su celular, sin atender mayormente a lo que se decía".

En los hechos, además, Zaldívar se fue adueñando del Consejo de la Judicatura Federal y le quitó mucho poder a los consejeros y a las distintas comisiones, tomando más control de las sesiones y las decisiones, y al cambiar la forma de designar las secretarías técnicas de comisión, que antes las elegía la presidencia de cada comisión y ahora pasaron a depender de la Secretaría Ejecutiva, siempre vinculada a la presidencia del Consejo. Así, las decisiones comenzaron a tomarse en un círculo muy reducido. "La lógica de Zaldívar era siempre de mando y obediencia", relató una magistrada que ha decidido abandonar su carrera en el Poder Judicial. "Con los consejeros que había propuesto, la lógica era muy clara: 'yo te puse, tú me obedeces'".

Varios acontecimientos hicieron que, a partir del primer año de la presidencia de Zaldívar, el Consejo se debilitara como un órgano colegiado y redujera aún más su capacidad de funcionar como un contrapeso. El 23 de febrero de 2019 salió José Guadalupe Tafoya Hernández y en su lugar se designó a Alejandro Sergio González Bernabé, una figura completamente subordinada al ministro.⁵⁰ En septiembre de 2019 salieron Felipe Borrego Estrada y Alfonso Pérez Daza, quienes actuaban con cierta fuerza,⁵¹ y en su lugar llegaron dos orgánicos de la 4^{ta}: Verónica de Gyvés y Loreta Ortiz.⁵² En el mes de noviembre, Martha María del Carmen Hernández Álvarez fue sustituida por Bernardo Bátiz,⁵³ quien no solo llegó ya con una avanzada edad, sino que bajó la guardia al ver que López Obrador confiaba en Zaldívar. Finalmente, en diciembre de 2019, Rosa Elena González Tirado fue sustituida por Sergio Molina, un personaje claramente subordinado al ministro presidente, quien, por cierto, fue promovido como candidato a la Suprema Corte para las elecciones judiciales de 2025.

Buena parte de los nuevos consejeros que llegaron durante la era Zaldívar eran "personas de bajo perfil, obedientes y que no entendían mayormente el mundo judicial", como señala un alto funcionario que atestigüó todos estos cambios en la institución. Una magistrada de larga trayectoria dio esta versión de las cosas: "Los consejeros no estaban para trabajar con Arturo Zaldívar, sino para servirle, y así actuó él con todos aquellos a los que promovió para llegar al puesto". Según la juzgadora, dos fueron "particularmente serviles": Alejandro González Bernabé y Sergio Molina. Sobre ambos hablaré con más detalle en el capítulo 6, dedicado a los operadores de Zaldívar.

No está de más mencionar que Arturo Zaldívar también buscaría asegurarse una presencia duradera en las áreas políticamente estratégicas del Poder Judicial, relevantes en términos de las cantidades de dinero que se juegan en litigios. El ministro presidente se proponía capturar algunas de las más codiciadas magistraturas en materia civil y administrativa dentro del estratégico Primer Circuito, en la Ciudad de México, donde promovió a sus incondicionales. Pese a que continuaron trabajando en su ponencia, es un hecho que se aseguró muy buenos lugares para su coordinadora de asesores, Fabiana Estrada Tena, quien fue asignada al Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, para su secretaria de Estudio y Cuenta, Ana María Ibarra Olguín, en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa; e incluso para la encargada de la sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, Carmina Cortés Rodríguez, en el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.⁵⁴ A las dos primeras más tarde las promovería para llegar a la Corte.

Muchos de estos nombramientos, que habrían de materializarse a partir de 2023, fueron anulados con la retórica del género —esa que le gusta tanto—, aunque Zaldívar también promovió a varios hombres, como quien fungía en su ponencia como subsecretario general de Acuerdos, Mario Gerardo Avante Juárez, que aterrizó en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil; o el secretario de la misma, Fernando Cruz Ventura,⁵⁵ quien llegó al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil, todos ellos en Primer Circuito, muy influyente en términos políticos y económicos.

En GIRO OFICIALISTA

El ministro Zaldívar se movió en un equilibrio delicado, donde trataba de no contrariar al presidente Y, al mismo tiempo, conservar la imagen de un Poder Judicial relativamente independiente. Al poco tiempo, fue evidente que Arturo simplemente pateaba los asuntos más sensibles para el gobierno, se rehusaba a enlazarlos e impedía que se discutieran en el Pleno de la Corte. Así lo demuestra un estudio publicado en 2022 por el Observatorio de la Suprema Corte, donde se apunta cómo desde el inicio del zaldívarato se había registrado un gran número de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales relativas a proyectos emblemáticos de la administración de López Obrador, los cuales no habían sido resueltos, incluso un año después de presentarse.⁶⁶

Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de controversias constitucionales presentadas en contra de las leyes de Extinción de Dominio, la Guardia Nacional, el Uso de la Fuerza Pública, el Registro de Detenciones y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de una serie de amparos presentados en contra del aeropuerto de Santa Lucía, la desaparición de partidas presupuestales para las estancias infantiles, el incumplimiento de contratos de Pemex y cre contra la concentración del mercado de energías limpias o hasta 2 mil juicios promovidos en contra de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Para agosto de 2020, de 25 acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas, solamente cinco de ellas se habían atendido.⁶⁷

Una de las primeras pruebas de independencia llegó el 1 de octubre de 2020, cuando la Corte discutió y votó la consulta popular promovida por López Obrador para enjuiciar a cinco expresidentes de la República. El ministro presidente respaldó la consulta, al señalar que el Poder Judicial no debe ser “una puerta cerrada, sino el puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes discusiones nacionales, con pleno respeto a la totalidad de nuestro marco constitucional”.⁶⁸ La postura de Zaldívar fue muy distinta a la de otros ministros que criticaron abiertamente la consulta: Pardo Rebolledo, por ejemplo, consideró que la pregunta planteada tenía posibles “vicios de inconstitucionalidad”.⁶⁹ Franco argumentó que podía violar derechos humanos, como el derecho a la “presunción de inocencia hasta no ser sentenciado y a un debido proceso para ello”.⁷⁰ Aguilar defendió que ni la Constitución ni las leyes deben ser objeto de consulta y afirmó que “para eso están las autoridades: para cumplir lo que las normas les exigen”.⁷¹ Norma Piña, por su parte, apuntó que no era posible “someter a consulta la vigencia de dos derechos, dos principios fundamentales del Estado de derecho: la obediencia a la ley y la igualdad de las persona ante ella”.⁷² Aparentemente, fue durante esta votación que se dio la ruptura entre Zaldívar y Piña, cuando el primero intentó imponerle su postura y decirle cómo debía votar. Finalmente, la pregunta aceptada terminó siendo un galimatías que nadie entendió bien, pero con el que Zaldívar logró salvar la cara: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”⁷³

Finalmente, la independencia que Arturo Zaldívar históricamente había tenido en sus posturas pro derechos humanos tocó con pared. El ministro en definitiva “se voló la barda” en 2023, cuando la Corte discutió la acción de inconstitucionalidad relacionada con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en tiempos de paz. Como se recordará, el gobierno promovió una reforma que transfería el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, la cual contravenía el artículo 21 de la Constitución que reserva la seguridad pública a cuerpos civiles. Como resultado de ello, tres partidos de oposición promovieron una acción de inconstitucionalidad.

No mucho tiempo atrás, el 13 de noviembre de 2018, cuando la Suprema Corte discutió la Ley de Seguridad Interior impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto, Arturo Zaldívar había

advertido sobre los riesgos de militarizar la seguridad pública. En esa ocasión, el ministro destacó que, aunque podría aceptarse la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, esto solo podía ocurrir de manera excepcional, en auxilio de las autoridades civiles y de manera temporal, pero aclaró que el artículo 21 constitucional era muy claro al establecer que las autoridades encargadas de la seguridad pública deben tener un carácter civil.⁷⁴ Zaldívar respaldó su postura con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sostienen que el entrenamiento de las fuerzas armadas “está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles”,⁷⁵ así como planteamientos del Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde se llamaba al Estado mexicano a “garantizar que la seguridad pública [fuera] mantenida en la mayor medida posible por fuerzas de seguridad civiles y no militares”.⁷⁶

Muy distinta sería su posición en abril de 2023, cuando en la Corte se discutió el asunto de la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena. El asunto era distinto, pero se ponían en tela de juicio ideas muy similares. Esta vez, sin embargo, el ministro del poder aseguró que tanto la Secretaría de la Defensa como la de Marina eran dependencias de Estado civiles, por lo que la naturaleza misma de la Guardia Nacional no estaba siendo vulnerada. En una muestra de falta de consistencia, Zaldívar aseguró:

El hecho de que las secretarías de Defensa y Marina intervengan en funciones de control y operación de la Guardia Nacional tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil, pues se trata de secretarías de Estado civiles, cuyos titulares son secretarios del despacho de la administración pública centralizada, cuyo jefe es el presidente de la República.⁷⁷

En entrevistas posteriores el ministro también afirmaría: “La Guardia Nacional es una institución civil, con disciplina militar, adscrita a la Sedena, no al Ejército, a la Sedena, que no es lo mismo, y su finalidad, y la formación de sus integrantes, es policial”.⁷⁸ La postura del ministro solo fue secundada por Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, con lo cual la Corte finalmente rechazó la constitucionalidad del mando militar de la Guardia Nacional por ocho votos.⁷⁹

Una reconocida jurista, que siempre admiró a Zaldívar, había con desilusión acerca de este voto. Recordaba cómo el ministro que ella tanto admiró en el pasado “no hacía cálculos personales para quedar bien con el presidente en turno o con el *establishment*”. “[Arturo, en cambio], buscaba colocar referentes axiológicos en el debate público, cuestiones que mis alumnos y yo veíamos con mucho interés y entusiasmo”, señala. También apunta: “Admiré mucho a ese Zaldívar que quería ponerle límites al poder. Era alguien que valía la pena acompañar en el debate público”. “Por todo esto decepciona que no haya podido decirle que no a López Obrador en el tema de la Guardia Nacional: porque Arturo era un hombre con causas y hoy me doy cuenta de que el poder lo cambió a tal punto que no supo apreciar su propio legado como juez constitucional”, comenta.

Una abogada, que en el pasado fue cercana a Zaldívar, asegura también: “Francamente, me sorprende lo obsequioso que llegó a ser con López Obrador. Cómo, de haber enarbolado un discurso tan sólido acerca de la necesidad de controlar el poder, que le dio un enorme prestigio como juez constitucional, pasó a querer ejercer él mismo ese poder sin límites”.

No menos importante, a partir de una persona que trabajó con Alpiñar en el piso 14, Arturo Guerrero pudo saber que el propio Alpiñar le pidió dos veces a un chofer que tenía para múltiples tareas ir a recoger dinero en efectivo. Al menos una de estas entregas habría sido por 10 millones de pesos.³⁶ Naturalmente, todo esto amerita una profunda investigación que no se agota en este libro.

No es claro si Arturo Zaldívar estaba enterado, si solapó y protegió a su principal operador en el Poder Judicial, y si es verdad —como asegura un exconsejero de la Judicatura— que este oscuro personaje era quien “le manejaba el negocio financiero” al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. Las dudas son vastas y persistentes, pese a que los periodistas no somos agentes del Ministerio Público y nuestra capacidad para demostrar hechos de esta naturaleza tiene limitaciones obvias. Lo que no puede negarse es que, aunque Zaldívar no tenga una responsabilidad legal por las presuntas acciones que se le atribuyen a quien nombró secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura federal, indudablemente tiene una responsabilidad política.

CARRASCO Y BERNABÉ, LOS OAXAQUEÑOS

Además de Carlos Alpiñar, dos personajes más —funcionarios del Poder Judicial— coadyuvaron de forma relevante en las tareas de Zaldívar para obtener fallos a modo entre los jueces: el magistrado Constanancio Carrasco Daza, abogado principalmente a los temas penales, y Alejandro Sergio González Bernabé, más enfocado en cuestiones civiles. Mientras Carrasco era un personaje cercano a Luis María Aguilar, González Bernabé estaba vinculado al ministro Eduardo Medina Mora. Tanto Carrasco como Bernabé son identificados con el llamado “Grupo Oaxaca”, una influyente articulación de jueces y magistrados federales y locales de esa entidad.

Constancio es un viejo lobo de mar, al que un reconocido abogado penalista describió como “el Talleyrand del Poder Judicial federal”, que ha combinado la carrera judicial con la política, desde tiempos del viejo psi hasta la era 4T. Fue consejero de la Judicatura y, entre 2006 y 2016, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde pasó por las presidencias de Ortiz Mayagoitia, Silva Meza y Aguilar Morales.³⁷ El último de los cuales lo hizo titular de una nueva Unidad General de Enlace con los Poderes Federales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los Poderes de la Unión, donde se desempeñó desde 2016 hasta inicios de 2019.³⁸

Cuentan que el Zaldívar de antes tenía una muy mala opinión de este funcionario. Uno de los colaboradores del ministro —el cual solicitó anonimato— llegó a escucharle decir que el día que llegara a ser presidente de la Corte “mandaría a la chingada a Constanancio”. Al llegar a ese puesto, sin embargo, el Zaldívar político se dio cuenta de que lo necesitaba y decidió colocarlo al frente de la muy influyente Unidad para Consolidación del Nuevo Sistema Judicial Penal.

Durante la gestión de Zaldívar este “veterano de la carrera judicial” se convirtió en un “operador eficiente” que empleaba un “estilo discreto sin dejar huellas”, según señala el abogado y periodista Enrique Rodríguez, quien recuerda que Constanancio ya tenía antecedentes de influir en las decisiones de jueces y magistrados en su natal Oaxaca, donde ha gozado de una gran influencia, al extremo de haber sido el principal promotor de Benítez Ramírez Jiménez, actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, esposa del magistrado federal Juvenal Carabajal Díaz.³⁹

Constancio es un personaje más refinado y sofisticado que Alpiñar: antes que juez, es un político hábil que por esa vía llegó a ascender hasta el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura. También de cepa priista, es primo de Dióforo Carrasco Altamirano,⁴⁰ gobernador de Oaxaca en los años noventa y exsecretario de Gobernación con Zedillo.⁴¹ Ha trascendido, además, que su esposa es familiar de Miguel Ángel Osorio Chong. En un artículo de mayo de 2024, el columnista

Darío Celis se refirió a Constanancio como el “padrino del Poder Judicial”, además de un “priista recalcitrante, panista convencido y ahora morenista transformado”.⁴² Alguien que, sin importar preferencias ideológicas o políticas, “no es leal a causa alguna”, aunque desde hace tiempo ha actuado al interior del Poder Judicial “desde las sombras y trastelones”, siguiendo sus propios intereses.⁴³

En 2016, siendo presidente del Tribunal Electoral, Constanancio pronunció un apasionado discurso en el que hablaba de la importancia de que el trabajo de los jueces se lleve a cabo “sin restricción alguna y sin influencias, alcances, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.⁴⁴ Pese a toda esa retórica, diversos testimonios terminarían por vincularlo directamente al trabajo de coacción sobre juzgadores federales, ya por la vía de la captura, ya la de las amenazas.

Existen versiones de que este magistrado llegó al extremo de hablar con personas juzgadoras para presentarles proyectos de sentencias previamente redactados por él y su equipo. Incluso desde su propio correo institucional le habría enviado uno de esos proyectos al magistrado Fernando Córdoba del Valle. Contacté a este último para conocer su versión sobre el asunto, pero dijo no tener ningún interés en conversar con la prensa. Envié una solicitud de transparencia al CJF para solicitar los mencionados correos —pues en otras ocasiones he podido obtener comunicaciones enviadas a través de correos institucionales— sin éxito.⁴⁵

Es sabido que Constanancio Carrasco creó un esquema muy eficaz para manejar los nombramientos, adscripciones y readscripciones en los 41 centros de justicia penal federal del país, sobre los cuales ejerció un fuerte control. Para operar, se apoyó fundamentalmente en tres funcionarios que a instancias suyas tuvieron carreras profesionales meteóricas dentro del Poder Judicial: Hugo Balderas Alfonso, su secretario técnico; el también oaxaqueño José Ernesto Pascual Fajardo, su secretario técnico A (otro funcionario que habría ido acompañado de escoltas, pese a no ser juzgador), y Roberto Zoraya Rojas, secretario técnico de Políticas Públicas, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal Oral Acusatorio.⁴⁶

Según extrañadores del Consejo, Balderas Alfonso —principal operador de Constanancio— habría promovido a su propia esposa, Gabriela Burela Cruz, como secretaria de apoyo, en clara contravención a la política antinepotista de Arturo Zaldívar. La pareja, además, desempeñó un papel clave, al ser quienes reclutaban a través de presuntos exámenes a los administradores de los centros de justicia.

Gracias al esquema que Carrasco implementó junto a todos estos funcionarios, pudo tener un enorme control sobre los juicios que se llevaban dentro del Nuevo Sistema Penal Acusatorio. Cuantan incluso que en su propia oficina el funcionario mandó instalar una pantalla de considerables dimensiones para desde allí dar seguimiento, en tiempo real, a las audiencias de su interés. Normalmente, estas sesiones se graban para poder ser vistas por quienes asisten a las audiencias en los centros de justicia o ser revisadas *a posteriori* por las partes interesadas, aunque no hay antecedentes de haber sido monitoreadas, en vivo y en directo, desde las oficinas centrales del Consejo de la Judicatura.

Según el testimonio de un exfuncionario que trabajó en el despacho de Carrasco, era muy común ver a este magistrado reunirse con ciertos jueces que llevaban temas prioritarios para el gobierno federal, como el de Emilio Lozoya. La fuente asegura, incluso, que cada vez que se anunciaba una audiencia relacionada con este caso se podía ver allí a José Artemio Zúñiga Mendoza —uno de los que llevaron el asunto durante cerca de dos años—, quien solía reunirse por varias horas con el magistrado previo a que tuvieran lugar las audiencias. Cuestionado al respecto, el mencionado juez negó categóricamente esta versión.

Carrasco habría operado diversos mecanismos de presión sobre personas juzgadoras. Uno de ellos, que no muchos han alcanzado a identificar, tuvo lugar cuando, por decisión suya, se modificó el sistema de turnos a través del cual se asignan los casos que llegan entre los distintos jueces. Entre 2017 y 2019, durante la presidencia de Luis María Aguilar, los casos que llegaban a los

nos readscribían a algún destino lejano, normalmente era como una forma de castigo merecido, no una sanción por fallar en un sentido u otro, como empezó a ocurrir durante el período de Arturo Zaldívar".

Varios de mis entrevistados coinciden en que el tipo de presiones a las que se vieron sometidos durante ese periodo no tienen precedentes. Una magistrada penal del Primer Circuito señala: "El Consejo de la Judicatura no solía meterse con tus decisiones como ocurrió con Zaldívar; si acaso te lanzaban un periodicozo, pero no más que eso". Más enfática aún fue una juzgadora del Segundo Circuito, en el Estado de México, que aseveró: "En 15 años como jueza nunca fui acosada y presionada tanto como en la gestión de Zaldívar. Hasta en cuatro ocasiones me citaron al piso 14".

MECANISMOS DE PRESIÓN

Arturo Zaldívar hizo compromisos discursivos con la autonomía de los jueces desde su mismo toma de posesión, sin embargo, las presiones sobre personas juzgadas comenzaron muy poco tiempo después. Pese a que en su primer discurso señaló que no interferiría ni en las decisiones de los jueces y magistrados, ni en las de los integrantes del Tribunal Electoral,⁴ no había terminado siquiera su primer mes como presidente de la Corte cuando el ministro ya comenzaba a actuar en sentido opuesto, al operar junto al consejero jurídico Julio Scherer para aporiar la presidencia de aquel órgano, Janine Otálora, y más tarde al ministro Eduardo Medina Mora.

Con jueces y magistrados, Zaldívar y su equipo también recurrieron a una estrategia para obtener fallos favorables en el Poder Judicial. Quien era presionado y cedía recibía un premio, y quien no cedía podía hacerse acreedor a un castigo: zanahoria o garrote, para decirlo llanamente. En realidad, ni siempre llegaron los premios prometidos, ni siempre se materializaron los castigos. En muchas ocasiones, la actuación de los operadores de Zaldívar se quedó en conversaciones o mensajes ambiguos.

Distintos testimonios dan cuenta de cómo los jueces recibieron llamados durante el zaldívarato. En ciertos casos, Carlos Alpizar, Constancho Carrasco u otros operadores pedían que algún tema se examinara con cuidado; otras veces les solicitaba "echarnos ganas" a ciertos casos, "ver los temas con buenos ojos"² o incluso "que el asunto viniera de fondo", como ocurrió con el juez Roldán, cuyo testimonio se relata en el capítulo II. Como ya se ha señalado, incluso hay denuncias de jueces a los que les llegaron con sentencias ya escritas. La mayor parte de las peticiones eran insinuaciones más o menos sutiles, donde se mandaban mensajes subrepticios. Sin embargo, cualquiera que se hiciera el descortésido sabía que podía verse afectado por alguno de los mecanismos de presión más usados por Zaldívar y sus hombres.

Los mecanismos de presión sobre jueces y magistrados fueron de diverso tipo. Todos ellos seguramente se habían empleado antes, pero difícilmente en los niveles observados entre enero de 2019 y diciembre de 2022, durante la presidencia de Zaldívar. Uno de los más socorridos fue la discrecionalidad con la que se abrían las investigaciones contra personas juzgadas; otro fue la adscripción, igualmente discrecional, de jueces y magistrados incómodos hacia destinos peligrosos, de vida difícil o de menor relevancia; y otro más fueron las amenazas, unas veces directas, otras indirectas.

Una institución clave para presionar a los jueces fue la UGRA. Esta oficina se encargaba de recibir y tramitar quejas o denuncias por faltas administrativas cometidas por parte del personal del Poder Judicial y fungió como una suerte de procuraduría en la que se investigan los asuntos, para finalmente emitir un informe de presunta responsabilidad administrativa (pma). Más tarde, los casos pasan a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, donde empieza propiamente el juicio y se determina si hay alguna responsabilidad, para finalmente deliberar el asunto en el Pleno de la

Corte. Legalmente, la UCR únicamente "propone" a la Secretaría General de la presidencia la realización de investigaciones, pero solo puede llevar a cabo aquellas que se autoricen en esta última.⁶ Siendo así, es evidente que quien de *facto* tomaba las decisiones de investigación era Arturo Zaldívar, a través de su operador, Carlos Albázar.

La apertura de procesos de investigación fue una de las armas más poderosas para mantener a los jueces en cintura, pues quien preside el Consejo tiene en la práctica amplios poderes para abrir carpetas. Como puede verse en la siguiente gráfica, durante el último año de Luis María Aguilar se registraron 210 procedimientos de investigación (antes de 2018 el mecanismo institucional era distinto, por lo que los datos no son comparables).² Durante el primer año de Zaldívar la cifra ascendió a 864 investigaciones, es decir, hubo un aumento de 311%. Durante toda la era zaldívariana se abrieron un total de 5 mil 763 investigaciones, según una solicitud de transparencia formulada al cfr.³ Lamentablemente, la Institución no reportó el sentido en el que se resolvieron las investigaciones.⁴

NÚMERO DE INVESTIGACIONES ABIERTAS 2018-2022					
	2018	2019	2020	2021	2022
2 500					
2 000				1 766	1 967
1 500			1 165		
1 000		864			
500	210				
0					

Resulta prácticamente imposible que una oficina del tamaño de la UGUA (aun cuando incrementó su personal durante la era Zaldívar de 19 a 61 elementos entre enero de 2019 y enero de 2023) hubiese podido atender un incremento tan grande en el número de investigaciones. Es razonable presumir, por tanto, que la abrumadora mayoría de ellas no derivó en sanción alguna. Antes que una voluntad de “limpiar la casa”, como argumentaba Zaldívar,¹⁰ el incremento en el número de investigaciones podría desmenuar una estrategia en la que estas eran usadas como instrumento de intimidación. De hecho, las fuentes consultadas señalan que el grueso de las carpetas se abrieron sin sustento, aunque esto resultaba particularmente efectivo para atemorizar a los jueces. Otra manera de presionar era prolongar deliberadamente la duración de los procesos o hacerlos más enredados, para así mantener en vilo a los juzgadores.

A la oficina de Zaldívar le gustaba repetir que la ucrania gozaba de "autonomía técnica y de gestión", incluso en relación con el presidente y el Pleno del Consejo.¹¹ En 2022 recuerdo haber tenido una conversación con un alto funcionario del Consejo de la Judicatura muy cercano a Zaldívar, que insistía en que el ministro presidente no influía en la forma en que se procesaban las denuncias en contra de las personas juzgadas. Evidentemente, eso es mentira, pues, si bien la UCRJA no

depende directamente de la presidencia del Consejo, es el presidente de este el que puede determinar a qué quejas y denuncias puede dar trámite y a cuáles no.¹² Arturo Zaldívar no solo ejerció esa potestad al máximo, sino que incluso capturó la ugra, al permitir que quedara al frente de esa oficina una persona incondicional a Alpiñar, como ya se ha señalado, y permitirle a este operador tener al menos 16 posiciones.¹³ Obviamente el ministro presidente tenía muy clara la importancia de controlar esta unidad, consciente de que se trataba de una poderosa arma de control político.

Para prestar a los jueces se abrían frecuentemente investigaciones *ex professo* o incluso se sacaban del cajón viejas denuncias. Arturo Guerrero relata en su declaración cómo Alpiñar constantemente pedía abrir carpetas contra determinadas personas juzgadas, sin que hubiera una cuestión específica, fundamento o evidencia, sino simplemente “acusaciones genéricas”.¹⁴ Las investigaciones en algunas ocasiones derivaban en re descripciones milentras duraban los procesos.

Guerrero relata cómo en varias ocasiones Alpiñar le informaba que Zaldívar había dado instrucciones de re describir titulares por presunta colusión con grupos criminales u otros motivos que por lo general no iban acompañados de pruebas. Así habría ocurrido, por ejemplo, con el juez Rodolfo Sánchez Cepeda, a quien el operador del ministro buscó cambiar de adscripción porque supuestamente estaba incurriendo en “actos de corrupción”,¹⁵ y así habría acontecido con el juez Francisco Migoni, quien había pertenecido al equipo de Luis María Aguilar y a quien, sin mayor sustento, Alpiñar llamaba “juez huachicolero”.¹⁶ En su declaración Guerrero señala que, en cada caso, cuestionó los motivos sin que jamás hubiera elementos probatorios.¹⁷

En el curso de esta investigación pude conocer varios casos que revelan un *modus operandi* donde se emplearon los mecanismos de sanción aquí mencionados en contra de ciertos juzgados que debían resolver casos particularmente sensibles para el gobierno o en favor de intereses incontestables. Al ser citados en el piso 14, en las oficinas del Consejo de la Judicatura, funcionarios como Carlos Alpiñar o Constanancio Carrasco les hablaban simultáneamente de los asuntos sobre los cuales estaban próximos a emitir sentencias y de los procedimientos de disciplina que tenían abiertos.

Normalmente, les relataban el tema de los procedimientos que había en su contra y luego les preguntaban por los casos que les interesaban. Así habría ocurrido, por ejemplo, con la magistrada Isabel Cristina Porras Odrizola en el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en la Ciudad de México.¹⁸ En la denuncia anónima se señala que Alpiñar la presionó para que resolviera el caso de Emilio Lozoya conforme al interés del Ejecutivo, a cambio de retirarle una queja administrativa que tenía.¹⁹ Frente a la negativa de la magistrada de ceder ante “las insistentes presiones”, se apunta en la denuncia, el entonces ministro le hizo la “vida imposible”.²⁰

Según pude reconstruir a partir de fuentes del mencionado Tribunal Unitario, un día la llamada de la ugra a esta jueza para tratar el asunto de una queja que habían abierto en su contra. Antes de pasar a la dependencia, sin embargo, un alto funcionario del Consejo de la Judicatura la recibió para hacerle preguntas sobre el sentido en el que pensaba resolver un asunto relacionado con el exdirector de Pemex, cuyo caso le tocó conocer en tercera instancia. Después de la conversación, la magistrada Porras conocería los detalles de su caso, que parecía un asunto menor: un magistrado, acusado de cometer acoso sexual y laboral, tenía entre sus diversas fallas el haber utilizado el correo oficial del Poder Judicial para enviarle regalos a algunos de sus compañeros. A Porras la responsabilizaban por no haber denunciado al magistrado en cuestión cuando este había usado un servicio de mensajería para hacerle llegar un objeto personal que iba dirigido a alguien más. Un simple procedimiento como ese tomó cerca de cuatro años para resolverse. Según los testimonios, cada vez que citaban a esta juzgadora para hablar sobre los avances en la investigación también le preguntaban por los casos que le interesaban a Zaldívar.

ELBA SÁNCHEZ POZOS

La historia de presiones a Elba Sánchez Pozos es una de las primeras que se ventilaron en medios de comunicación, mucho antes de la denuncia anónima de abril de 2024.²¹ Sánchez Pozos llegó al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en Cancún, en noviembre de 2018, y al poco tiempo dice haber tocado pared con un grupo de poder protegido por Carlos Alpiñar, el cual desde el principio la vio con desconfianza, aparentemente por no estar dispuesta a convalidar sus prácticas de dudosa legalidad. Según el relato de Sánchez Pozos, desde que llegó al colegiado pudo presenciar cómo tenían lugar allí una serie de prácticas indebidas, promovidas particularmente por la presidenta del tribunal, la magistrada Selina Haidé Avante Juárez, como “truquear procesos internos y resolver amparos fuera de las sesiones videograbadas”.

Sánchez Pozos revela que, en abril de 2019, los otros dos magistrados que integraban junto a ella el colegiado, Jorge Mercado Mejía y Selina Avante Juárez, decidieron excluirla de una sesión. La magistrada no ha aclarado públicamente de qué se trataba el caso en cuestión, aunque dijo tener la impresión de que sus compañeros o bien buscaban obtener un beneficio particular, o acaso buscaban un asunto por consigna. Lo relevante, sin embargo, es que sus pares habrían fraguado una operación que descaradamente atropellaba la normativa procesal. Según la magistrada, simulaban una sesión y luego le enviaron la sentencia exigiendo su firma. Sánchez Pozos no solo se negó a hacerlo, sino que en abril de 2019 le dirigió una comunicación al presidente y al secretario general para relatar lo ocurrido y explicar sus razones para negarse a firmar.

Las consecuencias de su actuar resultarían contraproducentes, pues a partir de aquel momento Sánchez Pozos se enfrentaría a lo que ella misma define como “el inframundo judicial”.²² Además de no lograr obtener respuesta del presidente de la Corte, en seis meses ya se había fraguado lo que ella considera “un montaje en su contra”, cuando 16 integrantes del tribunal se confabularon para acusarla de acoso laboral, actos de intimidación, agresiones a la intimidad, etcétera, los cuales ella niega categóricamente haber llevado a cabo, además de que asegura que provenían de los equipos de los mismos magistrados cuya corrupción había enfrentado.

Según Sánchez Pozos, la magistrada Avante Juárez es muy cercana a Alpiñar, pues fueron a la misma escuela, y ella a su vez es hermana de Mario Avante Juárez, quien fungía como subsecretario general de Acuerdos de la scjn, cercano al ministro Arturo Zaldívar.²³ De acuerdo con la magistrada, Avante es también hermana de otro magistrado que estaba en ese momento en Toluca, donde ha fungido como cabeza de una “red de poder”, de la cual también habrían sido parte Alpiñar y Zaldívar.

Unos días después de que fabricaran esas acusaciones, en septiembre de 2019, el Consejo de la Judicatura le anunció a Sánchez Pozos su traslado a Culiacán, un típico destino de castigo por la presencia del crimen organizado. Para colmo, cuando llegó a su nueva adscripción, a la magistrada no se le permitió desempeñar sus funciones y fue suspendida casi por cerca de un año.

Llama la atención el hecho de que, cuando la magistrada Sánchez Pozos dejó su posición en Cancún, ya había caído en ese colegiado el caso de Kamel Nacif —acusado de secuestrar y torturar a Lydia Chacho por investigar una trama de pornografía infantil—, el cual esperaban resolver. La salida de la magistrada parece haber sido más que conveniente, pues Selina Avante integró al colegiado a Graciela Bonilla, una de las secretarías proyectistas que se habrían prestado a presentar acusaciones contra Sánchez Pozos, con lo que se logró conseguir una mayoría de dos votos contra uno para aprobar el proyecto de sentencia que proponía liberar a Kamel Nacif y cancelar una orden de aprehensión en su contra.²⁴ Si la magistrada Elba Sánchez Pozos hubiese sido parte de ese tribunal —como aseguró en una entrevista— el resultado de la votación habría sido distinto.²⁵

Cabe recordar que, con posterioridad a los hechos aquí narrados, Lydia Cacho solicitó al Consejo de la Judicatura iniciar un proceso disciplinario para investigar y sancionar a la magistrada

en una quiebra definitiva, la idea es ofrecer a los involucrados una alternativa que les permita reorganizarse y seguir operando.

Según la ya mencionada ley, una persona física o moral estará sujeta al procedimiento concursal si incumple generalizadamente con el pago de sus obligaciones, cosa que puede solicitar tanto la propia compañía como alguno de sus acreedores o el Ministerio Público. El concurso puede constar de hasta tres etapas, todas las cuales requieren de un Poder Judicial verdaderamente autónomo para evitar favoritismos que puedan incidir en beneficio parcial de una de las partes: 1) la visita para evaluar la situación del comerciante, 2) la conciliación y, si es que no se llega a un acuerdo, 3) la quiebra.

A muy grandes rasgos, una vez que una persona física o moral solicita entrar en concurso mercantil, el juez asignado dicta una serie de medidas precautorias para proteger el patrimonio y optimizar la operación de la compañía. Luego, en coordinación con el Ifecom, se nombra un visitador que evalúa la situación financiera y económica de la empresa y, posteriormente, el juez dicta una sentencia donde determina si la solicitud procede o no.

Al comprobarse que la empresa en cuestión aún tiene viabilidad económica, puede entrar propiamente en la etapa de conciliación, en la cual es preciso llegar a un acuerdo con sus acreedores para cumplir con sus obligaciones. Para hacerlo posible, debe designarse a un conciliador, que normalmente es un abogado o un contador público, quien está a cargo de procurar que la empresa y sus acreedores celebren un convenio.

Durante este procedimiento —el cual dura entre 180 días y un año— puede negociarse una quita o descuento de la deuda con los acreedores, ampliarse el plazo de pago o una combinación de ambos. En la etapa de conciliación se suspende el pago de adeudos y las órdenes de embargo que existan sobre los activos de la empresa. Si el acuerdo no llega a cumplirse en el lapso dispuesto, la empresa se declara en quiebra y entra en la tercera etapa del concurso mercantil, en la que, con la intervención de un síndico —que puede ser el mismo que ejerció las funciones de conciliador—, se liquidan los activos para pagarles a los acreedores, una vez que se haya pagado a los trabajadores y al fisco.

Así las cosas, los distintos especialistas en materia de concursos mercantiles ejercen tres tipos de funciones: *las visitas de verificación a la empresa*, donde se revisan y analizan estados financieros y se hace un dictamen para determinar si el comerciante cumple con los requisitos para declararse en concurso; *las conciliaciones*, a través de las cuales se facilitan las negociaciones entre el comerciante y los acreedores para lograr un convenio de reestructuración de deudas y los conciliadores, quienes se ocupan de administrar la empresa, si así lo ordena el juez, buscan acuerdos y proponen planes de reestructura; *la fase de la quiebra*, donde actúan los síndicos, encargados de administrar y liquidar los bienes y activos del comerciante, coordinar su venta, etcétera. El papel de estos últimos es fundamental para que la liquidación pueda darse de forma ordenada y transparente.

LA CORRUPCIÓN

Distintas etapas del concurso mercantil son susceptibles de corrupción. En la decisión que toma el juez de admitir o no la demanda de concurso mercantil, en seleccionar al visitador, conciliador o síndico (en teoría, pero solo en teoría, asignados de forma aleatoria) o hasta en la propia declaración de quiebra, con la que se puede favorecer a las partes interesadas en que la empresa desaparezca para excluir de negocios, hacerse de sus activos o suarla del mercado.

Tener un conciliador o un síndico a modo puede ser de enorme utilidad para una empresa en medio de un concurso mercantil. Al fungir como administrador único de esta y tomar todas las decisiones, el síndico "puede reclamar o dejar de reclamar cierto tipo de adeudos, armar a modo

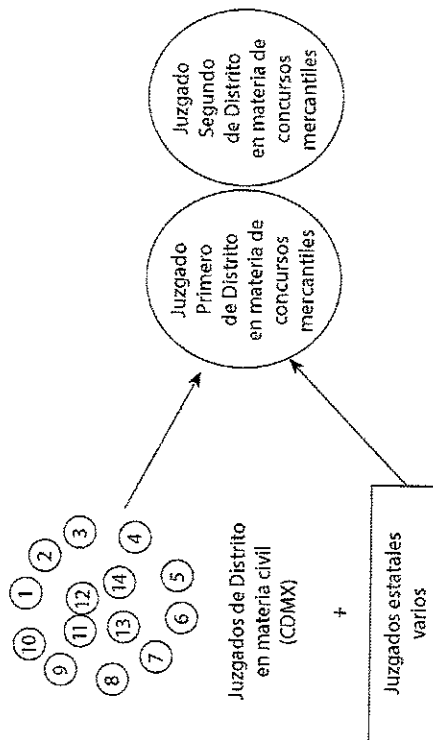
una lista de acreedores o incluso autorizar cierto tipo de gastos que quizás no deberían autorizarse", como me explicó una persona que trabaja en este ámbito. También puede adoptar o abandonar ciertos litigios.

Quien debe responder a las principales interrogantes derivadas de los concursos que tuvieron lugar durante la era Zaldívar es Edgar Manuel Bonilla del Ángel, nombrado director general del Ifecom por el Consejo de la Judicatura en mayo de 2019.² De perfil típicamente neoliberal, ligado a los intereses de los bancos y grandes consorcios, Bonilla es un egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) cercano al ministro Javier Laynez Pottsek; fue vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones (SPFI) de la Procuraduría Fiscal de la Federación (cuando Laynez era el titular de la dependencia) y director en la firma Deloitte.³

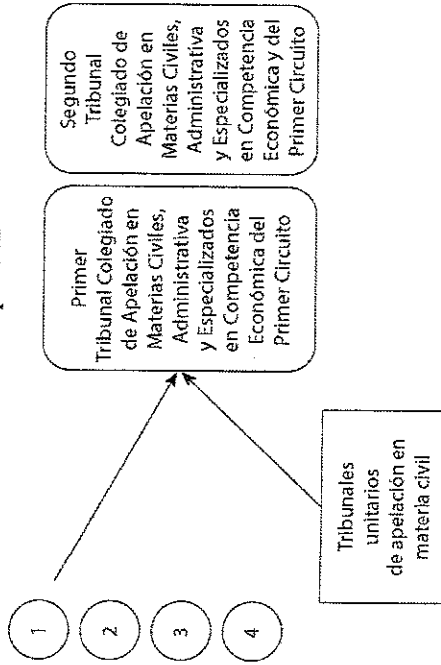
Durante la era Zaldívar se dio un movimiento estratégico que permitió al ministro presidente centralizar las decisiones judiciales en materia concursal de una forma que habría facilitado su uso para obtener beneficios particulares. Antiguamente, en la Ciudad de México, donde se llevan a cabo los concursos más importantes, 14 juzgados de distrito en materia civil podían conocer de concursos mercantiles, mientras que existían cuatro juzgados en materia civil como instancia de apelación. Controlar esa cantidad de jueces no era sencillo. Por esa razón, Zaldívar concentró todos los concursos mercantiles —no únicamente los de la Ciudad de México sino de todo el país — exclusivamente en dos juzgados y dos tribunales federales, como puede apreciarse en la siguiente figura.

CENTRALIZACIÓN DE CONCURSOS MERCANTILES EN LA ERA ZALDIVAR

Primera Instancia



Instancia de apelación



Es así como, en marzo de 2022, se crearon los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, cuyos titulares, Saúl Martínez Lira y Olga Borja Cárdenas —puestos por el presidente de la Corte y sus operadores— tenían a partir de entonces poder para decidir qué empresas podían quebrar, cómo y cuándo. Ocho meses después, en una lógica similar, se redujeron las instancias de apelación de cuatro a dos colegiados: el Primer y el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito.⁴

El primero de estos colegiados se integró por los magistrados Andrés Pérez Lozano (presidente), Monserrat Cid Cabello y Ariadna Chávez Romero. El segundo, por Arturo Morales Serrano (presidente), Jocelyn Mendizábal Ferreyro y una secretaria en funciones de magistrada. Tanto Pérez Lozano como Arturo Morales son señalados por mis fuentes de actuar de forma sesgada en los procesos.

Zaldívar justificó esta decisión de centralizar los concursos mercantiles como una medida para mejorar la eficiencia y especialización en los procedimientos concursales. En su entorno se argumentó que la carga de trabajo y la complejidad de los casos requerían una atención más especializada para garantizar procesos más rápidos y adecuados. Según me explicó uno de sus excolaboradores, los procesos de quiebra de las empresas en México han sido siempre muy enreducidos, por lo que son muy pocos los juicios mercantiles que se llevan a cabo cada año. Por su complejidad, los jueces tienden a desechar estos asuntos, las partes se arreglan como pueden, las empresas terminan quebrando y se pierden numerosos empleos.

La explicación tiene sentido; no obstante, si esos realmente eran los objetivos, podrían haber asignado secretarías especializadas en los juzgados y tribunales civiles. Mucho más importante aún: si se trataba de promover la especialización y la eficiencia —y no la centralización de poder para beneficio privado—, llama la atención que los juzgadores asignados no fueran precisamente conocedores del tema. Saúl Martínez Lira, por ejemplo, había sido un juez milto que nada sabía de la materia concursal, e incluso quienes siguieron de cerca su desempeño coinciden en señalar que “no mostraba mayor interés por aprender”, pues “faltaba a las capacitaciones y enviaba a su

gente”. En lo que sí resultó eficaz, según relatan algunas fuentes, fue en seguir instrucciones, al grado de llegar a remover a un buen número de especialistas en concursos mercantiles, probablemente para que Zaldívar y sus operadores pudieran poner a conciliadores o síndicos capaces de operar mejor a favor de sus intereses personales.

Por lo demás, el juez Martínez Lira tuvo un papel muy polémico en casos como el de Altos Hornos de México e Interjet, ambos de interés para el exconsejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, como lo narré en *Tratado en Pérdida*. En el primer caso, este juez fue criticado por negarse a autorizar una asamblea de accionistas crucial para la reestructuración de la empresa. En junio de 2024 fue finalmente transferido en misteriosas condiciones al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,⁵ considerado un destino de castigo, particularmente hoy.

Al momento de su reasignación, el juez Saúl Martínez Lira tenía a su cargo los procesos de insolvencia de 63 empresas. Su traslado a Tuxtla Gutiérrez, así como su reemplazo por Ruth Huerta García en el Juzgado Segundo Especializado en Concursos Mercantiles, resultó sorpresivo. Este cambio fue el primero desde que el Consejo de la Judicatura Federal, en marzo de 2022, creó los dos juzgados especializados en concursos mercantiles en la Ciudad de México.⁶

Por muy justificada que fuese, la especialización en materia concursal no fue ni el único ni el verdadero motivo para concentrar los concursos mercantiles en unos cuantos juzgadores. Probablemente, lo que se buscó fue armar un esquema de sujeción y control para favorecer al gobierno en ciertos litigios, en el mejor de los casos, o para operar con más facilidad el multimillonario negocio de los juicios mercantiles, en el peor. Muestra de ello es que, cuando se discutían los nombres para ocupar los dos juzgados en materia concursal, Zaldívar le había encomendado la tarea a Carlos Alpizar, quien, según una fuente, propuso al juez Gabriel Domínguez Barrios, en ese entonces juez tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.

Domínguez fue quien le otorgó un cuestionable amparo a Samuel García durante su disputa con el Congreso del estado de Nuevo León para designar a un mandatario interino, por el cual fue suspendido durante seis meses.⁷ Cabe señalar, además, que en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Atoyacatpan, este juez es señalado por haber puesto trabas burocráticas y administrativas que han prolongado el acceso a la justicia de las víctimas.⁸ ¿Por qué a Alpizar le interesaría que un juez de estas características encabezara uno de los dos juzgados especializados en materia mercantil, donde se manejan enormes cantidades de dinero?

Según otra fuente, “al llegar al Ifecom, Bonilla entendía muy poco sobre concursos mercantiles. Al poco tiempo, sin embargo, Alpizar lo buscó para explicarle que estaba sentado en una mina de oro y le ayudó a armar un esquema a través del cual podrían llevar ciertos casos particularmente lucrativos”. Para ello, revela esta fuente, “habrían de enviar a las empresas a cierto tipo de conciliadores, interventores y síndicos”, así como determinados despachos de abogados con los que Bonilla negociaba acuerdos y cargaba los datos hacia alguna de las partes involucradas. Entre los despachos mencionados, uno es Rivera Gaxiola, Kállo, Fernández, Del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca, así como el de Jaime Guerra, con quien tanto Bonilla como Alpizar parecen tener una relación muy cercana.

La evidencia del vínculo con este tipo de bufetes es tan clara que prácticamente han sido los únicos que han asistido a los foros que organiza el Ifecom. Para muestra, una columna de *Milenio* del 3 de mayo de 2023 revela cómo el Consejo de la Judicatura Federal recibió una queja el 24 de abril, identificada con el folio 7374553/2023, referente a un “trato preferencial que se presume otorga el titular del Instituto Federal de Especialistas Mercantiles, Edgar Manuel Bonilla, para hacer trajes a la medida a despachos de abogados como Rivera Gaxiola y Jaime Guerra, vinculados a temas polémicos tipo Cruz Azul, OHL, Oro Negro y Altos Hornos”.⁹

Este vínculo también ha sido evidenciado por el periodista Enrique Rodríguez, quien hizo notar que en abril de 2024 Bonilla había tenido “la desfachatez de convocar a las jornadas concursales del instituto a integrantes de los despachos de Jaime Guerra y Rivera Gaxiola”¹⁰ aun después de que la denuncia anónima hubiese mencionado la cercana relación del titular del instituto

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

6d79669e47c932a1d3b0481fa44223ec7952443e211d624618587b44d153babc61534da226a0e783edb8618dab7a2b8ad1db3ce4bb12644b59ba73d69176fdf9